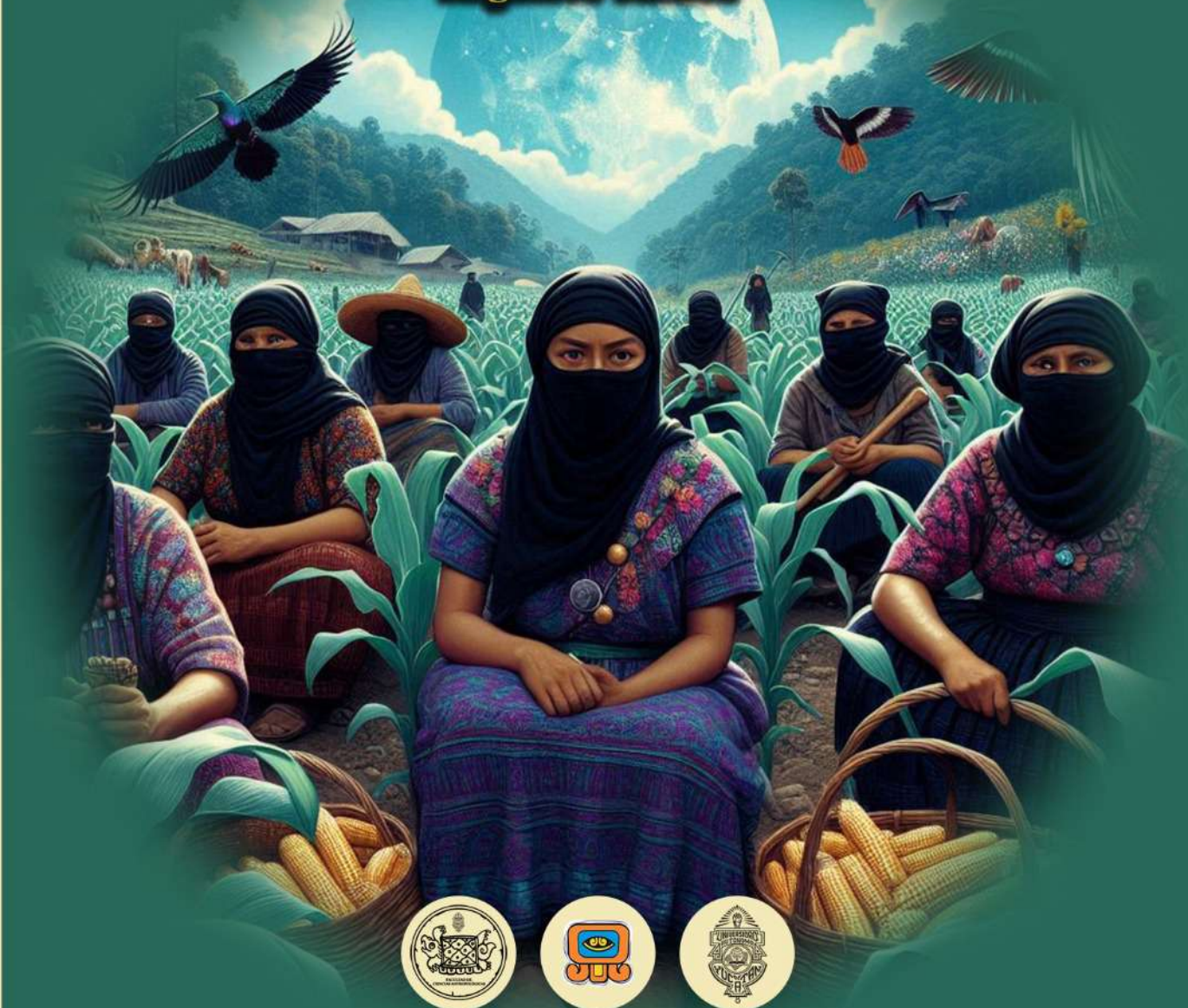


Antrópica

Revista de Ciencias Sociales y Humanidades

Dossier no. 13

“México a 30 años de la rebelión Zapatista.
Algunos saldos”



FACULTAD DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS. UADY

Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades

Año 10, vol. 10, núm. 20 julio-diciembre 2024

Dossier no. 13

México a 30 años de la rebelión zapatista. Algunos saldos



Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades es una revista científica de ciencias sociales y humanidades en formato digital, semestral, fundada por estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. El primer número se publicó en 2015.

La publicación está dirigida a toda la comunidad científica y académica: estudiantes, profesores docentes, investigadoras e investigadores de los campos de la Antropología, Arqueología, Ciencias Políticas, Comunicación Social, Derecho, Economía, Filosofía, Historia, Literatura, Psicología y Sociología. La revista recibirá colaboraciones originales e inéditas, escritas en idioma español y que no estén siendo postuladas de forma simultánea en otras publicaciones, revistas u órganos editoriales.

Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, con el objetivo de fomentar el intercambio global del conocimiento y las ideas, permite el acceso a sus contenidos (tanto de texto como visuales) tanto para descargar, leer, copiar, imprimir y consultar. Si se utiliza algún contenido de forma completa o parcial, hay que citar su procedencia y respetar los derechos de autor.

Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades es una publicación gratuita y no cobra cuotas por la publicación de sus artículos.

La opinión expresada por los autores no necesariamente refleja la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Sitio actual (hasta fines de 2024)

Sitio web: www.antropica.com.mx

Email: revista.antropica@gmail.com

Nuevo sitio web y correo: <https://revistaantropica.uady.mx>

Nueva dirección de correo electrónico: revista.antropica@correo.uady.mx

La revista está incluida en los siguientes índices y bases de datos:



Informacion legal

ANTRÓPICA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, año 10, vol. 10, núm. 20, julio-diciembre 2024 es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Yucatán, México a través de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Km. 1 Carretera Mérida-Tizimín, Cholul, C.P. 97305, Apartado Postal 1405, Correo Centro, Mérida, Yucatán. Tel.: +52 (999) 930 0090 Ext. 2118 <http://www.antropologia.uady.mx/revista/antropica/antropica.php>. Editores responsables: Gabriel Angelotti Pasteur. Número de reserva de derechos al uso exclusivo: 04-2018- 113011041100-203, ISSN 2448-5241, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización, Rodrigo Vences Nava. Facultad de Ciencias Antropológicas., Km. 1 Carretera Mérida- Tizimín, Cholul, C.P. 97305. Fecha de última modificación, 24 de junio de 2024.

Transparencia

Los materiales e insumos necesarios para el proceso de trabajo y publicación (fotocopias, impresiones y papeles) y los mobiliarios (escritorio, teléfono, conexión a internet) son provistos por la UADY y la Facultad de Ciencias Antropológicas. Mientras que los electrónicos (computadoras, escáner, impresora, grabadoras digitales, proyector digital, cámaras de videograbación, cámaras fotográficas, tripies y otros accesorios) fueron adquiridos en proyectos financiados por PRODEP (Secretaría de Educación Pública) y CONACYT, en convocatorias distintas; estando todos ellos inventariados y resguardados por la UADY.

Además, la UADY brinda apoyo legal (mediante el departamento jurídico) y se responsabiliza por el pago para la renovación del nombre de la publicación ante INDEAUTOR. Mientras que la Facultad de Ciencias Antropológicas respalda técnicamente (mediante el departamento de computación) y aporta para el pago de la página web. Cualquier otro gasto adicional que pueda presentarse, en particular relacionados con la promoción y difusión de la publicación, pueden ser solventados por los integrantes del equipo técnico o el Director de la publicación.

Todos los envíos serán sometidos a una evaluación previa por parte del Comité Editorial, quien verificará que el envío cumpla con las Normas Editoriales y los metadatos en el OJS. En caso afirmativo, el trabajo será sometido a un proceso de dictamen conforme a la modalidad que corresponda a la sección enviada (simple o doble par ciego). Además, todos los artículos serán revisados mediante el programa Turnitin

Ilustración de la portada

La presente ilustración fue realizada en una IA por el director de la revista mediante el creador de imágenes de Bing.com.

DIRECTORIO

MTRO. CARLOS ESTRADA PINTO
Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán

DRA. ROCÍO LETICIA CORTÉS CAMPOS
Directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas

DR. GABRIEL ANGELOTTI PASTEUR
Editor de la revista

CUERPO EDITORIAL

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

MAQUETACIÓN
AURORA EUAN COUOH

CORRECCIÓN DE ESTILO
MTRO. GONZALO ROSADO GARCÍA (Universidad Autónoma de Yucatán)

SOPORTE TÉCNICO
MTRO. RODRIGO VENCES NAVA (Universidad Autónoma de Yucatán)

GESTIÓN EDITORIAL
B. ALESSANDRA SOLÍS PÉREZ (Universidad Autónoma de Yucatán)

COMITÉ EDITORIAL

DR. FRAUSTO OSCAR MARTÍNEZ
Universidad de Quintana Roo, Quintana Roo

DRA. PAOLA PENICHE MORENO
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Unidad Peninsular, CIESAS. Mérida, Yucatán. México.

DR. JESÚS LIZAMA QUIJANO
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Unidad Peninsular, CIESAS. Mérida, Yucatán. México.

DR. DAVID DE ÁNGEL GARCÍA
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional
Autónoma de México (CEPHCIS), Mérida, Yucatán. México

DR. MARCO CALDERÓN MÓLGORA
El Colegio de Michoacán (COLMICH), Zamora, Michoacán. México

DRA. ELLA FANNY QUINTAL AVILÉS
Centro Yucatán del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Mérida, Yucatán. México

DRA. MARGARITA ROSALES GONZÁLEZ
Centro Yucatán del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Yucatán. México

DR. LUIS ESCALA RABADÁN
El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Tijuana, Baja California. México

DR. GUILLERMO ALONSO MENESES
El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Tijuana, Baja California. México

DR. CARLOS WELSH RODRÍGUEZ
Universidad Veracruzana. Departamento Centro de Ciencias de la Tierra. México.

COMITÉ ASESOR

DRA. SILVIA VALIENTE

Instituto Regional de Estudios Socio-culturales- IRES; CONICET.
Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Argentina

DR. LUIS ALBERTO SUÁREZ ROJAS

Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Lima, Perú.

DRA. EDNA M. RODRÍGUEZ GAVIRIA

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Colombia

MTRA. GRACIA VIOLETA ROSS QUIROGA

Red Nacional de Personas con VIH en Bolivia (REDBOL), Bolivia

DR. JAIME ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Centro de Educación y Cultura Americana (CECA), Santiago, Chile.

DR. LUIS VÁZQUEZ LEÓN

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Unidad Regional Occidente (CIESAS). Jalisco. México.

DRA. INÉS CORTÉS CAMPOS

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Unidad Peninsular (CIESAS). Mérida, Yucatán. México

DR. ENRIQUE RODRÍGUEZ BALAM

Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional
Autónoma de México (CEPHCIS). Mérida, Yucatán.

DR. JESÚS SOLÍS CRUZ

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México

DR. JOEL FRANCIS AUDEFROY

Instituto Politécnico Nacional. México.

DR. RAYMUNDO PADILLA LOZOYA

Universidad de Colima, Facultad de Letras y Comunicación,
Licenciatura en Periodismo. Colima.

DRA. LOURDES ROMO AGUILAR

El Colegio de la Frontera Norte. Sede Ciudad Juárez (COLEF), Chihuahua. México.

DR. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ESTEVES

El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Tijuana, Baja California. México.

DRA. VANESSA VÁZQUEZ SÁNCHEZ

Museo Antropológico Montané, Facultad de Biología, Universidad de La Habana

DR. ARMANDO RANGEL RIVERO

Museo Antropológico Montané, Facultad de Biología, Universidad de La Habana.

ÍNDICE

2024 JULIO - DICIEMBRE

Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Año 10, Vol. 10, Núm. 20 | ISSN:2448-5241

Carta editorial, índice y datos legales

13

Antrópica: 10 años de compromiso con la divulgación y difusión de la ciencia
Antrópica: 10 years of commitment to the popularization and dissemination of science
por Gabriel Angelotti Pasteur

Artículos académicos

23

Historia transnacional e historia transimperial: dos enfoques para contribuir a la historia global
Transnational history and transimperial history: Two Approaches for Contributing to Global History
por Alejandra Contreras Calcaño

41

Radiografía de la juventud en Chiapas. Problemáticas, transformaciones y desafíos trazados desde las ciencias sociales
Radiography of youth in Chiapas. Problems, transformations, and challenges traced from the social sciences
por Carlos de Jesús Gómez-Abarca

69

“Yo soy el niño Guy”: un sor juanista en la Facultad de Humanidades
“Yo soy el niño Guy”: a Sor Juana expert in the Faculty of Humanities
por Francisco Javier Beltrán Cabrera

85

Tojolabales, fauna y confesionarios del siglo XVIII: una mirada sociohistórica
Tojolabales, fauna and confessionaries of the XVIII century: a sociohistoric look
por Antonio de Jesús Nájera Castellanos

101

La divulgación histórica en YouTube y su papel en la formación de identidades colectivas en un México pluricultural
Historical disclosure on YouTube and its role in the formation of collective identities in a pluricultural Mexico
por Jorge Alejandro Laris Pardo

119

La(s) experiencia(s): cuerpo y política en la investigación feminista antiextractivista
The experience(s): body and politics in anti-extractivist feminist research
por Marianela Gamboa

Legado antropológico

151

El legado etnológico de Heidi Chemin Bassler sobre el pueblo xi'úi (Pame) septentrional
The ethnological legacy of Heidi Chemin Bassler on the northern Xi'úi (Pame) people
por Andrea Cristina Moctezuma Balderas



Dossier

189

Presentación dossier:

La noción de crisis: teoría y política

The notion of crisis: theory and policy

por Héctor Ignacio Martínez Álvarez

197

Crisis, hegemonía y relaciones de fuerzas. Del contexto latinoamericano al caso de Argentina en el siglo XXI

Crisis, hegemony and relations of forces. From the Latin American context to the case of Argentina in the 21st century

por Gastón Ángel Varesi

223

La sociedad mundial poscolonial: una aproximación

Postcolonial World Society: An Approach

por Esteban Torres

257

La centralidad del conflicto en el Estrecho de Taiwán en la relación Estados Unidos-China durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021): hacia la Cuarta crisis del Estrecho

The Centrality of the Taiwan Strait Conflict in the United States-China. Bilateral Relations during the Donald Trump Government (2017-2021): towards the Fourth Strait Crisis

por Gabriel Pérez Pérez y Manuel J. Rocha Pino

283

La doble emergencia en la Ciudad de México durante el COVID-19: la alimentario-nutricional y la sanitaria

The double emergency in Mexico City during COVID-19: the food-nutritional and the health

por Irlanda Libertad Mendoza Pineda

311

La crisis en el sistema de dominación en América Latina: el agotamiento del vigente patrón de reproducción del capital y la derrota del régimen de la transición a la democracia

The crisis in the system of domination in Latin America: the exhaustion of the current pattern of reproduction of capital and the defeat of the regime of transition to democracy

por Héctor Ignacio Martínez Álvarez



Dossier

- 339** **Presentación dossier:**
México a 30 años de la rebelión zapatista. Algunos saldos
Mexico thirty years after the Zapatista rebellion. Some balances
por Jesús Solís Cruz
- 345** **“No nos dejaron otra opción”: la cerrazón política en Chiapas y el alzamiento zapatista, 1988-94**
“They left us with no option”: political closure in Chiapas and the Zapatista uprising, 1988-94
por Neil Harvey
- 371** **Lucha sin límite de tiempo: un balance histórico del zapatismo (1969-2021)**
Fight without time limit: a historical balance of Zapatismo (1969-2021)
por Marco Estrada Saavedra
- 397** **“Nunca más un México sin nosotros”: La defensa neozapatista del Estado y la Nación”**
“Never again a Mexico without us”: The neo-Zapatista defense of the State and the Nation
por John M. Ackerman
- 417** **Nos alimentamos de esperanzas: Chiapas a tres décadas del levantamiento zapatista**
We feed on hope: Chiapas three decades after the Zapatista movement
por Daniel Villafuerte Solís
- 441** **La reinención de los gobiernos purhépechas**
The reinvention of the Purhépecha governments
por José Eduardo Zárate Hernández

Fotografía Etnográfica

- 465** **Imágenes del zapatismo**
Images of Zapatismo
por Carlos de Jesús Gómez-Abarca

Reseñas

- 481** **Reseña del libro: AGUILAR GARCÍA, FRANCISCO JAVIER Y TORRES-RUIZ, RENÉ (Coords.) (2022). Acciones colectivas en el campo global y regional, México, Universidad Iberoamericana-Juan Pablos Editor**
Book review: AGUILAR GARCÍA, FRANCISCO JAVIER AND TORRES-RUIZ, RENÉ (Coords.) (2022). Collective actions in the global and regional field, Mexico, Universidad Iberoamericana-Juan Pablos Editor
por Eduardo Torres Alonso
- 489** **Reseña del libro: DANIEL VILLAFUERTE SOLÍS Y MARÍA DEL CARMEN GARCÍA AGUILAR. 2021. Los avatares de Chiapas. Proyectos, conflictos, esperanzas. CESMECA-UNICACH. Tuxtla Gutiérrez, México**
Book review: DANIEL VILLAFUERTE SOLÍS AND MARÍA DEL CARMEN GARCÍA AGUILAR. 2021. The Avatars Of Chiapas. Projects, Conflicts, Hopes. Cesmecca-Unicach. Tuxtla Gutiérrez, Mexico
por Darinel Genaro Gutiérrez López



Presentación





Presentación Dossier: México a treinta años de la rebelión zapatista. Algunos saldos

Mexico thirty years after the Zapatista rebellion. Some balances

Jesús Solís Cruz

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica,
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

<https://orcid.org/0000-0002-6845-8320>

soliscruz2@gmail.com

Nacieron bajo el signo de lo improbable, incluso, de lo aleatorio. Hace treinta años, públicamente; cuarenta en la clandestinidad. De entonces hasta hoy le han seguido innumerables epítetos: *trasnochados*, *revolucionarios conservadores*, *guerrilla posmoderna*, *vanguardia social*, entre otros.

En la región latinoamericana era aquel el tiempo del comienzo del ensanchamiento de la apertura del libre mercado, del ascenso de la doctrina neoliberal; junto con esta, en el ámbito político, la modernidad democrática y su faceta procedimental. El año: 1994. Inconciliable y tiranteado por visiones políticas de distinto signo en pugna. Visiones de país y mundo confrontadas. De un lado la institucional, proveniente y depositaria de las recetas del *mainstream* global; de otro lado la que en sentido contrario, con ecos de guerra, llamaba a instaurar una sociedad que para ese tiempo, el modelo, resonaba anacrónica y superada.

Espacio y tiempo fueron objeto de un proceso que se avizoró radical para las condiciones sociales imperantes en aquel país y en aquel sureño continente: Chiapas. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), declaró la guerra al gobierno y a sus fuerzas militares y policiales. Año de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Año revuelto para México, en el que obraron con particular empeño, en búsqueda de la inflexión de las condiciones sociales y políticas, actores variopintos. No en el mismo sentido. En radical disposición los zapatistas reclamaron, además de sustento material elemental en su Primera Declaración, democracia y libertad.

Resguardadas en el anonimato y el privilegio del poder institucional operaron, en sentido contrario, las fuerzas políticas gubernamentales para mantener el curso de las cosas. En los hechos, la acción de las fuerzas política institucio-

nales, para sostener el círculo del viciado sistema político, cobró la forma de un magnicidio. El 23 de marzo de 1994 fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México. En la conmoción que esto significó, confortó al común la idea del sacrificio del candidato por su actitud disruptiva ante el poder. Con todo, la posibilidad de la acción política radical estaba plantada y en esto, en este nuevo momento, los zapatistas fueron protagonistas.

Este dossier explora y busca entender -siguiendo de manera libre los planteamientos de Jacques Ranciere- la acción política como un momento de intervención sobre el orden existente para recomponer el repartimiento de lo común (sensible). Es decir, explora la acción política del EZLN, las circunstancias políticas que la hicieron posible, sus condicionamientos históricos, sociales y culturales y su devenir a treinta años de su irrupción pública. Aquí se reúnen cinco textos fundados en detenidas reflexiones y lecturas de la realidad social que no han tenido como protagonistas directos a los zapatistas por sí mismos, sino a estos en su situación histórica y sus condiciones sociales.

Abre este dossier el artículo de Neil Harvey, quien antes de que la irrupción armada indígena y campesina de 1994 en Chiapas tuviera notoriedad pública internacional, se había dado a la tarea de registrar y analizar, desde la década de 1980, las condiciones sociales y políticas de la vida rural en Chiapas, así como las formas organizativas creadas en las comunidades campesinas e indígenas para hacer frente a estas que, de entonces a hoy, no les han sido favorables. El artículo, apoyado en un amplio registro etnográfico y en fuentes secundarias, sitúa las claves para entender la realidad sociopolítica de una entidad federativa lastrada por atrasos económicos crónicos y por una clase política gobernante incapaz de gestionar el conflicto social derivado de las mismas condiciones económicas adversas. Contrario al planteamiento de que el empeoramiento de las condiciones materiales conduce al descontento social y a la lucha armada revolucionaria, Neil Harvey sitúa la idea de que la opción armada, en el Chiapas de las décadas de 1980 y 1990, era una que se pudo haber evitado de haber existido voluntad política de la clase gobernante para transformar las condiciones sociales. Una tesis sugerente a la vista de las actuales y las persistentes condiciones sociales, políticas y económicas de Chiapas.

Marco Estrada Saavedra en su colaboración propone una lectura compleja de lo que hoy conocemos como zapatismo/neozapatismo. Esta complejidad analítica está fundada en una visión histórica que se propone remontar la inmediatez del estudio político coyuntural. En esta línea, Estrada Saavedra registra los procesos de cambio en la composición, organización y objetivos del zapatismo. Nos remonta a los antecedentes más lejanos del movimiento zapatista, ubicando como su ascendente a las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) fundadas en Nuevo León en 1969 pasando por la creación del foco guerrillero en Chiapas en

1983, para después mostrarnos los cambios y expresiones del movimiento en el *ensamblaje holgado* (usando las palabras del mismo autor) *entre el neozapatismo (es decir, su organización militar, política y civil) y el movimiento de solidaridad prozapatista*. Interesa, como se anuncia en el título del artículo de Marco Estrada, mostrar cómo el zapatismo, como acción colectiva, ha mantenido una *lucha sin limite* temporal, aunque no exento, como cualquier otro actor colectivo, de limitaciones, cambios y desatinos políticos. Concluye el artículo con una trinidad paradójica del zapatismo. Que dicho sumariamente refiere, la primera, a la condición del movimiento agrario armado; la segunda a la reproducción de la hegemonía estatal en los planteamientos zapatistas y la tercera a las prácticas políticas al interior del mismo movimiento zapatista.

El tercer artículo que integra este dossier es de la autoría de John Ackerman. En un estilo de ensayo político, Ackerman nos lleva a la que fue, quizás, una de las polémicas más relevantes generadas al fragor de la confrontación política entre el zapatismo y el gobierno federal: la intención separatista del Estado y la Nación del movimiento ezelenita. Usando como material de análisis las seis Declaraciones de la Selva Lacandona del EZLN, Ackerman avanzará sobre la tesis de que más allá de la innovación política, adornada con lenguaje lírico y persuasivo, e incluso de las aspiraciones futuro-posmodernas de sus propios seguidores, el EZLN es un actor político de condición moderna por reclamar la dignificación del Estado y defender a la Nación. Condición no demeritoria, dirá Ackerman, sino potente porque desde esa reclamación han contribuido a los procesos de cambio político en el país. El artículo cierra con un análisis de las convergencias y distancias entre el EZLN y el *obradorismo*. Hace notar cómo les acercan algunos principios políticos compartidos y les distancian métodos y espacios de actuación.

El cuarto artículo es autoría de Daniel Villafuerte Solís. En este el autor vuelve la mirada sobre algunas de las demandas y condiciones socioestructurales que dieron cauce a la irrupción armada de 1994 en Chiapas. Refiere al capital social construido en la entidad desde la década de 1960, concentrado en organizaciones sociales que buscaron modificar las correlaciones políticas en sus entornos, y en esa medida modificar también las condiciones materiales de sus integrantes. De la experiencia organizativa acumulada deviene la formación del movimiento ezelenita, y de los frustrados logros de transformación la profundización de las incertidumbres para la población. Con detenimiento, Villafuerte Solís analiza las condiciones sociales y económicas actuales de Chiapas, para evaluar los saldos a treinta años de la irrupción del EZLN. Pese a los recambios políticos en el país: “Parece que el tiempo se ha detenido en Chiapas, y por más que se agiten las aguas, el estado permanece en el mismo lugar”, afirma el autor. Los datos son contundentes: el número de pobres ha crecido, el acceso a los servicios de salud no solo persiste como carencia, sino que se ha duplicado, al igual

que se sostiene el rezago educativo. A lo anterior se agrega, nos dirá el autor, la migración como parte de estas mismas condiciones críticas, y la violencia derivada de la presencia de grupos vinculados al crimen organizado. La conflictividad social y política se agudiza y las condiciones materiales persisten. Una realidad lacerante para una entidad golpeada crónicamente por la pobreza.

José Eduardo Zárate Hernández en su artículo analiza la experiencia de los autogobiernos en la meseta purhépecha michoacana. Su propósito es describir y analizar las formas y procesos por los cuales diversas comunidades en la meseta purhépecha, han logrado hacer valer el derecho a gobernarse, según sus usos y costumbres; un derecho reclamado por el EZLN en la mesa de negociación con el gobierno federal. Aunque en términos estrictos este derecho, constitucionalmente reconocido hoy, no recoge los planteamientos derivados del acuerdo suscrito entre el EZLN y el gobierno federal plasmados en los llamados Acuerdos de San Andrés y en consecuencia no tiene apego al planteamiento autonómico de los zapatistas; el mismo se ha constituido en una valiosa estrategia política para distintos pueblos indígenas en el país para hacer frente a acciones de despojos territoriales, expoliaciones y amenazas del crimen organizado; del mismo modo en que ha servido como estrategia para dirimir internamente o profundizar diferencias políticas. En el caso de Michoacán el derecho a la autodeterminación ha permitido a una multiplicidad de pueblos acceder al presupuesto directo, generando con esto nuevas y variadas dinámicas de relación política tanto al interior de las mismas comunidades como con el municipio, el cual fue hasta hace poco la única autoridad de determinar el uso y destino de ese presupuesto. A resultas de este cambio, hoy el municipio, como entidad de gobierno, se encuentra en un desafío y la pregunta que se sitúa en el trabajo de Zárate Hernández es si el camino será avanzar hacia el reconocimiento formal del cuarto nivel de gobierno.

También componen este dossier un ensayo fotográfico y dos reseñas de libros. El ensayo fotográfico a cargo de Carlos de Jesús Gómez Abarca reúne una serie de imágenes que tienen como motivo central al movimiento zapatista. Han sido registradas en diversos puntos de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, espacio emblemático del mismo movimiento zapatista, y con independencia de su forma o composición resultan relevantes, como afirma Gómez Abarca, porque en el marco de un movimiento social generan identidad y forman parte de los *repertorios* de protesta.

Finalmente, se reseñan dos libros. Uno de estos, reseñado por Eduardo Torres Alonso, trata de los movimientos sociales. En él se revisan experiencias de movilización social en diversas escalas espaciales, así como los diversos abordajes teóricos sobre los movimientos sociales. La obra reseñada se titula: *Acciones colectivas en el campo global y regional*, y ha sido coordinada por René Torres Ruiz y Francisco Javier Aguilar, publicada bajo el sello editorial de la Universi-

dad Iberoamericana y Juan Pablos editor. El segundo libro reseñado es de la autoría de María del Carmen García Aguilar y Daniel Villafuerte Solís, titulado *Los avatares de Chiapas. Proyectos, sueños, esperanzas*, editado por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. La reseña, a cargo de Darinel Gutiérrez, destaca, entre otras virtudes, la riqueza analítica del libro que permite comprender la complejidad social de Chiapas hoy.

Como toda obra académica, queda este dossier a disposición del lector, abrigando la esperanza de que pueda aportar elementos a la comprensión del propósito de vida mejor que emprendieron, hace ya algunas décadas, mujeres y hombres en Chiapas y en México. Si al lector interesado logramos generarle una duda, una reflexión o una nueva idea sobre la posibilidad de la acción política radical, en los tiempos que corren ahora en nuestro país, el cometido de esta obra estará logrado.

Hacer posible el diseño de este dossier requirió sumar la buena disposición de los autores, quienes aportaron sus ideas escritas en cada texto y asumieron con total apertura las revisiones críticas de los dictaminadores; también fue valiosa la disposición del director de la revista, quien abrazó la idea de esta colaboración desde el primer momento; enviamos un reconocimiento especial por la colaboración esmerada de Irma Medina Villafuerte quien, como editora profesional, ha aportado sus conocimientos y habilidades para el diseño gráfico de esta obra.

Artículos





“No nos dejaron otra opción”: la cerrazón política en Chiapas y el alzamiento zapatista, 1988-94

“They left us with no option”: political closure in Chiapas and the Zapatista uprising, 1988-94

Neil Harvey

Department of Government, New Mexico State University (Estados Unidos)

<https://orcid.org/0009-0000-7501-1458>

nharvey@nmsu.edu

Recibido: 22 de marzo de 2024

Aprobado: 7 de junio de 2024

Resumen

El objetivo principal de este artículo es demostrar que el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994 se explica en parte por el contexto político y social crecientemente adverso en que vivía gran parte de población indígena y campesina en Chiapas durante la década de los ochenta y principios de los noventa. Examina los alcances y limitaciones del discurso gubernamental de concertación adoptado por el gobierno entre 1988 y 1994 y las formas en que el gobierno estatal intervino con el uso de la fuerza represiva para proteger los intereses de terratenientes y asociaciones ganaderas. El artículo se basa en investigación cualitativa, incluyendo la revisión hemerográfica, el análisis de fuentes secundarias y entrevistas realizadas por el autor con dirigentes campesinos en Chiapas entre 1991 y 1993. El análisis encuentra que la cerrazón del gobierno estatal, aunado a la implementación de reformas neoliberales, agudizaron las tensiones políticas en Chiapas. Este artículo nos permite concluir que, entre los muchos factores que explican el alzamiento zapatista, es imprescindible tomar en cuenta la cerrazón política y la violación de los derechos humanos que, en palabras de los zapatistas, no les dejaron otra opción más que rebelarse contra la miseria y el olvido.

Palabras claves: EZLN, Zapatistas, Chiapas, Movimientos Campesinos e Indígenas, Derechos Humanos, Concertación, Represión

Abstract

The main objective of this article is to demonstrate that the Zapatista uprising of January 1st, 1994, is explained in part by the increasingly adverse political and social context in which a large part of the indigenous and peasant population lived in Chiapas during the 1980s and early 1990s. It examines the scope and limitations of the government's discourse of consensus-building adopted between 1988 and 1994 and the ways in which the state government intervened with the use of repression to protect the interests of landowners and cattle ranchers' associations. The article is based on qualitative research, including the review of newspaper articles, analysis of secondary sources and interviews conducted by the author with peasant leaders in Chiapas between 1991 and 1993. The analysis finds that the closed political stance of the state government, coupled with the implementation of neoliberal reforms, exacerbated political tensions in Chiapas. The article allows us to conclude that, among the many factors that explain the Zapatista uprising, it is essential to consider the political closure and the violation of human rights that, in the words of the Zapatistas, left them no other option than to rebel against misery and oblivion.

Keywords: EZLN, Zapatistas, Chiapas, Peasant and Indigenous Movements, Human Rights, Consensus-Building, Repression.

Introducción¹

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) está celebrando dos aniversarios: 40 años desde su fundación en Chiapas el 17 de noviembre de 1983 y 30 años desde su alzamiento el 1º de enero de 1994. Mucho se ha escrito sobre las causas de esta rebelión y sus impactos en la vida local, nacional e internacional (Baronnet, Mora y Stahler-Scholk, Coords., 2011; Baschet, 2018, 2022; Benjamin, 1995; Cerda, 2011; Estrada 2007; Estrada y Viqueira, Coords., 2010; EZLN, 1994, 1995; Gilly, 1997; González Esponda y Pólito Barrios, 1995; Harvey, 2000, 2016, 2019; Hernández Millán, 2007; Higgins, 2004; Le Bot, 1997; Legorreta Díaz, 1998; Leyva Solano, 1999; Mattiace, Hernández Castillo y Rus, 2002; Mora, 2018; Muñoz Ramírez, 2008; Olesen, 2005; Revista de la Universidad, 2023; Rovira, 1997; Tello Díaz 2013; Viqueira y Ruz, Coords., 1995; Villafuerte & García Aguilar, 2021). Es muy difícil resumir en un artículo lo que sabemos sobre los orígenes del zapatismo y su desarrollo hasta nuestros días, pero es evidente que la larga historia de discriminación, explotación, y pobreza sufrida por la población indígena y campesina de gran parte de Chiapas siempre ha sido resistida en diferentes momentos y formas. Un texto escrito por el Subcomandante Marcos en 1992 y publicado después de la rebelión dos años más tarde describe la larga lista de agravios hacia las comunidades indígenas en Chiapas para quienes las principales actividades económicas y obras de infraestructura civil y militar significaban el despojo, la muerte, y el olvido (Subcomandante Marcos, 1994).

La construcción de nuevas presas hidroeléctricas, la explotación de pozos petroleros, la tala inmoderada de la selva lacandona, la expansión de la ganadería como política estatal y nacional, el acaparamiento de las mejores tierras por familias de terratenientes ligadas al gobierno del estado, los salarios bajos, las constantes crisis de los precios del café, el desempleo, la migración forzada, las muertes por enfermedades curables, el maltrato hacia las mujeres, la falta de acceso a la educación y servicios de salud, la violencia a manos de finqueros y sus pistoleros – las guardias blancas, todo ello llevó a la expresión de un descontento social que, para mediados de los setenta empezaba a superar su aislamiento al formarse nuevas organizaciones regionales de lucha. Al mismo tiempo, la organización clandestina por parte de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) de un núcleo guerrillero en la selva lacandona a partir de 1972 llevó, con mucha paciencia y capacidad de sobrevivir los embates de la guerra sucia de la década de los setenta, a vincularse con dirigentes campesinos y los propios procesos de organización local que imprimieron su sello particular en la formación, estructura, y desarrollo del EZLN (Castillo y Brisac, 1995; EZLN, 1995, p.131; García

¹ Agradezco a los editores de la Revista Antrópica por su invitación a colaborar con la entrega de este texto, a los tres dictaminadores por sus comentarios valiosos, y a Wendy Harvey por su ayuda en la corrección de estilo y por su acompañamiento y apoyo en la investigación de los movimientos campesinos y el zapatismo en Chiapas.

de León 1994, pp. 26-28; Harvey 2000, pp. 177-180; Hernández Millán 2007, p. 275; Le Bot 1997, pp.142-152).

Estos procesos de modernización excluyente y resistencias campesinas fueron marcados por diversos intentos de abrir nuevos espacios de interlocución entre autoridades del gobierno y comunidades cada vez más organizadas y sabedoras de sus derechos agrarios, laborales, y políticos. La década de los ochenta vio la consolidación de organizaciones independientes en el campo chiapaneco, mientras por su parte el EZLN crecía en la clandestinidad.

Tomando en cuenta la existencia de una gran multiplicidad de factores, este artículo plantea que una de las razones por las cuales muchos campesinos indígenas decidieron participar en el EZLN fue la falta de voluntad política del gobierno para realmente atacar las condiciones de marginación y pobreza en el estado, lo cual fue expresado por una limitada política de concertación con las nuevas organizaciones independientes y su posterior desplazamiento hacia una política abiertamente represiva. Cuando, en 1993, los zapatistas votaron a favor de declarar la guerra y preparar el alzamiento armado, consideraron que la situación de pobreza, olvido y marginación, (junto con la cerrazón política y los efectos negativos asociados a las reformas al Artículo 27 constitucional, las políticas neoliberales y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN), no les dejó otra opción. No fue la única respuesta a las condiciones sociales prevalentes dado que otras organizaciones populares decidieron seguir luchando con sus propios métodos de negociación y movilización con la esperanza de hacer que el gobierno aceptara una nueva interlocución como muestra del cambio anunciado oficialmente de un modelo paternalista hacia una relación más de concertación y respeto hacia las nuevas organizaciones independientes. Sin embargo, para las comunidades que se formaron en las filas del EZLN desde su fundación en 1983, fue el mismo gobierno, con sus acciones de abandono, represión, y división, quien cerró las puertas a dichas posibilidades. En todo caso, hay que tomar en cuenta la diversidad de posibles razones a favor y en contra de la participación en el alzamiento armado y no concluir que se debieron a un solo factor.

El aporte original que pretende hacer este artículo que complementa a los otros muchos trabajos publicados sobre el zapatismo radica en el hecho de haber realizado una investigación extensiva de trabajo de campo en Chiapas en los años anteriores al alzamiento de 1994 cuando las condiciones socioeconómicas y políticas adversas descritas en este texto fomentaban la expresión de mucho descontento por parte de diversos movimientos campesinos e indígenas durante el periodo de organización clandestina del EZLN. Al autor le tocó vivir estos años en Chiapas como investigador académico, primero en 1987 y luego en 1991-93, produciendo varias publicaciones sobre los cambios y continuidades en las relaciones entre el Estado mexicano y los movimientos campesinos e indígenas de la época, lo cual he actualizado en los años subsecuentes debido a varias estancias de investigación en

Chiapas entre 1994 y el presente momento (Harvey, 1995, 1997, 2000, 2016, 2019, 2023a, 2023b). Cabe señalar que en el mismo periodo previo al '94 varios investigadores habían publicado, o estaban en proceso de publicar, textos sobre las luchas campesinas e indígenas en diferentes puntos del estado que también resaltaban los problemas de marginación y represión a que fueron sujetas muchas comunidades en Chiapas en la década de los ochenta (por ejemplo, Burguete Cal y Mayor, 1987; González Esponda, 1989; Leyva Solano y Ascencio Franco, 1993; Marion Singer, 1984; Morquecho, 1994; Ovalle Muñoz, 1984; Pontigo Sánchez, 1985; Renard, 1985; Reyes Ramos, 1992; Rubio López, 1985).

Por mi parte, a través de entrevistas realizadas entre 1987 y 1993 a dirigentes y miembros de diversas organizaciones (la Organización Campesina Emiliano Zapata, OCEZ (tanto de la zona centro como la parte afiliada a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, CNPA); la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesino, CIOAC; la Asociación Rural de Interés Colectivo, ARIC Unión de Uniones; la Unión de Ejidos de La Selva; y el Movimiento Campesino Regional Independiente, MOCRI), pude constatar lo difícil que era luchar por los derechos agrarios, laborales, y políticos desde la oposición y fuera de los canales oficiales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En este texto incluyo referencias más precisas sobre el conflicto entre una de estas organizaciones, el MOCRI, y el gobierno del estado de Chiapas, en la región de Marqués de Comillas. Conocí a los dirigentes de esta organización durante una asamblea de la OCEZ-CNPA realizada en el municipio de Frontera Comalapa en diciembre de 1991 y acepté su invitación a conocer la problemática en sus comunidades que forma parte de este texto debido a la forma que ilustra las condiciones prevalentes en Chiapas en los años anteriores al alzamiento zapatista. Dado que gran parte de los trabajos publicados sobre el zapatismo fueron escritos después del '94 sin haber hecho trabajo de campo previo al alzamiento, un aporte del presente artículo es precisamente el hecho de que los testimonios de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas fueron recabados por el autor en el momento de su propio proceso de lucha antes de 1994.²

Temas centrales y organización del texto

“Para lograr la modernización rural de Chiapas, es condición esencial la participación de los campesinos, como actores directos de su propia realidad.” (Se-

2 En este sentido, el texto nos remonta a este periodo con información compartida por dirigentes del MOCRI con el autor en la asamblea realizada en diciembre del 1991 y durante el recorrido de doce horas en camión por la ruta de Comitán-San Cristóbal de Las Casas-Ocosingo-Palenque-Benemérito de Las Américas en donde terminaba el asfalto, y luego otras ocho horas de camino en terracería a los ejidos en donde realizamos varias asambleas organizadas por el MOCRI, incluyendo en la comunidad de Flor de Cacao para recabar testimonios de primera mano de los pobladores. Estas entrevistas continuaron durante los primeros seis meses del 1992 en distintos puntos de la Ciudad de México, incluyendo la central camionera TAPO y en las instalaciones de la Sección 9 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), en donde se realizaron varios encuentros para discutir las reformas rurales del gobierno de Carlos de Gortari y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Menciono estos hechos para dar cuenta de la investigación de campo que sustenta este texto y, de paso, demostrar la participación de movimientos sociales chiapanecos en las grandes discusiones nacionales sobre el neoliberalismo, el TLCAN, y sus posibles impactos en el campo.

cretaría de la Reforma Agraria, Subdelegación de Concertación Agraria [SRA], 1989, p.1). Estas palabras reflejaron el discurso oficial del gobierno de Carlos Salinas de Gortari al inicio de su periodo presidencial (1988-94) en cuanto a una nueva relación entre el Estado y los campesinos, no solo en Chiapas sino en todo el país. Según los arquitectos de este nuevo discurso, el gobierno buscaba legitimar sus políticas de desarrollo rural al distanciarse de las formas paternalistas y asistencialistas que caracterizaban al Estado populista, abriendo así la posibilidad de modernizar el campo por mecanismo de concertación con organizaciones campesinas que no estaban subordinadas al partido dominante de aquel entonces, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el caso de Chiapas, dichas organizaciones habían surgido de diversas luchas agrarias y por el control del proceso productivo en distintos puntos del estado desde mediados de los setenta, acompañadas en distintos grados y momentos por personal de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, la cual estaba encabezada por el Obispo Samuel Ruiz García. Por ejemplo, para 1988 tres organizaciones gozaban de una presencia innegable en el escenario político local: la Asociación Rural de Interés Colectivo – Unión de Uniones Ejidales y Grupos Solidarios de Chiapas (ARIC-UU) con mayor presencia en los municipios de Ocosingo, Altamirano, y Las Margaritas (ubicados en la región de la Selva Lacandona); la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) con diferentes facciones en los Valles Centrales, la zona norte, y la zona fronteriza; y la Central Independiente de Organizaciones Agrícolas y Campesinas (CIOAC), con mayor presencia en la zona norte y en la zona fronteriza. Estas organizaciones llegaban a competir con la Confederación Nacional Campesina (CNC), la principal confederación oficial que organizaba el apoyo incondicional al PRI en el campo mexicano desde su fundación en 1938.

Estas mismas organizaciones también habían logrado crear alianzas nacionales con otros movimientos en distintos estados de la República (la ARIC-UU participaba en la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA; una parte de la OCEZ participaba en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) mientras otra facción se identificaba más con el Frente Nacional Democrático Popular (FNDP); y, los grupos locales de la CIOAC participaban en la CIOAC nacional. Por todas estas razones, las organizaciones independientes no eran bien vistas por un gobierno estatal que se caracterizaba por su incuestionable defensa de los intereses de terratenientes y comerciantes, como veremos más adelante en el caso de Patrocinio González Garrido (1988-1993). Los intentos de concertación federal con nuevas organizaciones estaban, en cierta medida, en contradicción con la continuidad de prácticas autoritarias de autoridades estatales y municipales.

Si en un primer momento hubo esperanzas de resolver viejos conflictos agrarios por la vía de la concertación, para 1991 la situación se había tornado

menos alentadora debido a una serie de nuevos conflictos que el gobierno estatal intentó resolver con la fuerza. La agudización de los conflictos políticos entre el gobierno del estado y la Diócesis de San Cristóbal demostró la falta de voluntad política para poner en práctica la concertación con nuevos interlocutores campesinos e indígenas que no formaban parte de las estructuras del corporativismo del PRI. Es por este contexto que se explica en parte la atracción que tuvo en muchas comunidades la opción del EZLN de prepararse para un levantamiento armado, lo cual sucedió el primero de enero de 1994. Otros factores importantes para entender el crecimiento del EZLN fueron la lucha de las mujeres indígenas por la igualdad y mayor respeto dentro de sus familias, comunidades, y la misma organización, y la sensación entre muchos jóvenes indígenas de que su acceso a la tierra y a una vida digna estaban amenazados por la represión y la falta de respuestas a las demandas presentadas por las organizaciones independientes en que militaban adultos de sus comunidades incluyendo a sus propios padres (Hernández Castillo y Zylberberg Panebianco, 2004; Marcos, 2011; Olivera, 2004; Pérez Ruiz, Coord. 2004; Speed, Hernández Castillo y Stephen 2006).

¿Dónde quedó la concertación en Chiapas? ¿Cuáles fueron sus alcances y limitaciones? ¿Cuáles eran los motivos de los conflictos que rebasaron la política de concertación y que desembocaron en la represión violenta hacia dirigentes y miembros de comunidades y organizaciones independientes? Este texto busca dar respuestas a estas preguntas, poniendo énfasis en las causas principales del descontento social que se iba generando en los años y meses previos al alzamiento zapatista, es decir, los conflictos agrarios y ecológicos, aunados a la respuesta represiva que dio el gobierno estatal a estos conflictos en su afán de proteger los intereses de terratenientes, ganaderos, y caciques locales.

El artículo está dividido en seis secciones. La primera examina los alcances y las limitaciones de la concertación en Chiapas en el sexenio de 1988-94, enfatizando el auge de una política más represiva que concertadora a partir de 1990, que se expresó en el trato oficial que se les dio a los conflictos agrarios, en el manejo del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), y en el cambio de política forestal por un decreto de veda en la Selva Lacandona. La segunda y tercera partes analiza los efectos de un decreto de veda forestal en la selva lacandona, tomando el caso de la zona de Marqués de Comillas como ilustrativo de los conflictos generados por este decreto, incluyendo el descontento campesino, la movilización, y su represión violenta por parte de las fuerzas del orden en 1991. La cuarta sección describe la forma en que, al igual que en Marqués de Comillas, los conflictos sociales locales se convirtieron en conflictos políticos de mayor envergadura debido a la cerrazón política del gobierno estatal a partir de 1991, llevando a fuertes tensiones entre este y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. La quinta parte resalta la atención nacional a los conflictos en Chiapas que logró ganar la marcha indígena conocida como Xi'Nich en 1992, mientras la sexta parte

nos muestra dos acontecimientos que resultaron ser indicadores de una rebelión anunciada: la marcha de la Alianza Nacional Campesina Independiente Zapatista (ANCIEZ) el 12 de octubre de 1992 en San Cristóbal de Las Casas, y el choque ocurrido entre elementos del ejército mexicano y las fuerzas del EZLN en la Sierra de Corralchén en mayo de 1993. En las conclusiones, se presenta un resumen de los principales argumentos de este artículo sobre la situación política y social que prevalecía en Chiapas, como un aporte a nuestra comprensión acerca de las razones por las cuales el EZLN decidió levantarse en armas el 1 de enero de 1994.

1. Los alcances y limitaciones de la concertación

La palabra “concertación” se convirtió en aspecto central del discurso político de Salinas al inicio de su sexenio. Para un presidente cuya elección fue fuertemente criticada debido al fraude electoral de julio de 1988, no le quedaba otro remedio que ir construyendo nuevas bases de apoyo tanto en la ciudad como en el campo. Aunque se dio mayor énfasis a la concertación con grupos del movimiento urbano popular y con el magisterio, no era menos presente el discurso concertador en los medios rurales. Retomando los conceptos de autonomía asociativa y de la participación comunitaria elaborados por algunos teóricos de la llamada “apropiación campesina de los procesos productivos,” el gobierno federal comenzó el sexenio prometiendo una nueva relación entre las instituciones públicas y las organizaciones campesinas (Gordillo 1988).

Un documento de la Subdelegación de Concertación Agraria de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en Chiapas da cuenta de la preocupación oficial por la inestabilidad social provocada por los conflictos agrarios. Dicho documento señala que “la cuestión agraria es el más grave y el más injusto de los problemas que afectan a los chiapanecos; de su solución depende en forma decisiva sentar las bases de estabilidad política y de justicia social en los núcleos agrarios más pobres del estado.” (SRA 1989: 1). Entre los factores que contribuyeron a generar disputas por la tierra desde principios de los setenta, es significativo que este documento reconoció la política paternalista que caracterizaba la actuación gubernamental. Otros factores mencionados en su informe fueron: los cambios en las relaciones económicas en el medio rural; el incremento de la población campesina; el deterioro de la calidad de la tierra dotada a los campesinos; la ganaderización de la economía rural; la construcción de presas hidroeléctricas; la migración hacia otros estados de la República; la crisis económica; el rezago agrario; una reforma agraria aislada del proceso de desarrollo agropecuario; y, los problemas de comercialización debido a la incomunicación de muchas comunidades campesinas.

En cuanto al paternalismo, una expresión de este fue la política de compra de tierras en zonas de agudo conflicto agrario. Con la compra de tierras se evitaba afectar los intereses de los grandes terratenientes quienes aprovecharon

la oportunidad de vender tierras de forma fraudulenta (SRA 1989: 1). Lo peor de esta situación fue el hecho de que se adquirieron terrenos para un grupo, mientras que había otros campesinos en posesión de estos mismos predios. Tal fue el caso de comunidades indígenas en el municipio de Simojovel, donde la confusión con respecto a la tenencia legal de la tierra produjo conflictos violentos entre grupos de la CNC y de la CIOAC y otras organizaciones. Este tipo de conflicto rebasó el ámbito local en varias ocasiones y repercutió en los conflictos políticos entre el gobierno estatal y la Diócesis de San Cristóbal, llegando incluso a la detención en septiembre de 1991 del párroco de Simojovel, Joel Padrón, por las disputas entre cenecistas y afiliados de la CIOAC por la posesión de los mismos terrenos.

Además, la valoración de las tierras se hizo muy por encima de su precio real. En otras ocasiones, los finqueros inventaban invasiones de su propiedad para exigir que el gobierno les comprara la tierra “en disputa,” cuando en realidad no había ningún conflicto. Así fue como el paternalismo iba acompañado de la corrupción y, en vez de resolver problemas, la compra de tierras los agudizaba más. Frente a esta situación la Subdelegación de Concertación Agraria lamentaba que las “prácticas paternalistas para resolver los asuntos relativos a las demandas de los campesinos les hacen perder las capacidades originales que les caracteriza para resolver sus asuntos, en un intento de castrar la iniciativa y voluntad autogestiva de los campesinos.” (SRA 1989, p.1).

Otro ejemplo acerca de la falta de solución real a las demandas agrarias en este periodo fue el caso de la comunidad de El Carrizal en el municipio de Ocosingo, debido a conflictos por la tierra entre pobladores de El Carrizal y los de la comunidad colindante de Tomás Munzer. La negativa a su solicitud de dotación llevó a los primeros, quienes participan en la OCEZ, a invadir terrenos ya en posesión de campesinos afiliados a la CNC. La solución que se dio consistió en la entrega al grupo de la OCEZ en El Carrizal de varios predios en disputa a cambio de la compra de otros predios que forman el poblado “Los Quiniches” de Ocosingo, de la CNC. Sin embargo, la disputa por estas tierras siguió y en varias ocasiones los cenecistas atacaron al poblado de El Carrizal.

Aunque el gobierno del estado intentó resolver los problemas agrarios en estos casos, su proyecto inicial de concertación dejó afuera a muchos otros solicitantes. Según la propia subdelegación, en 1989 había un total de 547 solicitudes agrarias pendientes a nivel estatal, representando a 22,598 campesinos. De esta forma, dar una solución parcial al rezago agrario no era más que una estrategia selectiva y, por lo tanto, insuficiente. Era de esperarse que, una vez atendidas (incluso mal atendidas) las demandas de los grupos seleccionados para el programa de concertación agraria, aparecerían nuevos conflictos en otras partes del estado. Al mismo tiempo, la represión a dirigentes independientes continuó. En diciembre de 1988 fue asesinado Sebastián Pérez López, el líder de la CIOAC en Simojovel, por pistoleros al mando de un finquero local.

Luego, el 6 de marzo de 1989 fue asesinado en Tuxtla Gutiérrez Arturo Albores Velasco, dirigente de la OCEZ-CNPA.

A partir de 1990 se agudizaron los conflictos agrarios en Chiapas y el discurso concertador fue rápidamente desplazado por una política intransigente y coercitiva. Dos factores adicionales influyeron en este cambio de la concertación a la represión. En primer lugar, la hostilidad del gobernador González Garrido a la creciente influencia de funcionarios del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), una de las iniciativas más centrales del gobierno federal durante el sexenio salinista, y, segundo, el cambio de la política forestal en Chiapas con el decreto en 1989 de una veda que no tomó en consideración la falta de alternativas económicas para muchas comunidades rurales. Considerando estos factores en detalle, nos damos cuenta de los obstáculos políticos que enfrentaron los intentos de concertación y, con ello, hicieron más atractivo para muchos campesinos indígenas participar en las filas zapatistas.

Para el gobierno federal, el Instituto Nacional Indigenista (INI) era el mecanismo privilegiado para poner en práctica los programas asistenciales de PRONASOL en Chiapas. Varios de estos programas buscaron abrir un espacio para que las organizaciones campesinas independientes, sobre todo las que mostraban capacidades de autogestión productiva y comercial, pudieran acceder a nuevos recursos y asistencia técnica. Al igual que el programa de concertación agraria, el PRONASOL también fue limitado por un gobernador renuente a dejar que una nueva burocracia federal interviniera en la política local, y mucho menos cuando se trataba de canalizar recursos a organizaciones que no estaban bajo su control. Por ejemplo, en 1990 el director regional del INI en Las Margaritas fue destituido de su cargo por el gobernador por haber tramitado fondos de PRONASOL para que la Unión de Ejidos de la Selva (la cual formaba parte de la ARIC-UU y UNORCA) pudiera comprar al Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) un beneficio de café con el fin de superar los problemas de comercialización y así elevar el ingreso y bienestar de las comunidades fronterizas. Asimismo, en enero de 1992 González Garrido creó la Secretaría de Participación Ciudadana como un nuevo organismo del gobierno del estado, nombrando dirigentes del PRI y CNC para dirigirla, con la intención de limitar el impacto de los funcionarios y programas de PRONASOL en Chiapas (Entrevistas del autor con asesores de la Unión de Ejidos de la Selva, Comitán, enero de 1993). Luego, en marzo del mismo año, tres funcionarios del INI fueron detenidos y acusados de corrupción por el manejo de recursos destinados a proyectos campesinos de ganadería en los municipios de Ocosingo y Chilón. Las protestas de los campesinos afectados lograron su liberación, pero no su restitución en sus cargos (Cano, 1994; Harvey, 1995, pp. 226-7; La Jornada, 1992).

El segundo factor que puso límites a la política de concertación fue la veda forestal decretada en 1989. Tal política representó una regresión de los acuerdos

concertados entre el gobierno federal y organizaciones campesinas en marzo de 1987. En este momento se acordó establece un paquete de apoyos para la producción forestal sustentable en comunidades campesinas en el marco de un plan integral de conservación de la selva lacandona. Desde 1975 la Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel venía luchando por la titulación definitiva de 26 ejidos que se encontraban dentro de la Comunidad Lacandona, una zona reconocida por resolución presidencial de 1972, la cual dio posesión solamente al reducido número de familias lacandonas y dejó sin derechos agrarios a miles de campesinos indígenas, la mayoría tzeltales, choles, y tojolabales, que se habían asentado como ejidatarios en la zona desde hacía dos décadas. Esta falta de seguridad en la tenencia de la tierra llevó a que muchos campesinos desmontaran nuevos terrenos en la selva. En 1986 la UE Quiptic logró que el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), Manuel Camacho Solís, presionara a la SRA para que se legalizara la tenencia de la tierra de los 26 ejidos. En marzo de 1987 la UE Quiptic, SRA, SEDUE, y el gobierno del estado firmaron un convenio para la conservación de la selva lacandona en el cual fueron reconocidos por primera vez los derechos agrarios de los poblados afectados (Harvey, 2000, pp. 174-76).

Sin embargo, con el nuevo gobierno de Patrocinio González Garrido hubo un cambio importante al decretar en abril de 1989 una veda que prohibía la explotación de los recursos forestales en la región. A pesar de este decreto, la veda forestal no frenó la tala de bosques en Chiapas. Ante la falta de alternativas económicas, muchos campesinos siguieron explotando los recursos maderables, lo cual fue reprimido por la fuerza pública en varias ocasiones. Veamos con detalle uno de los casos en la zona de Marqués de Comillas, cuya importancia rebasó el ámbito local y que una vez más demostró la debilidad de los mecanismos institucionales para llegar a acuerdos concertados.

2. Efectos sociales y políticos de la veda forestal: el caso de Marqués de Comillas³

Trasladados de sus lugares de origen por la falta de tierras y por la protección institucional de los terratenientes, miles de campesinos indígenas del norte y centro de Chiapas y de otros estados llegaron en la década de los ochenta a Marqués de Comillas, una región casi incomunicada en el extremo oriente de la selva lacandona en la frontera con Guatemala. Aunque recibieron tierras ejidales, no contaron con los apoyos necesarios para aprovecharlas de una manera racional y productiva (De Vos, 2002; Dichtl, 1988).

En el caso de uno de los primeros poblados de la zona, Flor de Cacao, llegaron familias de Simojovel que habían sido trasladados a otra zona de la selva

3 Las siguientes dos secciones sobre los conflictos en Marqués de Comillas se basan en el análisis publicado por el autor en *Campo Uno*, suplemento de *Uno Más Uno* (Harvey, 1992).

a raíz de conflictos agrarios en 1977. En 1980, debido a nuevos conflictos por la tierra provocados por el decreto que formó la Comunidad Lacandona, unas setenta familias fueron trasladadas por segunda vez, ahora a Marqués de Comillas. La colonización de la zona sirvió al gobierno como una válvula de escape sin tomar en cuenta los efectos que tendría sobre el medio ambiente. “Cuando el gobierno nos trajo aquí, “dice uno de los fundadores de Flor de Cacao, “nadie tenía en la mira la protección de la selva; ningún gobierno, ni a nivel mundial, lo que ahorita es la protección que le quieren dar, en aquel tiempo, no; decían que si queríamos tierras, que fuéramos a Marqués de Comillas.”

Además, la zona fue considerada de importancia geopolítica debido a los efectos de la guerra de genocidio en Guatemala. A principios de los ochenta, miles de refugiados guatemaltecos se establecieron en la zona fronteriza de Chiapas. El gobierno de México respondió fortaleciendo su presencia en la región a través de la colonización, pero no se tomaban en cuenta las necesidades locales y problemas socioeconómicos de los pobladores una vez que estos fueran asentados en Marqués de Comillas.

Entre 1984 y 1987 las dependencias del gobierno promovieron la explotación de los recursos maderables a través de permisos otorgados a dos Uniones de Ejidos, la Julio Sabines y la Fronteriza Sur. Estas dos Uniones de Ejidos aglutinaban a todas las comunidades de la región de Marqués de Comillas y se volvieron pieza clave en el control político y económico de la zona. Sus autoridades fueron nombradas directamente por los delegados de la SRA y no por los ejidatarios. En alianza con las empresas madereras, las autoridades impuestas para las Uniones de Ejidos ayudaron a explotar los recursos forestales. Según un representante de la UE Fronteriza Sur en esos años, “aquí las autoridades fueron como simples miradores.” Al ver que esta alianza no beneficiaba ni a las comunidades ni a la protección de la selva, surgieron protestas al interior de las comunidades. Entre 1986 y 1989, un nuevo presidente de la UE Fronteriza Sur hizo intentos para frenar la tala inmoderada, pero no contaba con el apoyo institucional necesario.

Con todo, fue la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) la que mayor destrucción causó en la zona. A partir de 1984 llegó a perforar cuatro pozos y tenía proyectado la perforación de otros quince hasta que el levantamiento zapatista hizo que se suspendieran sus operaciones. Las obras de PEMEX implicaron la apertura de campos, brechas y caminos para sus instalaciones. Los daños ecológicos incluyeron no solamente la deforestación, sino también la contaminación ambiental del aire y de los ríos provocado por el impacto de los desechos tóxicos por la actividad petrolera. Tampoco PEMEX creó oportunidades de desarrollo regional al no emplear a los campesinos locales, sino a los trabajadores sindicalizados que trajo de otros estados del país. Aunque PEMEX sí invirtió en algunas obras de beneficio social en la zona, el impacto negativo de sus operaciones fue más alto.

A partir de 1987, la mayoría de los ejidos tenían permisos para explotar sus propios recursos forestales de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Intersecretarial para la Conservación de la Selva Lacandona. Sin embargo, en abril de 1989 el gobernador González Garrido firmó un convenio con los representantes lacandones, decretando una veda sobre el aprovechamiento forestal en toda la Selva Lacandona y autorizando a la Corporación de Fomento de Chiapas (CORFO) comprar la madera que ya estaba aserrada. Del mismo modo, en abril de 1991 el gobierno federal se comprometió a conservar la Selva Lacandona al acordar su primer canje “Deuda por Naturaleza” con la organización norteamericana *Conservation International*.

Si bien se apreciaba la necesidad de conservar la selva, la forma legalista en que se quiso lograr la conservación produjo efectos contrarios. Los pobladores se quejaron de las limitadas alternativas económicas que les ofrecieron a cambio de la conservación. Como dijo uno de los miembros de la UE Fronteriza Sur, “no estamos dispuestos a conservar la selva a costa del hambre y la miseria de la gente.”

La alternativa más importante que promovió el gobierno fue la producción del hule. Su programa empezó en 1989 con la promesa de créditos para cubrir todos los costos de producción. El gobierno, a través del fideicomiso FIDEHULE, argumentaba que los resultados del proyecto se darían en un lapso de siete años, convenciendo a muchos que era su mejor alternativa ante los efectos de la nueva veda forestal. Sin embargo, en los hechos los créditos no cubrieron más del 30 por ciento de los costos, dejando a muchos campesinos endeudados sin haber resuelto sus necesidades económicas (entrevista del autor con representantes de la UE Fronteriza Sur, Marqués de Comillas, diciembre de 1991).

Debido a la falta de alternativas, el hule aparecía como un nuevo monocultivo a pesar de la falta de experiencia de los campesinos con este producto. Cabe señalar que aquellos pobladores que sí sabían del hule prefirieron no entrar al programa. De forma parecida se implementaron programas de cría de borregos y gallinas que no contaron con la necesaria asistencia técnica.

Lo más grave de estos proyectos, desde el punto de vista de la conservación de la selva, fue el hecho de que se implementaron sin el consenso de la población local. La participación que hubo se debió más a la conveniencia, el poder de propaganda en el caso del hule, y la falta de créditos para otras actividades. Algunas comunidades argumentaban que sus tierras eran aptas para promover la producción y la comercialización del chile, pero el gobierno del estado no retomó sus propuestas. En estas condiciones, siguió la tala clandestina de los recursos forestales.

3. Movilización campesina en Marqués de Comillas

Como ya fue señalado, en abril de 1989 el gobernador del estado firmó con los representantes lacandones el decreto de veda forestal para la Selva Lacandona.

Aparte de los efectos ya mencionados, los ejidos de la zona de Marqués de Comillas ni siquiera estaban sujetos a las autoridades de los lacandones y, por lo tanto, el decreto no debió haber sido extendido a ellos.

Según testimonios presentados al autor en diciembre de 1991 por miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), el 6 de julio de 1991 cinco tráilers acompañados de policías judiciales y de la Seguridad Pública del Estado de Chiapas llegaron a la zona de Marqués de Comillas para decomisar la madera que se encontraba al lado de los caminos entre Nuevo Chihuahua y Nuevo Veracruz y entre Benemérito de las Américas y Pico de Oro. Esta madera era la que se había aserrada bajo permiso legal antes de 1991. Cuando los policías no les presentaron a los campesinos documentos legales que avalaban el decomiso de su madera, un grupo de ellos decidió bloquear la carretera a la altura del ejido Nuevo Chihuahua para impedir que los tráilers sacaran la madera aserrada. También detuvieron a varios de los policías que estaban acompañando la operación. Los dirigentes del MOCRI pidieron un diálogo con el gobierno del estado, pero este exigió que dejaran libres a los policías como condición para negociar con ellos. Rechazando esta respuesta, el 12 de julio unos 300 campesinos iniciaron una marcha-caravana hacia la Ciudad de México con el objetivo de presentar sus demandas al gobierno federal.

El 13 de julio, cuando se acercaba al aeropuerto de Palenque, la marcha fue reprimida por policías judiciales y de la Seguridad Pública con gases lacrimógenos. Siete dirigentes fueron detenidos y llevados a la Procuraduría de la Justicia del Estado en Tuxtla Gutiérrez. Los detenidos denunciaron el hecho de que los policías les obligaron bajo tortura a firmar declaraciones falsas que les vinculaban al narcotráfico y los movimientos guerrilleros centroamericanos. El Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz, informó a la organización Amnistía Internacional de estos hechos, la cual presionó al gobierno federal para que ordenara la liberación de los campesinos presos. Los presos fueron liberados el 15 de julio a cambio de la liberación de los policías detenidos en Marqués de Comillas. Dos campesinos presos no fueron liberados hasta el 11 de octubre de 1991. Para el testimonio de uno de los campesinos presos, véase “Tortura y cárcel en Chiapas, testimonio indio,” *El Día*, 29 de febrero de 1992, p. 10).

Aparte de denunciar la represión, el MOCRI presentó varias demandas económicas y agrarias. En lo económico manifestó que era necesario realizar un estudio de suelos de la zona de Marqués de Comillas para planificar la diversificación de cultivos, con pleno respeto a la ecología y las necesidades y capacidades de la población. En este sentido, pidió que se consideraran propuestas para implementar proyectos de ganadería semi-intensiva y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Además, exigió que se levantara la veda forestal en concertación con los campesinos organizados en proyectos productivos, y que FIDEHULE financiara el 100 por ciento de los costos de producción para evitar

el endeudamiento de los productores (Entrevista del autor con representantes del MOCRI, Marqués de Comillas, diciembre de 1991).

Este caso da cuenta de los efectos contraproducentes de la veda forestal en Chiapas. La respuesta legalista a un problema social y ecológico llevó a conflictos no solamente en Marqués de Comillas, sino también en otras partes del estado. Por ejemplo, en marzo de 1993 dos soldados fueron asesinados en la comunidad tzotzil de San Isidro el Ocotal, cerca de San Cristóbal de Las Casas. Según diversas fuentes, el problema que originó los asesinatos fue el posible descubrimiento de un aserradero ilegal en la comunidad. El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas,” encabezado por el Obispo Samuel Ruiz, denunció los asesinatos, pero también denunció abusos de los derechos humanos de trece indígenas de la comunidad que fueron detenidos por soldados y, según sus testimonios, torturados en los interrogatorios perpetrados por elementos del ejército mexicano (Guzmán y Vera, 1993; Minnesota Advocates for Human Rights, 1993). Aunque los trece indígenas fueron liberados por falta de evidencias, de nuevo un problema derivado de la falta de políticas adecuadas había llevado a la comisión de actos violentos y a conflictos políticos entre el gobierno y la Diócesis de San Cristóbal.

4. Conflictos entre el gobierno y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas se formó en marzo de 1989 bajo la dirección de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y el Obispo Samuel Ruiz García. Respondió a una realidad muy evidente durante los ochenta: la repetida violación de los derechos humanos de los sectores menos protegidos, principalmente campesinos e indígenas, pero sobre todo aquellos que participaban en organizaciones independientes (Amnesty International, 1986; Americas Watch, 1991). El “Frayba” se convirtió en el principal opositor a las acciones impunes de la fuerza pública y los caciques. Es por esta razón que el clero y el Obispo Samuel Ruiz se volvieron el blanco de constantes ataques y campañas de desprestigio durante el sexenio de 1998-1994. Ante el debilitamiento y represión de las organizaciones campesinas, la Diócesis se quedó como casi la única institución con suficiente fuerza para desafiar al gobierno públicamente. El embate gubernamental llegó al extremo de encarcelar al párroco de Simojovel, Joel Padrón, el día 18 de septiembre de 1991. Su detención fue ordenada a raíz del conflicto agrario entre miembros de la CNC y de la CIOAC. Como ya fue mencionado, la política de compra de tierras originó nuevas tensiones entre grupos de campesinos solicitantes y, en este caso, le proporcionó al gobierno estatal un pretexto para atacar el trabajo diocesano. Joel Padrón había señalado su apoyo a que se reconocieran los derechos agrarios de los campesinos de la CIOAC, lo que llevó a las autoridades a acusarle de los delitos de despojo, daños, robo, amenazas y provocaciones. Sin embargo, el motivo de su detención rebasaba lo que en realidad fue una de decenas de

disputas agrarias en Simojovel. Más bien fue una respuesta a la publicación de un informe del Frayba en el cual los autores criticaron fuertemente los abusos de los derechos humanos perpetrados por la fuerza pública en Chiapas. Al respecto, Joel Padrón señaló que existían muchos casos como el suyo, diciendo “problemas sencillos – como el mío cuando me apresaron – que pudieron resolverse pronto, pero no se quiso.” (Correa, 1993).

El motivo político de la detención de Padrón fue más que evidente. El gobierno presentó a Samuel Ruiz una lista de condiciones para que fuera liberado el párroco, en la cual estaban reflejadas las demandas de las asociaciones ganaderas de Simojovel. Estas condiciones incluyeron el desalojo de predios en manos de la CIOAC, el poner fin a la asesoría y apoyo que daban catequistas y sacerdotes a los campesinos en la zona, y la transferencia de Padrón a otra Diócesis fuera de Chiapas. Samuel Ruiz rechazó el condicionamiento de los derechos de Padrón y fue respaldado por una marcha de tres mil indígenas a Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación del párroco sin condiciones. De nuevo, las relaciones externas no faltaban, y organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional denunciaron el abuso de los derechos humanos en Chiapas. Toda esta presión llevó a que el gobierno liberara a Padrón el 6 de noviembre de 1991. Sin embargo, los conflictos agrarios en la zona siguieron y de forma violenta cuando, en abril de 1992, fueron incendiadas las oficinas de la CIOAC en Simojovel por miembros del grupo opositor. (Aguilar Zinser, 1991; Gómez Cruz y Kovic, 1994, p.105; Harvey, 2000, p.184; Minnesota Advocates for Human Rights, 1992, pp. 24-27).

5. La marcha de Xi'Nich y la atención nacional

Otro ejemplo clave del descontento social en este periodo fue la Marcha por la Paz y los Derechos Humanos de los Pueblos Indios “Xi'Nich”, la cual partió de Palenque el 7 de marzo de 1992 rumbo a la Ciudad de México. La marcha surgió como respuesta a la represión sufrida por miembros de otra organización independiente, el Comité de Defensa de la Libertad Indígena (CDLI) el 28 de diciembre de 1991 cuando policías judiciales y de Seguridad Pública del estado arrojaron gases lacrimógenos y desalojaron con lujo de violencia una manifestación pacífica en la plaza central de Palenque. Los miembros del CDLI, mayormente choles y tzeltales, habían solicitado al gobierno atender sus demandas para agilizar la inversión en programas sociales ya programados para la zona noreste del estado y dar solución al rezago agrario en la misma región. El CDLI, que también contaba con el apoyo de miembros de la Diócesis de San Cristóbal, organizó la manifestación para presionar al gobierno para que respondiera a sus demandas. La respuesta violenta por parte del gobierno activó un “hormiguero,” por ello el nombre que el CDLI le puso a su marcha a la capital de la República, Xi'Nich, que significa “hormigas” en la lengua chol.

Más de 400 indígenas de diferentes etnias y organizaciones indígenas en Chiapas participaron en la marcha, demostrando un amplio nivel de solidaridad y de diálogo que rebasaba el problema regional. Presentaron una serie de demandas que, a pesar de su especificidad local que les dio origen, resonaban con amplios sectores de la población en Chiapas: la solución de conflictos agrarios, la liberación de campesinos presos, y el cumplimiento de promesas del gobierno para realizar obras y servicios en las comunidades indígenas. Además, exigían que los agentes municipales en las comunidades indígenas fueran nombrados por los habitantes de las comunidades y no designados por las presidencias municipales, quienes controlaban el destino de los fondos y los proyectos a favor de intereses caciquiles. También pidieron que se juzgaran a los policías involucrados en la represión de la manifestación del CDLI en Palenque por la violación de los derechos humanos.

Durante el curso de la marcha, el Secretario de Gobernación intervino y empezó a presionar a las instituciones estatales y federales para que llegaran a acuerdos con los indígenas. Asimismo, los marchistas insistieron en que no regresarían a sus comunidades sin acuerdos firmados para la liberación de diez presos, la suspensión de cincuenta órdenes de aprehensión, respuestas a más de cien solicitudes agrarias y compromisos de inversión de fondos para diversos proyectos sociales.

A pesar de la intransigencia del gobierno estatal, la marcha se realizó en una coyuntura política relativamente favorable. En primer lugar, desde el inicio de las negociaciones para crear el TLCAN, el gobierno de Salinas se preocupaba por la imagen de México ante los Estados Unidos y Canadá en cuanto a la protección de los derechos humanos. A principios de 1992 las negociaciones entraron en un periodo difícil y el gobierno quiso evitar cualquier reporte negativo de la situación que venían denunciado los indígenas de Chiapas. En segundo lugar, el gobierno federal, con el apoyo del Departamento del Distrito Federal, había organizado para finales de abril el “Primer Encuentro Continental de la Pluralidad”. A este evento, celebrado en la Ciudad de México, fueron invitados representantes de 70 pueblos indígenas de América Latina, Estados Unidos, y Canadá. La marcha Xi’Nich iba a llegar a las afueras de la Ciudad de México precisamente en los días anteriores a la inauguración del Encuentro oficial. El gobierno quiso evitar que se mezclara la marcha con su evento, sobre todo por la presencia de muchos reporteros extranjeros en esas fechas. Finalmente, la trágica explosión de oleoductos en un distrito residencial de Guadalajara a finales de abril provocó fuertes críticas al gobierno por su negligencia. El gobierno tuvo que preocuparse por contener una nueva crisis y, en estas circunstancias, no quiso negar soluciones a las demandas de la marcha Xi’Nich. Así fue como el 28 de abril se acordó resolver la mayoría de las solicitudes agrarias, liberar a los diez presos, y suspender las órdenes de aprehensión. La marcha estaba a solo 20 kilómetros de la capital (Campo Uno, 1992).

El impacto de esta marcha no se debió solamente a la coyuntura política, sino también a la solidaridad y la atención nacional que recibió por parte de amplios sectores de la población. El apoyo de un gran número de grupos religiosos y movimientos sociales ayudó a marginar la posición de las asociaciones de ganaderos y de sus aliados en el gobierno estatal. Los ganaderos intentaron desprestigiar la marcha, argumentando que los indígenas estaban siendo manipulados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la Iglesia Católica. Uno de los asesores principales de Xi'Nich era un jesuita, Gerónimo Hernández Gómez, quien además era presidente del Centro de Apoyo para la Defensa de los Derechos Indígenas (CADDI), un grupo de promotores de los derechos humanos con sede en Palenque. Los argumentos de las asociaciones ganaderas fueron rebasados a medida que avanzaba la marcha y se daban a conocer las causas sociales y políticas que lo originaron.

Cabe señalar que la marcha recibió la atención de algunos sectores de la prensa nacional. Por ejemplo, *La Jornada* llevaba reportajes diarios del progreso de la marcha a lo largo de su caminata de mil kilómetros. En cada paradero, los marchistas repitieron sus denuncias de los abusos de los derechos humanos en Chiapas. Recibieron la solidaridad de cada poblado por donde pasaban en su ruta por Tabasco, Veracruz, Puebla, y el Estado de México. Aun el sector más conservador de la Iglesia Católica dio su apoyo a Xi'Nich. En Puebla se organizó un gran evento de solidaridad en el cual participaron grupos religiosos, estudiantes, organizaciones campesinas e indígenas, defensores de los derechos humanos, y partidos políticos. La Asociación de Abogados de Minnesota y la Coalición Nacional Arco-Iris de los Estados Unidos también manifestaron su apoyo (*La Jornada*, 1992).

No cabe duda de que la marcha Xi'Nich tuvo un impacto en la conciencia nacional. Varios intelectuales y comentaristas escribieron acerca de la importancia de esta marcha. Para Álvaro Cepeda Neri (1992), la marcha representaba “una lección de modernización.” Federico Reyes Heróles (1992) se refirió a “esa vergüenza nacional” para hablar de la negación de los derechos de los pueblos indígenas. Herman Bellinghausen (1992) escribió que el impacto de la marcha marcó “un nuevo comienzo” en la lucha contra la desigualdad. Finalmente, Marco Rascón (1992) enfatizó la determinación de los marchistas para dejar atrás el legado colonial en Chiapas.

Sin menospreciar el impacto significativo que tuvo la marcha Xi'Nich en la opinión pública, al igual que los otros casos mencionados, los acuerdos firmados por el gobierno con sus dirigentes no fueron cumplidos cabalmente. Los policías acusados de violar los derechos humanos no fueron investigados y los presidentes municipales siguieron imponiendo a los agentes municipales. Al terminar 1992 seguían pendientes treinta órdenes de aprehensión contra miembros del CDLI y no habían comenzado las obras públicas acordadas. Este desenlace de

la marcha fue percibido por el Subcomandante Marcos en su texto “Chiapas: el Sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía,” escrito a mediados en 1992, como una muestra más de la hostilidad del gobierno a todos los niveles a las demandas legítimas de las comunidades indígenas y campesinas, escribiendo como guía a un imaginario visitante a Chiapas interesado en conocerlo por primera vez: (1994, p.57):

Bueno, llegamos al cruce, ahora a Ocosingo...¿Palenque? ¿Está usted seguro? Bueno, vamos...Sí, bonitas tierras. Ajá, finqueros. Correcto: Ganado, café, madera. Mire, ya llegamos a Palenque. ¿Una visita rápida a la ciudad? Bueno, éstos son hoteles, allá restaurantes, acá la presidencia municipal, la Judicial, ése es el cuartel del ejército, y allá... ¿Qué? No, ya sé que me va a decir... no lo diga, no... ¿Cansado? Bueno paremos un poco. ¿No quiere ver las pirámides? ¿No? Bueno. ¿Xi'Nich? Ajá, una marcha indígena. Sí, hasta México. Ajá, caminando. ¿Cuánto? Mil 106 kilómetros. ¿Resultados? Recibieron sus peticiones. Sí, sólo eso. ¿Sigue cansado? ¿Más?

6. Una rebelión anunciada⁴

Fue en este contexto de conflictos y represión que se dieron dos acontecimientos en 1992 y 1993 que indicaban la preparación del levantamiento. Uno de ellos fue una manifestación realizada por la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ) en San Cristóbal de Las Casas el 12 de octubre de 1992. La ANCIEZ fue la cara pública del EZLN, el cual se formó en la clandestinidad en las montañas de la Selva Lacandona en 1983. Durante 1992 las bases del EZLN se reunieron en varias ocasiones para discutir si iban a declarar la guerra. Las condiciones políticas externas habían cambiado con la caída del bloque socialista en Europa y la derrota de los movimientos armados en Centroamérica. Sin embargo, las condiciones locales en Chiapas fueron determinantes, sobre todo por los impactos negativos de la aplicación de las políticas neoliberales en el campo, el fin del reparto agrario, y la negociación del TLCAN. Parecía que el gobierno estaba cancelando el futuro bienestar de miles de campesinos indígenas, sobre todo los y las jóvenes que habían encontrado mejores condiciones de igualdad dentro de las filas del EZLN. El 12 de octubre de 1992, presentándose públicamente como ANCIEZ, los integrantes del todavía clandestino EZLN organizaron una manifestación pacífica en San Cristóbal de Las Casas, la cual sirvió como práctica para la eventual toma de la ciudad el 1º. De enero de 1994. Durante esta manifestación fue derribada la estatua de Diego de Mazariegos, el conquistador español, fundador de la Ciudad Real, y símbolo de la continuidad de la opresión neocolonial en Chiapas (García de León, 1994: 27).

Después de esta marcha, las comunidades zapatistas se volvieron a reunir y, en enero de 1993, votaron a favor de la guerra. Los próximos meses estuvieron dedicados a tareas de preparación militar y de la logística necesaria para organizar el alzamiento. Fue en este contexto que se dio el más significativo indicador

⁴ Esta sección retoma el análisis publicado en Harvey (2023b).

de la existencia de un movimiento armado en Chiapas. Los días 22 y 23 de mayo del 1993 hubo dos enfrentamientos armados entre soldados del ejército mexicano y presuntos guerrilleros en la Sierra de Corralchén, una región de difícil acceso en plena Selva Lacandona. Según fuentes militares, en estos choques resultaron muertos un subteniente del ejército mexicano y un insurgente del EZLN, además de otros dos oficiales y un zapatista que salieron heridos. Sin embargo, es posible que murieron más soldados debido al fuego cruzado entre los 1,500 soldados que llegaron a la zona (Henríquez, 2003; Jiménez Ricárdez, 1996, p.23). El ejército había descubierto este campamento del EZLN, pero, en vez de seguir enfrentando a los guerrilleros y aniquilarlos (como era de esperarse), el ejército se retiró por razones políticas. La explicación más convincente acerca de la toma de esta decisión fue que el presidente Salinas no quería que saliera a la luz pública el hecho de que en México había una guerrilla. Salinas quiso mostrar otra imagen al exterior, ya que su gobierno esperaba que se aprobara el TLCAN en Estados Unidos y Canadá y quiso dar la apariencia de un país estable y atractivo para la inversión extranjera. Desatar un conflicto armado a mediados del 1993, cuando la aprobación del TLCAN estaba encontrando mucha oposición en el Congreso de los Estados Unidos, hubiera sido un desastre para Salinas. Tanto el gobierno mexicano como el de los Estados Unidos, el cual estaba enterado de la existencia del EZLN gracias a sus agentes de inteligencia, prefirieron callar la existencia de una guerrilla para no entorpecer la aprobación del TLCAN en Washington, el cual fue finalmente aprobado el 20 de noviembre de 1993 (Doyle, 2003; Doyle, Coord. 2004). Por ello podemos decir que el alzamiento zapatista fue una rebelión anunciada, tanto por las consecuencias de la represión que vivieron muchas comunidades en sus luchas pacíficas como por la preparación guerrillera que el gobierno quiso negar hasta el último momento.

Conclusiones

Vamos a decirlo por su nombre: esta rebeldía, en las mujeres zapatistas, que había que hacer algo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, entonces, que era preguntar a todos qué íbamos a hacer. Hubo en 1992 una consulta, y pueblo por pueblo se realizaron asambleas. Se planteaba el problema. La disyuntiva era muy sencilla: si nos alzamos en armas, nos van a derrotar, pero va a llamar la atención y van a mejorar las condiciones de los indígenas. Si no nos alzamos en armas, vamos a sobrevivir, pero vamos a desaparecer como pueblos indios. La lógica de muerte es cuando nosotros decimos: no nos dejaron otra opción. Ahora, los que llevamos más tiempo aquí decimos: qué bueno que no teníamos otra opción. (Subcomandante Marcos, 2008).

El argumento central de este artículo es que podamos comprender mejor la decisión del EZLN de levantarse en armas si tomamos en cuenta la situación política y social que existía en Chiapas en el periodo de 1988 a 1993. En estos años el gobierno federal intentó implementar inicialmente una política de concertación que pretendía ganar una legitimidad popular después de las elecciones fraudulentas que llevaron al poder a Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, las limitaciones de la concertación agraria por su restringida aplicación y por los conflictos generados por el mismo gobernador Patrocinio González Garrido no permitieron que se solucionara el rezago agrario y, en muchos casos, se agudizaban los conflictos por la tierra entre campesinos y terratenientes, y entre campesinos de la confederación oficial y campesinos de organizaciones independientes.

Por otra parte, el afán del gobernador en defender los intereses de los terratenientes, de las asociaciones ganaderas, y grupos caciquiles locales significó que hasta funcionarios de programas e instituciones federales como el PRONASOL y el INI fueron detenidos o destituidos debido a su apertura hacia organizaciones independientes. Cabe señalar que Salinas no intervino para apoyar a sus propios funcionarios de programas federales, dejando al gobernador manejar y moldear el discurso de solidaridad y concertación para su propio beneficio.

A partir de 1991 el gobernador adoptó claramente una política represiva, de cerrazón política, hacia cualquier expresión de resistencia y lucha independiente. Ejemplos importantes de dicha política son las respuestas violentas e impunes por parte de los policías judiciales y de Seguridad Pública a las manifestaciones y marchas pacíficas de campesinos en Marqués de Comillas y Palenque, y la falta de cumplimiento de aquellos “acuerdos” concertados con agentes del gobierno federal.

En este contexto, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas se volvió el principal defensor de los derechos humanos para la población indígena y campesina en Chiapas. Por ello, el gobierno del estado hizo todo lo posible para atacar y desprestigiar tanto al Obispo Samuel Ruiz como a los sacerdotes y catequistas por su acompañamiento de los campesinos en sus luchas agrarias, laborales y políticas.

La decisión de los zapatistas de levantarse contra el gobierno se dio en el contexto descrito en este artículo, es decir, la evidente falta de voluntad del gobierno de atender las grandes carencias sociales y económicas de la población campesina y mayoritariamente indígena de los Altos, la zona norte, y de la Selva Lacandona. La caída del muro de Berlín y la crisis mundial del socialismo no tenían el mismo peso para los zapatistas que la situación local y nacional, la cual parecía excluyente y represiva para los pueblos indígenas y los sectores más pobres de México. La opción que el EZLN tomó se explica, en parte, por su larga memoria de despojo y discriminación, pero también por el empeoramiento de las condiciones políticas y sociales para la población indígena en Chiapas durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Patrocinio González Garrido.

Referencias

- AGUILAR ZINSER, ADOLFO (1991). “Todo en Chiapas es Centroamérica”. *El Financiero*, 21 de octubre, p. 56.
- AMERICAS WATCH (1991). *Derechos humanos en México: ¿Una política de impunidad?* México, Editorial Planeta.
- AMNESTY INTERNATIONAL (1986). *Mexico: Human rights in rural areas: an exchange of documents with the Mexican government on human rights violations in Oaxaca and Chiapas*. Londres, Amnistía Internacional.
- BARONNET, BRUNO, MORA BAYO, MARIANA Y STAHLER-SCHOLK, RICHARD (Coords.) (2011). *Luchas “muy otras:” Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas*. México: CIESAS, UAM, UNACH.
- BASCHET, JEROME (2018). *Rebeldía, resistencia, y autonomía: la experiencia zapatista*. México: Ediciones Eón.
- BASCHET, JEROME (2022). *La Autonomía Zapatista: un faro en la lucha por la vida*, Colección Al Faro Zapatista. Buenos Aires: CLACSO; San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Editorial Retos; Guadalajara, Jalisco: Cátedra Jorge Alonso, Universidad de Guadalajara.
- BELLINGHAUSEN, HERMAN (1992). “Xi’Nich y la cultura de la victoria”. *La Jornada*, 27 de abril, p. 26.
- BENJAMIN, TOM (1995). *Chiapas: Tierra Rica, Pueblo Pobre*. México: Grijalbo.
- BURGUETE CAL Y MAYOR, ARACELI (1987). *Chiapas, Cronología de un etnocidio reciente: represión política a los indios*. México: Academia Mexicana de los Derechos Humanos, A.C.
- CAMPO UNO (1992). “La marcha Xi’Nich”. *Suplemento de Uno Más Uno*, 27 de abril.
- CANO, ARTURO (1994). “Lo más delgado del hilo: PRONASOL en Chiapas”. *Reforma*, 28 de enero, pp. 3-7.
- CASTILLO, CARMEN Y BRISAC, TESSA (1995). “Entrevistas con el subcomandante Marcos”. En: Adolfo Gilly, Subcomandante Marcos y Carlo Ginzburg. *Discusión sobre la historia*. (pp. 129-42). México: Taurus.
- CEPEDA NERI, ALVARO (1992). “Chiapas: la lucha por los derechos humanos”. *La Jornada*, 21 de abril, p. 5.
- CORREA, GUILLERMO (1993). “En cuatro años, Patrocinio estableció en Chiapas récord de violaciones a los derechos humanos”. *Proceso*, Núm. 845, 11 de enero, pp. 6-10.

- DE VOS, JAN (2002). *Una tierra para sembrar sueños: Historia reciente de la Selva Lacandona, 1950-2000*. México, Fondo de Cultura Económica y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
- DICHTL, SIGRID (1988). *Cae una estrella: Desarrollo y destrucción de la Selva Lacandona*. México, Secretaría de Educación Pública, Programa Cultural de las Fronteras.
- DOYLE, KATE (2003). “Documentos desclasificados: incompetencia militar”. *Proceso*, Núm. 1417, 28 de diciembre. <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB109/proceso1203.pdf> [21 de diciembre de 2023].
- DOYLE, KATE (Coord.) (2004). “Rebellion in Chiapas and the Mexican Military”. *Electronic Briefing Book - The National Security Archive*, Washington D.C. Núm. 109. <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB109/index.htm> [21 de diciembre de 2023].
- ESTRADA, MARCO (2007). La comunidad armada rebelde y el EZLN: un estudio histórico y sociológico sobre las bases de apoyo zapatistas en las cañadas tojolabales de la selva lacandona. México: El Colegio de México.
- ESTRADA, MARCO Y VIQUEIRA, JUAN PEDRO (Coords.) (2010). *Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista: microhistorias políticas*. México: El Colegio de México.
- EZLN (1994). *EZLN: Documentos y comunicados*. (Prólogo de Antonio García de León, Crónicas de Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis). México, Ediciones Era.
- EZLN (1995). *EZLN: Documentos y comunicados*, vol. 2. (Prólogo de Antonio García de León, Crónicas de Carlos Monsiváis). México, Ediciones Era.
- GARCIA DE LEON, ANTONIO (1994). “Prólogo”. En: *EZLN: Documentos y Comunicados*. (Prólogo de Antonio García de León, Crónicas de Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis). (PP. 11-29). México, Ediciones Era.
- GILLY, ADOLFO (1997). *Chiapas: La razón ardiente*. México, Ediciones Era.
- GOMEZ CRUZ, PATRICIA JOVITA Y KOVIC, CHRISTINA MARIA (1994). *Con un pueblo vivo, en tierra negada: Un ensayo sobre los derechos humanos y el conflicto agrario en Chiapas, 1989-1993*. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
- GONZALEZ ESPONDA, JUAN (1989). *Movimiento campesino chiapaneco, 1974-1984* (2 tomos). Tesis de licenciatura, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas.

- GONZALEZ ESPONDA, JUAN Y POLITO BARRIOS, ELIZABETH (1995). "Notas para comprender los orígenes de la rebelión zapatista". *Revista Chiapas*, Núm. 1, pp. 101-23.
- GORDILLO, GUSTAVO (1988). *Campesinos al asalto del cielo: de la expropiación estatal a la apropiación campesina*. México, Siglo XXI.
- GUZMAN, ARMANDO Y VERA, RODRIGO (1993). "Militares y sacerdotes se enfrentan por el caso de los dos oficiales asesinados e incinerados en Chiapas," *Proceso*, 858, 12 de abril, pp. 6-9.
- HARVEY, NEIL (1992). "Conservación a costa de la miseria". *Campo Uno*, suplemento de *Uno Más Uno*, 1 y 8 de junio.
- HARVEY, NEIL (1995). "Modernización rural y rebelión zapatista, 1988-1994". En: Hubert Carton de Grammont (Coord.). *Globalización, deterioro ambiental, y reorganización social en el campo*. (pp.215-35). México: UNAM y Juan Pablos Editor.
- HARVEY, NEIL (1997). "Nuevas formas de representación en el campo mexicano: la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas (UNORCA), 1985-1993". En: Hubert Carton de Grammont (Coord.). *Neoliberalismo y Organización Social en el Campo Mexicano*. (pp.239-82). México: Plaza y Valdés/UNAM.
- HARVEY, NEIL (2000). *La Rebelión de Chiapas: la lucha por la tierra y la democracia*, México, Ediciones Era.
- HARVEY, NEIL (2016). "Practicando la autonomía: el zapatismo y la liberación decolonial" en *El Cotidiano*, núm. 200, (nov-dic.), pp. 7-19.
- HARVEY, NEIL (2019). "La democracia imaginaria y las democracias profundas: MORENA, el Zapatismo, y los Pueblos Indígenas". En: Ackerman, John. *El Cambio Democrático en México: retos y posibilidades de la "cuarta transformación"*. (pp.400-417). México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- HARVEY, NEIL (2023a). "La lucha por la tierra y la vida: 30 años de resistencia zapatista". Ponencia presentada en el Coloquio "Chiapas, a 30 años del levantamiento zapatista." México: Universidad Autónoma de México (UAM) - Iztapalapa, 27-28 de septiembre.
- HARVEY, NEIL (2023b). "Una rebelión anunciada". *Revista de la Universidad -EZLN Dossier*, diciembre. <https://www.revistadelauniversidad.mx/articulos/0f17b8f9-1242-4023-9a90-0c874ea67ede/una-rebelion-anunciada> [21 de diciembre de 2023].

- HENRIQUEZ, ELIO (2003). “Diez años del primer choque con el EZLN”. *La Jornada*, 22 de mayo.
- HERNANDEZ CASTILLO, ROSALVA AIDA Y ZYLBERBERG PANEBIANCO, VIOLETA (2004). “Alzando la vista: los impactos del zapatismo en la organización y vida cotidiana de las mujeres indígenas”. En: Maya Lorena Pérez Ruiz. *Tejiendo historias: Tierra, género y poder en Chiapas*. (pp. 219-46). México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
- HERNANDEZ MILLAN, ABELARDO (2007). “Orígenes y antecedentes del EZLN”. *Espacios Públicos*, Vol. 10, Núm. 19, pp. 264-83.
- HIGGINS, NICK (2004). *Understanding the Chiapas Rebellion: Modernist Visions and the Invisible Indian*. Austin, University of Texas Press.
- JIMENEZ RICARDEZ, RUBEN (1996). “La guerra de enero”. *Revista Chiapas*, Núm. 2, pp.21-40.
- LA JORNADA (1992) “Grupos sociales apoyan en Puebla la marcha de los indígenas chiapanecos”. *La Jornada*, 19 de abril, p.3
- LE BOT, YVON (1997). *Subcomandante Marcos: El sueño zapatista: entrevistas con el subcomandante Marcos, el mayor Moisés y el comandante Tacho, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional*. México, Plaza y Janés.
- LEGORRETA DIAZ, MARIA DEL CARMEN (1998). *Religión, política y guerrilla en las Cañadas de la Selva Lacandona*. México, Cal y Arena.
- LEYVA SOLANO, XOCHITL (1999). “De las Cañadas a Europa: niveles, actores, y discursos en el nuevo movimiento zapatista (NMZ) (1994-1997)”. *Revista Desacatos*, Núm. 1, pp. 56-87.
- LEYVA ASCENCIO, XOCHITL Y ASCENCIO FRANCO, GABRIEL (1993). “Apuntes para el estudio de la ganaderización en la Selva Lacandona”. *Anuario de Cultura e Investigación*, 1992. Instituto Chiapaneco de Cultura, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pp. 262-84.
- MARCOS, SYLVIA (2011). *Mujeres, indígenas, rebeldes, zapatistas*. México, Ediciones Eón.
- MARION SINGER, MARIE-ODILE (1984). *El movimiento campesino en Chiapas, 1983*. México: Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México.
- MATTIACE, SHANNAN, HERNANDEZ, ROSALVA AIDA, Y RUS, JAN (EDITORES) (2002). *Tierra, libertad y autonomía: Impactos regionales del zapatismo en Chiapas*. México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).

- MINNESOTA ADVOCATES FOR HUMAN RIGHTS (1992). *Conquest continued: Disregard for human and indigenous rights in the Mexican state of Chiapas*. Minneapolis, Minnesota Advocates for Human Rights.
- MINNESOTA ADVOCATES FOR HUMAN RIGHTS (1993). *Civilians at risk: military and police abuses in the Mexican countryside*. Minneapolis, Minnesota Advocates for Human Rights.
- MORA, MARIANA (2018). *Política Kuxlejal: autonomía indígena, Estado racial e investigación descolonizante en comunidades zapatistas*. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
- MORQUECHO, GASPAR (1994). "Expulsiones en los Altos de Chiapas". En: Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI). *Movimiento campesino en Chiapas: expulsiones, ideología y lucha por la tierra*. (pp. 55-77). DESMI, San Cristóbal de Las Casas.
- MUNOZ RAMIREZ, GLORIA (2008). *El fuego y la palabra: una historia del movimiento zapatista*. San Francisco, California, City Light Publishers.
- OLESEN, THOMAS (2005). *International Zapatismo: the construction of solidarity in the age of globalization*, Londres y Nueva York, Zed Books.
- OLIVERA, MERCEDES (2004). "Sobre las profundidades del mandar obedeciendo". En: Maya Lorena Pérez Ruiz. *Tejiendo historias: Tierra, género y poder en Chiapas*. (pp. 355-85). México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
- OVALLE MUNOZ, PEDRO (1984). "Movimientos campesinos en la zona tzeltal de Chiapas." *Textual*, Núm. 5, pp.63-78.
- PEREZ RUIZ, MAYA LORENA (Coord.) (2004). *Tejiendo historias: Tierra, género y poder en Chiapas*. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
- PONTIGO SANCHEZ, JOSE LUIS (1985). *Dinámica social y movimientos campesinos en Simojovel y Huitiupán*. Tesis en Economía, Área de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas.
- RASCON, MARCO (1992). "La marcha Xi'Nich y la cultura". *La Jornada*, 14 de abril, p. 13.
- RENARD, MARIA CRISTINA (1985). *Historia de la comunidad de San Bartolomé de los Llanos, Chiapas*. (2 tomos). Tesis de Maestría en Antropología Social, Universidad Nacional Autónoma de México.

- REVISTA DE LA UNIVERSIDAD (2023). “Dossier EZLN”. *Revista de la Universidad*, diciembre. <https://www.revistadelauniversidad.mx/releases/10358e25-1935-47db-852c-829dfe19fe6d/ezln> [21 de diciembre de 2023].
- REYES HEROLE, FEDERICO (1992). “Esa vergüenza nacional”. *La Jornada*, 22 de abril, p. 19.
- REYES RAMOS, MARIA EUGENIA (1992). *El reparto de la tierra y la política agraria en Chiapas, 1914-1988*. México: Centro de Estudios Históricos de Mesoamérica y el estado de Chiapas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- ROVIRA, GUIOMAR (1997). *Mujeres de Maíz*. México, Ediciones Era.
- RUBIO LOPEZ, MARIN (1985). *Formas de organización campesina y conciencia de clase; el caso de la Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel del municipio de Ocosingo, Chiapas*. México: Tesis de Sociología Rural, Universidad Autónoma de Chapingo.
- SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA [SRA] (1989). “Acciones agrarias”. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Subdelegación de concertación agraria en zonas indígenas.
- SPEED, SHANNON, HERNANDEZ CASTILLO, ROSALVA AIDA, Y STEPHEN, LYNN (Coords.) (2006). *Dissident Women: Gender and cultural politics in Chiapas*. Austin, University of Texas Press.
- SUBCOMANDANTE MARCOS (1994). “Chiapas: el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía”. En: *EZLN: Documentos y Comunicados*. Prólogo de Antonio García de León, Crónicas de Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis. (pp. 49-66). México: Ediciones Era.
- SUBCOMANDANTE MARCOS (2008). “Como empezó todo,” *Ojarasca*, Suplemento de *La Jornada*, noviembre, p.5.
- TELLO DIAZ, CARLOS (2013). *La rebelión de las Cañadas: origen y ascenso del EZLN*. México: Ediciones De Bolsillo.
- VILLAFUERTE, DANIEL Y GARCIA AGUILAR, MARIA DEL CARMEN (2021). *Los avatares de Chiapas: proyectos, conflictos, esperanzas*. México: Universidad de Ciencias y Artes, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica y Juan Pablos Editor.
- VIQUEIRA, JUAN PEDRO Y RUZ, MARIO HUMBERTO (Coords.) (1995). *Chiapas: Los rumbos de otra historia*. México, UNAM, CIESAS y Universidad de Guadalajara.



Lucha sin límite de tiempo: un balance histórico del zapatismo (1969-2021)

Fight without time limit: a historical balance of Zapatismo (1969-2021)

Marco Antonio Estrada Saavedra

El Colegio de México

<https://orcid.org/0000-0003-4353-0514>

msaavedra@colmex.mx

Recibido: 2 de abril de 2024
Aprobado: 12 de junio de 2024

Resumen

Este artículo se ocupa de mostrar el balance de los logros sociales y políticos del zapatismo, a lo largo de distintas etapas. Se propone utilizar la periodización de su historia como herramienta analítica tomando en consideración, además, los cambios en la composición y organización interna del movimiento y la variación de sus fines, objetivos y proyectos políticos.

Palabras clave: neozapatismo; EZLN; movimientos sociales; agrarismo armado; organizaciones campesinas; historia.

Abstract

In this article I examine the social and political achievements of Zapatismo at different times in its history. I propose to use a periodization of its history as an analytical tool based on the changes in the composition and internal organization of the movement and considering the variation of its aims, its objectives and political projects.

Keywords: neo-Zapatismo; EZLN; social movements; armed agrarianism; peasant organizations; history.

Para Beatriz Urías

“Lástima que no estemos expuestos a más momentos inesperados. La vida podría ser menos insustancial, dar más sensación de que vale la pena preservarla”.

“Es muy beneficioso vivir experiencias importantes a las que no pueden asignarse palabras ni gestos evidentes. Un incómodo silencio puede ser perfecto. El susurro de los dioses, dice Emerson”.

Richard Ford

Introducción

En la madrugada del 1° de enero de 1994, los insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (EZLN) tomaron por las armas cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casa, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Los “zapatistas”, como serían conocidos públicamente, provenían de los pueblos tzeltal, tzotzil, chol y tojolabal, todos ellos de la familia maya. Aunque su objetivo último consistió en la transformación revolucionaria de México en una república socialista, los rebeldes demandaron entonces trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Tras la sorpresa inicial, el gobierno federal, preparado más bien para celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, envió al Ejército nacional a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas armadas duraron 11 días. A partir del 12 de ese mismo mes el gobierno mexicano y el EZLN iniciarían acercamientos con el fin de buscar solucionar el conflicto por la vía del diálogo.

Elaborar un balance de lo alcanzado por un actor colectivo supone, generalmente, partir de presupuestos de racionalidad instrumental que permitan evaluar los logros, tomando como referencia los fines planeados, los medios seleccionados y las estrategias diseñadas para la consecución de éstos. Así proceden, usualmente, politólogos, analistas políticos y periodistas. Se trata de una suerte de “cierre de caja”. Este ejercicio de contabilidad acusa límites evidentes, pero es, sobre todo, poco complejo en tanto que supone la identidad constante en el tiempo del actor, sus intereses y fines en un contexto mutable que exige la adaptación pragmática de los medios a disposición para alcanzar las metas ambicionadas.

Sin descartar del todo este procedimiento, en este escrito obraré tomando distancia de los supuestos de racionalidad arriba mencionados. Esto demanda echar mano de un horizonte temporal lato, que permita historizar las transformaciones de la composición, organización y objetivos políticos del zapatismo, además de considerar lo local, nacional e internacional como niveles de análisis. En fin, propongo un balance complejo que no debe confundirse con una hagiografía o una condena del zapatismo.

En la primera sección del artículo, defino el zapatismo como el ensamblaje holgado entre el neozapatismo (es decir, su organización militar, política y civil) y el movimiento de solidaridad prozapatista. A continuación, establezco una periodización de su historia a partir del año de fundación de las Fuerzas de Liberación Nacional, su antecedente más remoto, hasta nuestros días, con el fin de evaluar sus logros. Para ello tomo en consideración los cambios en su composición y organización internas y sus diferentes fines, objetivos y proyectos políticos a lo largo de ya casi 50 años de existencia. Por último, realizo este balance distinguiendo entre los niveles local, nacional e internacional de la lucha zapatista. Concluyo este escrito reflexionando sobre las paradojas políticas del fenómeno.

Las máscaras rebeldes

Las teorías convencionales de los movimientos sociales y actores colectivos acostumbran a entender sus objetos de estudio como unidades relativamente homogéneas con intereses y objetivos más o menos claros y estables en el tiempo (Estrada, 2015). En sentido contrario, deseo desagregar, analíticamente, el *zapatismo* para dar cuenta de su extrema complejidad interna, dinamismo y contingencia, porque sólo así se puede aprehender los efectos y sentidos plurales, contradictorios y paradójicos de sus discursos y prácticas a lo largo del tiempo.

Concibo el *neozapatismo* como un sistema de protesta compuesto por la conjunción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)¹ y las “bases de apoyo” o, en otros términos, su organización militar y civil.² Su tercer componente consiste en su organización política en Municipios Autónomos Rebeldes

1 La organización militar del EZLN consiste, básicamente, de su (sub) comandancia, Estado mayor (concejo de mandos militares) y “tropas insurgentes”. Hasta antes de 2003, se calcula que la guerrilla contaba con alrededor de 3 mil hombres y mujeres armados y entrenados. Hoy día, los combatientes están desmovilizados. Persiste, no obstante, su organización y práctica militar y jerárquica con su gran influencia en decisiones y actividades del neozapatismo civil y político.

2 Las bases de apoyo se conforman de los zapatistas habitantes de ejidos y poblados en las regiones indígenas de Chiapas.

Zapatistas (MAREZ)³ y Juntas de Buen Gobierno (JBG) (Burguete, 2002 y 2004; Estrada, 2009 y 2013).⁴

El EZLN y las bases de apoyo se vinculan por medio de una compleja organización a nivel local, regional y suprarregional. Localmente, existen “responsables” que son la autoridad política de las poblaciones zapatistas.⁵ Ellos se encargan de la supervisión de las labores de los colectivos y promociones de salud, educación, producción y trabajo. A su vez, reciben directrices de y son coordinados por un “comité clandestino regional”, cuya autoridad recae en un mando militar regional. Por su parte, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI)⁶ dicta instrucciones políticas a los comités regionales y supervisa las labores y decisiones de las autoridades de los MAREZ y las JBG. En su conjunto, municipios y juntas asumen, en lo que consideran “su territorio”, funciones de gobierno en ámbitos de educación, salud, cultura, producción, comercialización, reparto y gestión de tierras, expedición de documentación, policía, administración de justicia y recolección de impuesto, entre otros. Su “jurisdicción” vale únicamente sobre la población zapatista. El resto de los habitantes, que suman la gran mayoría de la población en los supuestos territorios rebeldes, no reconocen la autoridad zapatista y sólo se ve afectada, indirectamente, por las políticas y programas de municipios y juntas (Estrada, 2016a; y Aranda, 2017a).

Por otra parte, el *movimiento de solidaridad prozapatista* está compuesto por el conjunto de actores trasnacionales organizados en forma de red. Aunque los nodos individuales de la red actúan localmente de manera independiente y de acuerdo con su propia agenda y capacidades internas, sin embargo, se movilizan en concierto a sazón de los llamados y convocatorias de la comandancia del EZLN, el CCRI o las autoridades de las JBG. Lo anterior refleja tanto la autonomía de cada uno de estos actores, como también las asimetrías de poder imperantes en el movimiento. Efectivamente, las autoridades militares y políticas del neozapatismo son el nodo central de esta red, que deciden proyectos y quién

3 La gran mayoría de los MAREZ se crearon en diciembre de 1994. Su geografía corresponde a la de la presencia del zapatismo en las zonas Selva, Norte y Altos de Chiapas. En la actualidad, existen 43 municipios.

4 Los Aguascalientes, centros cívico-culturales erigidos en 1994, antecedieron a las JBG. A las sedes de éstas se les conoce, a partir de 2003, como “Caracoles”. Originalmente, se fundaron cinco juntas. Entre 40 y 60 poblaciones zapatistas conforman una “región”. Cuando de 3 a 5 regiones se congregan, se crea un municipio. Los municipios de una “zona” se hallan bajo la jurisdicción de una junta. En 2019, se crearon 11 nuevas JBG o caracoles y 16 MAREZ. Sobre esto último, véase El Universal (2019) “Crea el EZLN 11 nuevos Caracoles y 16 Municipios Autónomos Rebeldes”, en El Universal: <https://www.eluniversal.com.mx/estados/crea-el-ezln-11-nuevos-caracoles-y-16-municipios-autonomos-rebeldes>

5 La autoridad política no coincide, necesariamente, con la autoridad de la asamblea ejidal de los poblados zapatistas.

6 Los integrantes del CCRI son los comandantes indígenas, que, en su mayoría, no son militares, sino líderes indígenas con fuerte influencia regional y comunitaria. Su función no es militar, sino política. Se ocupa de la organización y movilización de masas de las comunidades zapatistas.

integra el movimiento (Leyva y Sonnleitner, 2000; Pleyers, 2009, Schulz, 2014; Estrada, 2016a; Enríquez, 2017; y Aranda, 2017b).

En resumen, entiendo el zapatismo, en un sentido amplio, como la articulación holgada del neozapatismo y el movimiento de solidaridad prozapatista.

Las edades del zapatismo

Es una banalidad, pero conviene recordarla: los fenómenos sociales son construcciones colectivas en el tiempo. El zapatismo no surgió en 1994 de la nada ni se ha mantenido inmutable a lo largo de sus casi 30 años de su aparición pública. Tomando en cuenta lo anterior, propongo periodizar la existencia del zapatismo de acuerdo con dos criterios: 1) los cambios en su composición y organización interna, y 2) la variación de sus fines, objetivos y proyectos políticos. No está por demás apuntar una doble acotación: 1) esta periodización es sólo una herramienta analítica, por lo que los empalmes y continuidades entre los períodos son posibles, aunque esto supone desplazamientos internos del peso de sus elementos, y 2) los fines y objetivos son orientaciones generales de la acción colectiva que, por su ambigüedad misma, funcionan más como valores que como directrices concretas de acción.

La *primera fase* es la de la formación de la guerrilla. Esta etapa se inicia con la fundación de la Fuerza de Liberación Nacional (FLN), en 1969 en el estado de Nuevo León, pasa por la creación del EZLN (1983), como foco de combatientes en Chiapas, el reclutamiento y organización de sus bases de apoyo, y se cierra con el levantamiento armado en enero de 1994. La rebelión insurgente buscaba instaurar, mediante la lucha armada revolucionaria, una república popular y socialista en México (Toledo, 2002; Legorreta, 1998, Cedillo, 2012; Harvey, Pineda y Sánchez, 2015^a y 2015b; Le Bot, 1997; Muñoz, 2003).

Sin renunciar al objetivo ulterior del cambio de régimen, en su *segunda fase* el zapatismo se recompone y reorganiza internamente de manera doble: por un lado, empieza a hacerse acreedor, en los primeros meses de 1994, del apoyo de actores de diversos sectores de la denominada “sociedad civil” nacional e internacional, lo cual sentaría las bases para la conformación del movimiento de solidaridad prozapatista; y, por el otro, en diciembre de 1994, instaura los MAREZ en las regiones indígenas del estado..

La inviabilidad de la toma revolucionaria del poder condujo al zapatismo a reformular su discurso e, inclusive, redefinir su identidad pública y metas políticas. En el marco de la tregua y los diálogos por la paz entre el EZLN y el gobierno federal (febrero de 1994), los diálogos en San Andrés Larráinzar (1995-1997) y la aprobación de la reforma constitucional sobre derechos y culturas indígenas (2001), el neozapatismo da un giro autonomista e indianista a su lucha político-civil. La fundación y operación de los MAREZ, primero, y las

JBG, después, significaron *la pretensión* del establecimiento de una autonomía territorial *de facto*. En esta fase (1994-2003), el cambio de régimen seguía siendo el objetivo central pero no a través del combate armado, sino mediante la lucha civil. Se pretendía su democratización, pero no en términos del establecimiento de una democracia liberal y representativa, sino de la formación de una coalición multisectorial y multclasista que instituyera una democracia popular (De Vos, 2002; Estrada, 2016a; e Inclán, 2018).

En su *tercera fase*, actualmente vigente, el neozapatismo renuncia a tomar el poder político-estatal, avanza en el fortalecimiento de las instituciones de la autonomía territorial y reorganiza sus relaciones con el movimiento solidario prozapatista para establecer una red de “rebeldías” y “resistencias” locales y transnacionales en contra de la globalización neoliberal. Los hitos de este “altermundismo antisistémico” son la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (2005), La Otra Campaña (2006), así como la organización de diferentes eventos político-culturales nacionales e internacionales en los últimos años⁷ y, en el año 2021, la planeación de una gira zapatista en “la otra Europa”.⁸ En este contexto, entre 2007 y 2018, el zapatismo desestima intervenir en la política nacional (Schulz, 2014; Aranda, 2017b).

Los días y las obras

El neozapatismo a nivel local

Una de las razones principales de los indígenas campesinos para sumarse al EZLN como integrantes de sus bases de apoyo fue –y, hasta la fecha, sigue siendo– el acceso a la tierra. El levantamiento armado de 1994 generó una oleada de ocupación de tierras por parte de zapatistas y otros grupos y organizaciones locales. En el discurso neozapatista, este reparto agrario *desde abajo* se le denomina la “recuperación de tierras”. La consecución de nuevas parcelas y más hectáreas ejidales satisfizo las expectativas de los rebeldes, en especial de los más jóvenes entre ellos, que padecían la escasez estructural del recurso y, en consecuencia, la marginación y subordinación en la vida social comunitaria. En efecto, sin tierra propia estaban amenazados su futuro económico, independencia, posibilidad de fundar una fami-

7 Por ejemplo, el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo (1996), el Festival Mundial de la Digna Rabia (2008), la Escuelita Zapatista (2013), el festival de cine Puy ta Cuxlejaltic en Tulán Kaw-Caracol 11 (2019), por ejemplo.

8 Véase Enlace Zapatista (2020), “Una montaña en alta mar”, en <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/05/sexta-parte-una-montana-en-alta-mar/>. Henríquez, Elio (2021), “Llevará el Ejército Zapatista su lucha por los cinco continentes”, en: <https://www.jornada.com.mx/2021/01/02/politica/013n1pol>; y Romero, Raúl (2021), “El EZLN y la Otra Europa”, en: <https://www.jornada.com.mx/2021/01/02/opinion/018a2pol>

lia y reconocimiento como miembros plenos de la comunidad (Villafuerte, 1999; Van der Haar, 2001; Mattiace y Rus, 2002; Eisenstadt, 2011; y Estrada, 2016a).

Aunque el neozapatismo no fue el introductor original, en la organización comunal, de formas de cooperación y autogestión de bienes colectivos,⁹ sin embargo, su refuncionalización para la lucha militar, civil y política contribuyó a la producción de bienes y servicios como la salud, la educación o las cooperativas de producción y comercialización en las poblaciones zapatistas. La participación activa en los “colectivos” no sólo ha beneficiado a las bases de apoyo con las prestaciones y recursos autogestionados, sino que además ha forjado la identificación emocional, intelectual e ideológica con el neozapatismo. Todo ello se traduce en un sentimiento de confianza individual y colectiva de poder resolver problemas y desafíos por sí mismos. Inclusive el hecho de experimentar, en sus propias poblaciones, la solidaridad con su lucha por parte de personas, grupos y organizaciones nacionales e internacionales suscita en las bases de apoyo un sentimiento de orgullo y reconocimiento, que desconocían en una sociedad racista y excluyente (Baronett, Mora y Stahler-Sholk, 2011; y Estrada, 2016a).

Los jóvenes, pero en especial las mujeres zapatistas, han vivido una revaluación positiva de su posición y estatus sociales en sus comunidades. Si bien aún están muy lejos de ser considerados como iguales por parte de los adultos y los varones, también es cierto que el reclutamiento militar en las filas del EZLN de hombres y mujeres solteros, primero, y la movilización permanente para asumir responsabilidades y tareas colectivas a nivel local, municipal y de juntas, después, han modificado parcialmente el “balance de poder” al interior de las comunidades zapatistas en comparación con lo que sucedía en el pasado o sigue aconteciendo, hoy día, en comunidades no zapatistas (Hernández y Zylbergberg, 2004; y Oliveira, 2007).

En su conjunto, la necesidad del neozapatismo de mantener activos a sus integrantes ha inducido procesos de aprendizaje de participación en tareas y funciones de autogestión y autogobierno. Psicosocialmente, ello ha contribuido a desarrollar capacidades de hablar en público, contribuir en deliberaciones y la toma de decisión, en especial entre varones y mujeres jóvenes. Esta autoconfianza es retribuida, localmente, en forma de respeto y reconocimiento. A pesar de lo anterior, las mujeres zapatistas continúan subordinadas a los hombres y, como en el resto del país, aún les queda un gran trecho a recorrer antes de ser consideradas como iguales.

Por lo que respecta a la organización política del neozapatismo, uno no puede más que admirarse de la voluntad y perseverancia de los rebeldes de cons-

9 Originalmente, fueron iniciativas de la iglesia católica y, posteriormente, de activistas y organizaciones campesinas maoístas.

truir y mantener a lo largo del tiempo una compleja organización comunitaria, regional e interregional. Sin exagerar un ápice, éste es un hecho inédito en la historia contemporánea de los movimientos populares en México.¹⁰ En efecto, el neozapatismo ha establecido, a contracorriente y de manera conflictiva, una “autonomía territorial”¹¹ *de facto* y formas de autogobierno a escala municipal y suprarregional. Si bien el ideal discursivo de que todos los zapatistas deben asumir posiciones y tareas de gobierno está muy lejos de cumplirse, no obstante, existe un sistema de participación rotatorio para ejercer el rol de autoridad en los MAREZ y las JBG, que idóneamente, evita la formación de élites y la monopolización del poder.

Municipios y juntas se ocupan de definir, apoyar e implementar proyectos políticos, productivos y comerciales, así como la coordinación de programas de salud y educación para la población zapatista de acuerdo con el principio de “mandar obedeciendo”. En este sentido, el neozapatismo ensaya, en los hechos, la institucionalización de un orden social y político local alternativo al orden dominante que desafía.

Aunque el sustento material de esta organización política proviene, en lo fundamental, del trabajo individual y colectivos de las bases de apoyo, el establecimiento de alianzas de las autoridades políticas neozapatistas con actores de la sociedad civil nacional e internacional ha permitido establecer ciertos circuitos solidarios de comercialización de productos agrícolas y artesanales en el país y el extranjero (Schulz, 2014). Las JBG son las encargadas de repartir, con sentido de equidad, los beneficios económicos entre los zapatistas de las diferentes regiones en Chiapas.

En su pretensión de establecer un orden social y político al margen del Estado mexicano, el neozapatismo ha dotado a las JBG de la autoridad para expedir normatividades de distinta índole, pero sobre todo de impartir justicia en primer lugar y sobre todo entre los rebeldes. Debido a la ineficiencia, corrupción, costos, discriminación y violencia que implica para la población indígena solicitar la

10 El caso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) es comparable en términos de construcción de un gobierno popular. Las diferencias son interesantes, sin embargo, porque la APPO fue un esfuerzo social y político multisectorial y multclasista llevado a cabo, principalmente, en un espacio urbano —la ciudad de Oaxaca—. No obstante, la denominada *Comuna de Oaxaca* fue reprimida violentamente tras casi seis meses de haber instaurado un orden social alternativo al que desafió (Estrada Saavedra, 2016b).

11 La “autonomía territorial” alegada por el neozapatismo es más discursiva que real. En efecto, no supone, en ningún sentido, el control del territorio y la población allí asentada. Se trata, simplemente, de una pretensión de autonomía. En realidad, no existe un “territorio zapatista”, sino poblaciones en las que hay presencia zapatista en grado diverso: ya sea como mayoría, dividida entre zapatistas y no zapatistas o como minorías zapatistas en poblados mayoritariamente no zapatistas. Para el gran espectro de sus actividades y proyectos de MAREZ y JBG, la autonomía incumbe *casi exclusivamente* a los afiliados en el neozapatismo. Así, más que autonomía se trata de autoorganización colectiva en diversas zonas geográficas, en las que compete, junto con el Estado y diferentes organizaciones campesinas independientes, por el gobierno de la población local.

intervención de autoridades judiciales mexicanas para resolver litigios locales, parte de la población no zapatista acude a las JBG para resolver pleitos, especialmente entre zapatistas y no zapatistas, pero en ocasiones también entre grupos no zapatistas. Los procedimientos para dirimir los litigios y las sanciones y penas impuestas son más cercanos a las experiencias y expectativas locales de justicia (Mora, 2015). Paradójicamente, a pesar de que el orden político-autonómico desconoce al Estado mexicano y evita tener contacto con sus representantes, sin embargo, también hay cierta cooperación, a nivel local, con autoridades estatales (incluyendo presidentes municipales, policías y hasta el mismo ejército). Todo ello indica, en otras palabras, cierto reconocimiento, en los hechos, de la autoridad y organización política zapatista por parte de sectores de la población no zapatista y representantes estatales (Melenotte, 2009; Baronett, Mora y Stahler-Sholk, 2011; Megchún, 2017; y Aranda, 2017).

Antes de hacer el cierre de caja de los logros locales del neozapatismo, convendría compararlo con el movimiento indígena-campesino en Chiapas (Alejos, 1994; Bobrow-Strain, 2007; Agudo, 2007; Escalona, 2009; Rus, 2012; Harvey, 2000; Toledo, 2002; Van der Haar, 2001; Eisenstadt, 201; y Estrada, 2018). A diferencia de este movimiento —que, por cierto, es uno de los orígenes de los rebeldes—, el neozapatismo trascendió el horizonte común de aspiraciones de la lucha por la tierra y se propuso llevar adelante, como expuse arriba, una lucha por la autonomía territorial. Así, pasó de la exigencia de reparto agrario a la construcción de un entramado organizativo paraestatal para gobernar un territorio y su población. Lo anterior fue posible gracias a que el neozapatismo cambió la estrategia lucha y arena de conflicto convencionales. Su *agrarismo armado* le permitió establecer una interlocución con el Estado mexicano distinta a la del movimiento campesino. Una vez apagado el fuego de los combates iniciales, pudo avanzar en la construcción de un orden sociopolítico propio. Lo anterior, por último, pudo lograrse también gracias a que el neozapatismo ha destacado, en comparación con las otras organizaciones del movimiento rural chiapaneco, en el establecimiento de amplias y variadas relaciones políticas y alianza con actores nacionales e internacionales.

Los éxitos locales del neozapatismo revelan aspectos “problemáticos” que son, paradójicamente, consecuencia de aquéllos y resultado de las crecientes tensiones entre las bases de apoyo y la comandancia del EZLN.

El reparto de la “tierra recuperada” generó disputas internas entre los zapatistas por su posesión. Las comunidades rebeldes vecinas de los terrenos apropiados se vieron beneficiadas de inmediato tras las invasiones y expulsiones de sus antiguos propietarios legales (que incluían no sólo a pequeños y medianos propietarios mestizos, sino también a ejidatarios no zapatistas). En cambio, poblaciones

zapatistas sin tierras a sus alrededores a tomar por la fuerza,¹² se quedaron con las manos vacías a pesar de que no estaban menos urgidas que las otras para atender las necesidades de una creciente población joven. Esto generó un sentimiento de trato desigual entre compañeros de lucha (Agudo, 2009; Estrada y Viqueira, 2010; Legorreta [s/f]; Melenotte, 2009; y Villalobos y Trench, 2014).

Frente a la contención militar del ejército nacional, muchas comunidades zapatistas, cuyas antiguas organizaciones campesinas se habían integrado al neozapatismo antes del levantamiento, decidieron desafiliarse de los rebeldes y reclamar como suyas las tierras conquistadas y, posteriormente, legalizar su posesión. Pensaron que la revolución les había hecho justicia y que no había mayor razón para exponerse a mayores riesgos en un contexto político cada vez más tenso y, en algunas regiones, sumamente violento (Legorreta [s/f]).

Las tierras recuperadas por el neozapatismo no pasaron a formar propiedad de los ejidos zapatistas ni fueron parceladas a favor de los ejidatarios, sino que están controladas por la “organización”, como los zapatistas denominan al EZLN. Muchas de estos terrenos se pusieron a disposición de zapatistas sin milpa y/o fueron la base para crear una nueva población zapatista con nuevos habitantes desplazados por el conflicto con el Estado o los conflictos internos en las bases de apoyo, que conducirían al abandono del neozapatismo de una parte importante de las comunidades y, en consecuencia, a la expulsión de la minoría zapatista hasta entonces residente en estos poblados.

A estas divisiones comunitarias producto de la disputa por la posesión y usufructo de la tierra, se sumaron otras fracturas como resultado del creciente autoritarismo de la comandancia del EZLN y las autoridades políticas, que empezaron a exigir, ante la creciente desarticulación del neozapatismo, mayor disciplina, compromiso y trabajo, a la vez que aplicaban sanciones más severas para mantener la unidad del movimiento, en un contexto de conflicto con el Estado, diferentes organizaciones campesinas y, en algunas regiones como el Norte y los Altos, bandas paramilitares (Agudo, 2010; Galindo, 2015; Rebón, 2001; y Estrada, 2016a). Muchos integrantes de las bases de apoyo resentían el endurecimiento de los mandos militares y estaban dispuestos a tolerar esta realidad en una situación excepcionalmente difícil. No aceptaban, en cambio, lo que consideraban como arbitrariedades y privilegios indebidos de autoridades zapatistas locales y regionales, que se beneficiaban a sí mismas, sus familiares, facciones y clientelas de los recursos generados en la lucha y los que eran producto —en especie, metálico o trabajo— de la solidaridad del movimiento prozapatista. Así, un sentimiento de trato desigual se hizo presente entre los compañeros de lucha, que, en muchos casos, derivó en la desertión del neozapatismo.

12 Esta carencia de tierra a invadir se debía a que las poblaciones vecinas eran zapatistas, ejidos no zapatistas con los que guardaban una relación respetuosa o, sencillamente, no existía un conflicto previo sobre linderos ejidales o tierras en disputa entre ambas poblaciones.

Las “política de resistencia” del EZLN –consistente en interrumpir el diálogo con el gobierno, no permitir la presencia y acción de agentes estatales en su territorio y rechazar beneficiarse de todo tipo de programas sociales, agropecuarios y regularización de tierras por considerarlos como medias contrainsurgentes enderezadas a desvincular a los insurgentes de sus bases de apoyo–, tuvo como consecuencia, que los zapatistas no pudieran apropiarse de estos recursos públicos, tan necesarios para sortear la dura situación económica que enfrentaban, so pena de ser severamente sancionados. El volumen de la producción agrícola y las ganancias de su comercialización han resultado, no obstante, insuficientes para las necesidades de familias y poblaciones rebeldes.

Asimismo, el alargamiento del conflicto tornaba cada vez más oneroso el mantenimiento de una guerrilla imposibilitada para defender con las armas al pueblo y, además, improductiva económicamente. Por si esto fuera poco, los zapatistas veían con disgusto cómo las poblaciones no zapatistas o ex zapatistas se aprovechaban de bienes, servicios y programas gubernamentales,¹³ por un lado, y de las oportunidades de migración laboral al interior del país o en los EEUU, por el otro. En efecto, los zapatistas no gozaron, durante mucho tiempo, del derecho de migrar para sostener a sus familias debido a la continua y demandante movilización de los zapatistas para cumplir tareas de autogestión y autogobierno. Si abandonaban su comunidad por tres o seis meses, según el caso, corrían el riesgo de ser sancionados e, inclusive, expulsados del movimiento. De este modo, un sentimiento de empobrecimiento relativo y falta de perspectivas se apoderó del ánimo de muchos zapatistas, que ya no estaban dispuestos a soportar el rigor de la política de resistencia del EZLN (Legerreta [s/f]; y Estrada, 2016a).

Estas tensiones, conflictos y divisiones condujeron, en muchas ocasiones, a la violencia física y hasta asesinatos de antiguos ex compañeros de lucha, por un lado, y al establecimiento de relaciones harto ásperas entre los zapatistas y los miembros de otras organizaciones campesinas y comunidades, por el otro (Garza, 2007; Agudo, 2010; Aguilar, Díaz y Viqueira, 2010; y Estrada, 2019). En consecuencia, el tejido social local desgarrado oponía a padres e hijos, parientes, amigos y vecinos, que ahora se veían como enemigos políticos (Oliveira, 2004; Toledo, 2010; Legerreta y Bataillon, 2007). A su vez, los ex zapatistas, enemistados con tiros y troyanos, se han convertido rápidamente en beneficiarios pasivos de programas sociales y agropecuarios públicos. Así, han perdido su capacidad para negociar con autonomía su relación con el Estado (Agudo, 2007; y Villalobos y Trench, 2014).

En lo que respecta a la organización política del neozapatismo en este segundo periodo de su historia, la construcción de las instituciones autonómicas

13 Por ejemplo, escuela, telesecundaria, clínica, carretera, agua entubada, electricidad, apoyos agropecuarios y sociales, etc.

condujo a la confiscación del poder y la autoridad, supuestamente, depositados en las bases de apoyo (Estrada, 2016a). En otras palabras, el control de la comandancia del EZLN sobre las JBG vació de sentido el principio del “mandar obedeciendo”. La política nacional de lucha y movilización, los programas, proyectos, administración y aplicación de recursos han sido definidos y/o aprobados por las autoridades militares. Los mismos MAREZ han visto reducida su jurisdicción y facultades, a su vez, por la intervención de las JBG y su control de recursos, generando dinámicas de competencia entre MAREZ y hasta entre las JBG por la apropiación de recursos escasos, como se ha visto recientemente tras la creación de nuevos Caracoles (Melenotte, 2009; y Meghún, 2017). Como lo formuló un integrante de la JBG de Oventic: “se estira la cobija, pero así se descubija a otros”.¹⁴ Inclusive se originan disputas por recursos de tipo político, como las relaciones y alianzas con ONG y actores del movimiento y red prozapatista, ya que ellas sirven de vehículo para ingreso de financiamiento de programas y proyectos locales o para que productos agrícolas y artesanales zapatistas sean comercializados en circuitos solidarios en sus ciudades y países. La misma presencia *in situ* de miembros del movimiento prozapatista es codiciada, porque supone una derrama modesta de dinero en las comunidades en las que se hospedan, llevan a cabo trabajos o participan en eventos y encuentros político-culturales.

En comparación con el movimiento indígena-campesino de Chiapas de los años setenta y ochenta, que había iniciado maniobras enderezadas a obtener mayor influencia en el proceso de comercialización agropecuario y la ampliación de oportunidades de mercado más allá de las de la burocracia agraria estatal, en cambio el neozapatismo desatendió, por razones ideológicas, este “frente de lucha” al considerar, en su primera fase revolucionaria, que los problemas de producción y comercialización se resolverían en el marco de un régimen comunista o, en su actual fase antisistémica, que el enemigo de los pueblos y la humanidad sería la globalización neoliberal a la que habría que oponerse desmonetizando y desmercantilizando las relaciones sociales. En esta incapacidad ideológico-estratégica para atender la cuestión económica y poder satisfacer eficientemente las necesidades materiales de sus bases de apoyo, se encuentra una de las razones principales de la persistencia de la economía precaria y de subsistencia en el orden autonómico y, como hemos visto, una de las causas principales de la desafiliación del neozapatismo. Justamente este problema estructural ha conducido, en los últimos años, al viraje que se observa de los proyectos agroecológicos a los ganaderos –con los consabidos costos de destrucción del entorno natural.¹⁵

La acertada crítica neozapatista a los problemas de formación de élites, monopolización del poder y suplantación de la representación política se tradujo en un sistema de participación incluyente *desde abajo* y rotatorio, que abrigaba,

14 Agradezco a Carla Zamora por compartirme esta observación de su trabajo de campo.

15 Doy las gracias a Carla Zamora por compartirme esta observación de su trabajo de campo.

además, la expectativa pedagógica de que todos aprendieran a gobernar asumiendo responsabilidad en los asuntos públicos. Esta aspiración, sin embargo, no se ha visto satisfecha en la medida de que la asunción universal de roles de gobierno local no se ha alcanzado –no hay suficientes posiciones y roles de autoridad en la estructura política del neozapatismo, la población zapatista es numerosa y, en el caso ideal, tendría que esperar mucho tiempo para poder servir al pueblo en MA-REZ y JBG. Además, es un hecho que muchos miembros de las bases no tienen interés en la política, y otro tanto ve como un gran costo personal y familiar ocuparse de asuntos colectivos que otros podrían ejercer-. Finalmente, la rotación continua de “autoridades” origina una tensión entre democracia interna irrestricta y eficiencia política para alcanzar metas organizativas.

Finalmente, la pretensión de hegemonía de las JBG de gobernar para toda la población habitante de “su territorio” ha creado resistencia entre comunidades y organizaciones no zapatistas que no reconocen su autoridad y, además, se sienten abandonados por el Estado mexicano, que, en su opinión, se muestra indiferente ante lo que consideran abusos y arbitrariedades del zapatismo (Estrada, 2016a).

El neozapatismo a nivel nacional

El levantamiento armado de 1994 coincidió con el largo proceso de democratización del sistema político mexicano (García de León, 2002 y 2007). De hecho, los eventos políticos de ese fatídico año –el levantamiento mismo, los asesinatos del candidato presidencial y del presidente del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI)– tuvieron el efecto de aceleración de las negociaciones para la reforma y democratización del régimen.

Al igual que una parte importante de la población del país, el EZLN deseaba un cambio de régimen político. En esta coincidencia, el análisis revolucionario de los insurgentes tenía razón. No obstante, su ensimismamiento ideológico le impidió leer, de manera correcta, los signos de los tiempos. Los mexicanos querían acabar con el sistema político autoritario sustituyéndolo, vía electoral de por medio, por una democracia representativa, una efectiva división de poderes y el establecimiento de un auténtico Estado de derecho. Sin entender la pluralidad política y heterogeneidad social de la sociedad mexicana, el EZLN pensaba erigir, por el contrario, una república popular socialista.

Los compromisos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC),¹⁶ las presiones de la sociedad civil nacional e internacional por la paz y la neutralización militar de los rebeldes, orillaron al gobierno mexicano a reconocer a los zapatistas como un actor legítimo con el que habría que negociar la paz y sus demandas políticas. En esta coyuntura, los rebeldes pudieron entablar múlti-

16 El TLC entraría en vigor precisamente el 1° de enero de 1994.

ples alianzas con un variopinto grupo de actores sociales y políticos mexicanos y extranjeros, llevar a cabo su política de resistencia y autonomía territorial.

Sin embargo, lo anterior lo consiguieron en condiciones de sobrevivencia y marginalidad política. Pugnas y divisiones en el seno del neozapatismo y, posteriormente, del movimiento zapatista terminaron por debilitar local y nacionalmente al primero. A largo plazo, los rebeldes sortearon la represión gubernamental, pero perdieron influencia en la arena política nacional al concentrar sus esfuerzos de sobrevivencia y consolidación de su orden autonómico en Chiapas, desaprovechando la oportunidad de involucrarse en las negociaciones de la reforma política y electoral entre las élites políticas nacionales y lograr que sus intereses –y los de sectores populares más amplios– fueran incluidos y representados efectivamente en el nuevo marco legal e institucional que se estaba creando (Inclán, 2018).¹⁷ Estas reformas garantizarían la competencia electoral libre y auténtica para acceder al poder. Sus efectos fueron casi inmediatos: en 1997 se iniciaría el ciclo electoral de la transición democrática a nivel federal con la pérdida del PRI de la mayoría parlamentaria y, en el año 2000, de la presidencia de la república. Algo similar sucedería en las negociaciones trucas entre el gobierno federal y el EZLN en San Andrés Larráinzar (1996) y en la discusión de la reforma constitucional sobre cultura y derechos indígenas (2001). El EZLN y el movimiento prozapatista no alcanzaron a elaborar una estrategia más realista y efectiva para alcanzar sus metas políticas (Inclán, 2018). Es probable que no les haya interesado ni convenido llegar a un entendimiento con el gobierno y los legisladores, en la medida en que esto hubiese significado una posible pérdida de poder e influencia entre la población indígena de Chiapas y el país. En otros términos, un proyecto antisistémico, paradójicamente flanqueado por la constitución, hubiera implicado privarse del aura revolucionaria y, en consecuencia, los apoyos materiales y simbólicos derivados de ella, por un lado, y asumir responsabilidades institucionales, por el otro.

Las tensiones entre la consecución de metas nacionales y locales del neozapatismo mostraron las diferencias importantes existentes entre los intereses de los líderes rebeldes y sus bases de apoyo. Ejemplos de ello son las pifias de las órdenes de la comandancia del EZLN giradas a sus bases civiles para participar o no en procesos electorales, favoreciendo, con juicios y órdenes erráticos, la permanencia del PRI en diferentes procesos de renovación de ayuntamientos chiapanecos (1995) (Viqueira y Sonnleitner, 2000)¹⁸ o en las elecciones federales de 2006, cuando descalificó con animadversión al izquierdista Partido de la Revolu-

17 La decisión de no participar en el proceso de negociación de la transición democrática fue, en parte importante, responsabilidad del propio EZLN (Inclán, 2018), pero también fue un elemento de la estrategia del gobierno federal para que el conflicto chiapaneco quedara constreñido al estado del sureste y, más concreto, a la zona de conflicto (Pérez, 2009).

18 En los comicios estatales para la gubernatura de Chiapas en 1994, el EZLN apoyó al candidato del PRD, Amado Avendaño.

ción Democrática (PRD), en principio su aliado natural, y contribuyendo, así, a que el Partido Acción Nacional (PAN) ganara la presidencia de la república. Localmente, estos chascos debilitaron la influencia política del neozapatismo, generaron situaciones de enfrentamiento violento entre los diferentes grupos políticos en los municipios y, finalmente, desafección a los rebeldes. A nivel nacional, ciudadanos y grupos simpatizantes con la lucha zapatista empezaron a distanciarse de los rebeldes chiapanecos. Inclusive la actitud del EZLN de escenificarse como *el* representante de los pueblos indígenas condujo a tensiones en el mismo seno del movimiento indígena nacional (el Congreso Indígena Nacional) privándolo de aliados en este sector importante de la sociedad (Pitarch, 2004; y Pérez, 2005).

En fin, si bien el cambio de discursos y metas del neozapatismo –del marxismo revolucionario al multiculturalismo indigenista, autonomista y antisistémico (Molina, 2000; Muñoz, 2003; y Ávila, 2019)– le granjeó una ampliación de alianzas con múltiples actores de la sociedad civil nacional e internacional, no obstante, entre más resonancia tenía su nuevo marco discursivo en los integrantes de las redes de solidaridad transnacionales, más difusas se volvieron sus metas políticas, al grado de no ser alcanzadas –salvo la de mantenerse en la resistencia. Este nuevo discurso heteróclito contribuyó a disminuir la presión sobre el Estado para responder a sus demandas originales y, de este modo, gestionar el conflicto con el EZLN permitiéndole desarrollar su autonomía *de facto* sin reprimirlo de manera abierta (Inclán, 2018).

El giro antisistémico del zapatismo refrendaría su arraigado rechazo revolucionario a la democracia representativa al desistir de la lucha política institucional. El lema “cambiar el mundo sin tomar el poder” expresa su convicción ideológica de que el enemigo de los pueblos, la humanidad, la naturaleza y el planeta no sería el Estado, sino el sistema capitalista neoliberal globalizado. Consecuentemente, los políticos, representantes populares y autoridades públicas serían considerados como meros “capataces” y no como los “patrones de la finca”, para citar las palabras de un comandante indígena en su alocución del 1º de enero de 2019.¹⁹ Esta posición ideológica hace entendible su lucha por la construcción de autonomías territoriales fuera de la esfera de influencia de las prácticas corruptas del sistema político y el capital (Pleyers, 2009; y Aranda, 2017^a).

En este contexto, podría resultar paradójico el reciente apoyo del neozapatismo a los esfuerzos del Congreso Nacional Indígena para que su candidata independiente a la presidencia de la república, la médica tradicional nahua María de Jesús Patricio Martínez, pudiera participar en las elecciones federales de 2018. En realidad, el EZLN no pretendió acceder al poder político por medio de los

19 Palabras del CCRI-CG del EZLN a los pueblos zapatistas en el 25 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido (2019), en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/01/01/palabras-de-la-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-dirigidas-a-los-pueblos-zapatistas/>

comicios, si no utilizar el escenario electoral para hacer públicos los agravios y demandas de los pueblos indígenas, en general, y entablar y/o reforzar alianzas con otros actores para continuar su lucha autonómica y antisistémica, en particular (Aranda, 2017^a).

EZLN y las guerrillas en México

Al igual que en el caso del movimiento campesino e indígena, la trayectoria del neozapatismo destaca si se le compara con la de las guerrillas en el México posrevolucionario. En efecto, se puede considerar al EZLN como la única guerrilla que, si bien fue neutralizada militarmente, no fue desarticulada y aniquilada como sus pares rurales y urbanos de los años sesenta y setenta. La feliz conjunción de la entrada en vigor del TLC, la fuerza del proceso de democratización en México, las movilizaciones de la sociedad civil nacional en contra de la guerra en Chiapas, el reconocimiento de la justicia de las demandas políticas de los alzados, la presión internacional para resolver el conflicto por medios políticos y, por supuesto, el relativamente rápido control y la clara supremacía militar del ejército nacional en la zona de conflicto, obligaron al EZLN a reconvertirse, en los siguientes años y, sin duda, de manera táctica y oportunista, en un movimiento indianista y autonomista armado, que evitó hacer uso del fuego.²⁰ Como vimos, esto le permitió convertirse en interlocutor legítimo del Estado mexicano y negociar sus demandas en términos políticos.

En comparación con otras guerrillas (Bellingeri, 2003; y Castellanos, 2011), tal vez lo que más despunta del EZLN es el volumen del número de combatientes y civiles que se sumaron a su proyecto. Se calcula que, entre 1960 y 1970, alrededor de 1 800 personas participaron directamente en las diferentes guerrillas rurales y urbanas en México. En 1974, la coalición nacional de guerrillas urbanas que se conoció como la Liga 23 de Septiembre, contaba con apenas unos 300 militantes armados (Rodríguez, 2020). En comparación, se estima que, en su momento más alto de crecimiento, el EZLN estuvo compuesto de alrededor de tres mil combatientes armados y entrenados. Más notable es quizás el dato de que, mientras que las guerrillas urbanas eran grupúsculos sin ningún vínculo orgánico con los sectores sociales que decían representar y por los cuales luchaban,²¹ el EZLN reclutó y organizó, en cambio, una amplísima base de apoyo que superaba decenas de miles de campesinos indígenas en Chiapas, dispuestos a poner a disposición de los insurgentes a sus hijos e hijas como combatientes del EZLN, a equipar y avituallar a los rebeldes, a apoyar su

20 Es probable que este giro estratégico del EZLN haya tenido que ver, en parte también, con el aumento de la violencia criminal en Chiapas.

21 No fue el caso de las guerrillas comandadas por Rubén Jaramillo, Arturo Gámiz y Genaro Vásquez o Lucio Cabañas, que sí tenían relaciones y apoyo de grupos sociales, aunque en ningún caso a la escala alcanzada por el EZLN.

opción por la lucha armada y correr los riesgos que esto implicaba. Paradójicamente, su éxito en el reclutamiento y organización de sus bases de apoyo se lo debía a la estrategia maoísta de “lucha popular prolongada” y “acumulación de fuerza” hasta que las masas decidieran por sí mismas iniciar la fase revolucionada armada —estrategia y concepción de la izquierda social maoísta, que tanto criticaron los verticales líderes militares del FLN por considerarla “reformista” (Estrada, 2016a).

Finalmente, el EZLN se distingue de las otras guerrillas por la renovación del contenido y forma del discurso político, menos hecho en la horma militarista, jerárquica, sacrificial, apocalíptica, plúmbea y de manual marxista-leninista de sus contrapartes mexicanas, centro y sudamericanas. En cambio, se trató de una novedosa forma de comunicación moral, lúdica, poética, irónica, simbólica y harto ambigua, que, por su carácter multívoco, tuvo resonancias en los más variopintos públicos. Marxistas-guevaristas, indianistas, feministas, multiculturalistas, ambientalistas, populistas, autonomistas, antisistémicos, altermundistas, antipartidistas, contraculturales diversos y muchos actores más se han sentido interpelados e identificados con el neozapatismo y, eventualmente, se han sumado al movimiento prozapatista o las iniciativas de los rebeldes.

El movimiento prozapatista

El levantamiento armado del EZLN en 1994, en una región periférica de un país también periférico, de acuerdo con la mirada eurocentrista, inspiró y reanimó las contiendas y movilizaciones izquierdistas globales, cuyas energías utópicas parecían haberse consumido tras la caída del bloque comunista a finales de la década de los ochenta. Para el etnocentrismo europeo y norteamericano, las demandas de justicia social, reconocimiento de la identidad y cultura de los pueblos originarios, la exigencia de participación política e inclusión social, la ponderación del papel de las mujeres y de la comunidad, el desafío a un régimen autoritario y corrupto e, inclusive, la misma composición indígena del zapatismo y su “puesta en escena” en las exuberante geografía montañosa y selvática de Chiapas, resultaban ideales para todo tipo de proyecciones románticas, como las del buen salvaje que, en defensa de la dignidad y la naturaleza misma, se opondría heroicamente al individualismo consumista vaciado de sentido y la razón instrumental de la dominación política y económica de Occidente y anunciaría la buena nueva emancipadora de que “otro mundo es posible”.

La insatisfacción con el estado de cosas en sus propias sociedades —resultado de una primera oleada de desregulación mercantil y financiera, el creciente desmontaje de sus Estados de bienestar, una fuerte reestructuración del mercado laboral y un sentimiento omnipresente de que el “fin de la historia” se había instalado como un presente perenne y vacuo—, creó las condiciones morales, afectivas

e intelectuales para que una parte de la izquierda de estas sociedades revitalizara sus ancestrales fantasías acerca del “otro” y se sintieran inspirados e identificados con los rebeldes chiapanecos. No menos cierto es que, en esta identificación, el discurso heteróclito de la insurgencia zapatista permitía todo tipo de lecturas sobre los alzados y el significado de su lucha. Así, el neozapatismo como “significante vacío”, que propicia el establecimiento de cadenas de equivalencias entre actores diversos, facilitó la constitución del movimiento prozapatista transnacional, cuyo centro mediáticamente visible ha sido, hasta la fecha, el EZLN. Su contribución consiste en ser un pionero del altermundismo y reanimar las luchas postcomunistas en contra de la globalización neoliberal.

La coincidencia del levantamiento de 1994 con la primera difusión del uso de la internet (Schulz, 2014; y Enríquez, 2017), permitió al EZLN, primero, y al movimiento prozapatista, después, utilizar su potencial como instrumento de comunicación sin depender directamente de los medios de comunicación tradicionales²² para, segundo, divulgar su discurso, demandas y posiciones contrarrestando las del gobierno mexicano y, en tercer lugar y no menos significativo, fungir como medio de organización del movimiento prozapatista —un movimiento, estructurado en forma de red, que, por su carácter traslocal, era difícil de contrarrestar y reprimir para el Estado mexicano —exceptuando en los momentos de movilización en la “zona de conflicto”. Posteriormente, su original uso de las tecnologías de la información y comunicación inspiró a los pioneros del altermundismo. Hoy día, éste es parte del repertorio de organización y movilización de todo actor colectivo en el mundo.

Con su discurso y ejemplo antisistémico, antiinstitucionalista y de democracia radical de base, el EZLN y el movimiento prozapatista han inspirado la construcción local de “un mundo en el que quepan todos los mundos”. Esta suerte de “zapatismo portátil” para “uso doméstico” del que se apropiaron sus simpatizantes mexicanos, latinoamericanos, europeos y norteamericanos ayudó a impulsar y legitimar la micropolítica de la izquierda autonomista a favor de construcción de formas de sociabilidad alternativas a las dominantes entre mujeres y hombres, entre los diferentes y subordinados y entre seres humanos y el entorno natural, enderezadas a cambiar la vida individual y colectiva de activistas aquí y ahora y no hasta el momento posterior a la toma del palacio de invierno bajo la dirección de un partido o un líder carismático. Esta micropolítica se caracteriza por ser descentralizada, ateleológica, no instrumental, autogestiva y organizada en forma de “resistencias locales” al Estado y capitalismo. De este modo, la vida cotidiana se politiza y la política se vuelve algo cotidiano que incumbe e interpela a todos (Pleyers, 2009; y Aranda y Ramírez, 2019).

22 Salvo el caso del diario nacional *La Jornada*, que se convirtió en el órgano de difusión y cronista prácticamente incondicional del neozapatismo.

En resumen, en comparación con muchos otros movimientos altermundistas, cuyas expectativas no han pasado del orden de las aspiraciones discursivas, el notable logro del movimiento prozapatista es que ha proporcionado al neozapatismo de recursos humanos, materiales y simbólicos para construir un entramado político institucional y practicar, localmente, lo que denominan su autonomía.

Por otro lado, en este movimiento se han experimentado las tensiones entre sus componentes, es decir, el EZLN y los actores y grupos solidarios transnacionales, producto de las asimetrías de poder internas y las expectativas heterogéneas y, en ocasiones, contrarias que imperan en él. A pesar de su discurso democrático e incluyente, la comandancia del EZLN ha exigido lealtad incondicional a los integrantes del movimiento prozapatista, confiar sin cuestionamientos en su “palabra” y apoyar sus iniciativas y estrategias. Aquellos individuos, grupos y organizaciones que han manifestado críticas y disensos, creyendo de buena fe en la discusión democrática y plural entre pares, han sido, en ocasiones, descalificados y expulsados. El sectarismo del EZLN se ha traducido para sus bases de apoyo en la suspensión de proyectos de cooperación *in situ* de ONG, la cancelación de oportunidades de producción y comercialización de mercancías o, simplemente, el disfrute de la presencia de los solidarios en comunidades rebeldes.

Por último, el proceso de reorganización militar, civil y política del neozapatismo, en la etapa en que los zapatistas renuncian a involucrarse en la política nacional y dan un giro antisistémico a su lucha, supuso una disminución notable de la comunicación pública del EZLN. Vuelto hacia sí mismo, descuidó sus relaciones y alianzas con los integrantes del movimiento prozapatista. Ante este silencio, muchos de ellos invierten su energía en la atención de problemas locales en sus propios países y la solidaridad con otros actores en resistencia, como los kurdos, los palestinos, los manifestantes de la Primavera Árabe o el movimiento Occupy Wall Street, por ejemplo. Otros, en cambio, se han desvinculado de la red zapatista. Así, el movimiento prozapatista se encuentra en un estado de latencia, que hace difícil pronosticar si será capaz, y bajo qué circunstancias, alcanzar el pico de solidaridad al que llegó hacia el cambio de siglo y en el contexto de las disputas políticas en torno a la reforma constitucional sobre derechos y culturas indígenas (Estrada, 2016a; y Aranda, 2017^a).

Conclusiones: el significado político del zapatismo

En este artículo, me he ocupado de hacer un balance de los logros sociales y políticos del zapatismo, considerando las diferentes etapas de su historia, los cambios en su composición interna, las metas colectivas perseguidas en distintas arenas de conflicto y las experiencias de diversos segmentos de integrantes de este complejo sistema de protesta.

En esta evaluación, se puede destacar un trío de paradojas. La primera consiste en que el neozapatismo es el último movimiento agrario armado de la posrevolución y, a la vez, uno de los primeros movimientos altermundistas en contra de la globalización neoliberal. Por la composición y las demandas de sus bases de apoyo, se trata, en efecto, de un actor rural, pero por las formas de activismo, organización, movilización, heterogeneidad, comunicación, reclamos y concepción de la política del movimiento de solidaridad prozapatista, el zapatismo puede calificarse como un actor altermundista.

La segunda paradoja reside en el hecho de que el neozapatismo se propuso acabar con el régimen político mexicano mediante un levantamiento armado. Sin embargo, sus demandas sociales y políticas y sus aspiraciones de justicia social provienen, como el propio nombre del EZLN, del vocabulario político de la Constitución de 1917.²³ La población a la que el neozapatismo afirma representar es, asimismo, un producto de las políticas agraria e indigenista del Estado mexicano, que arraigaron al campesino al ejido y al indígena al mundo rural como los únicos horizontes legítimos de aspiración e identidad. Aún más, su pretensión de autonomía territorial ha sido organizada a imagen y semejanza de las estructuras estatales con sus diversos niveles de representación y gobierno. Las instituciones autonómicas pueden ser vistas como parodias o inversiones del orden de dominación político, pero de ninguna manera como su superación o subversión. El lenguaje de la hegemonía del Estado mexicano habla por medio de las palabras y las prácticas del zapatismo.

En tercer término, resulta paradójica la convivencia entre la genuina participación activa y los ejercicios cotidianos de democracia directa de las bases de apoyo zapatistas, por un lado, y las prácticas autoritarias y de concentración del poder del liderazgo del EZLN, por el otro. Es probable que la tensión entre los impulsos democratizadores y los autoritarios al interior de este sistema de protesta sea, más que un obstáculo, una condición de su funcionamiento y, acaso, de su éxito colectivo –a pesar de las múltiples y constantes defecciones de sus militantes y simpatizantes a lo largo de su existencia y hasta hoy día.

Por otro lado, en toda esta historia de conflicto, exclusión y marginación, el Estado mexicano tiene una gran parte de responsabilidad. Si comparamos la respuesta que dio al zapatismo con la que aplicó a otros “actores subversivos” apenas unos 20 años antes del levantamiento y, también, si la ponemos en perspectiva en relación con las sangrientas guerras civiles y luchas revolucionarias y populares al sur de nuestra frontera en esa misma época, hay que reconocer al gobierno federal la prudencia y el predominio de la política para enfrentar a los re-

23 A saber: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz, como lo manifestaron en la primera Declaración de la Selva Lacandona el 1° de enero de 1994. Cfr. EZLN, <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/01/primer-declaracion-de-la-selva-lacandona/>

beldes del sureste. Las millonarias inversiones en programas y políticas públicas de toda índole en Chiapas, en general, pero en la zona de conflicto, en particular, pudieron haber tenido un efecto de desarrollo a largo plazo para superar la pobreza e integrar realmente a los indígenas, en términos de igualdad y sin discriminaciones, a la sociedad mexicana. Pero no sucedió así. Ni siquiera en la forma de un “desarrollismo contrainsurgente” (Villalobos y Trench, 2014). El dinero no fue utilizado con inteligencia. Se gastó mucho para neutralizar la influencia del zapatismo y no poco se perdió en la corrupción. La miseria y bajísima productividad del ejido en México se multiplican en las regiones indígenas. En esta situación, la migración ha sido la opción para muchos hombres y mujeres jóvenes, tanto zapatistas como de otro signo político. El mercado laboral no agrícola en Chiapas no ofrece alternativas a esta población caracterizada, desgraciadamente, por su bajísimo nivel educativo. La economía no crece ni genera empleos. Y a todo ello se ha sumado en los últimos la presencia del tráfico de drogas y de personas en esta región del país.

La representación política inefectiva de los intereses de actores populares subordinados y excluidos habla de una transición democrática incompleta. Nuestra democracia electoral es, sin duda, confiable, pero no es liberal ni se fundamenta en un auténtico Estado de derecho. Nuestras calamidades colectivas –la ineficiencia, el clientelismo, la falta de transparencia y rendición de cuentas, la corrupción y la impunidad– caracterizan aún al régimen producto de la transición a la democracia. El neozapatismo podría jugar un papel importante en la vida pública mexicana, pero antes tendría que reexaminar su concepción política antisistémica. El mundo puede y debe cambiarse en y fuera de las sedes del poder político en el marco del diálogo y el conflicto democrático de una pluralidad de actores.

REFERENCIAS

- AGUDO, ALEJANDRO (2010). “‘Rumores’ zapatistas: el pragmatismo de las identidades histórico-políticas en El Limar (Tila)”. En: Marco Estrada y Juan Pedro Viqueira (coords.). *Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista. Microhistorias políticas*. (pp. 217-275). México: El Colegio de México.
- AGUDO, ALEJANDRO (2009). “Actores, lenguajes y objetos de confrontación y conflicto en la Zona Chol de Chiapas”. En Marco Estrada (coord.). *Chiapas después de la tormenta. Estudios sobre economía, sociedad y política*. (pp. 457-500). México: El Colegio de México, Cámara de Diputados, LX Legislatura, Gobierno del Estado de Chiapas.
- AGUDO, ALEJANDRO (2007), “Legados históricos en movimiento. Colonización agraria indígena y conflicto en Tila, zona norte de Chiapas”, *Sociológica*, núm. 63, año 22, pp. 51-84.

- AGUILAR, EUFEMIO, DÍAZ, MARTÍN y VIQUEIRA, JUAN PEDRO (2010). “Los otros acuerdos de San Andrés Larráinzar”. En: Marco Estrada y Juan Pedro Viqueira (coords.). *Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista. Microhistorias políticas*. (pp. 331-417). México: El Colegio de México.
- ALEJOS, JOSÉ (1994). *Mosojántel: Etnografía del Discurso Agrarista entre los Choles de Chiapas*. México: UNAM.
- ARANDA, MARCO y RAMÍREZ, MIGUEL (2019), “Movimientos sociales y democracia: dimensiones políticas y culturales”, *Movimientos. Revista Mexicana de Estudio de los Movimientos Sociales*, n°.2, pp. 32-56.
- ARANDA, MARCO (2017^a), “Internet, neozapatismo y movimientos sociales en Europa: Dinámicas organizacionales e infraestructuras comunicacionales para la resistencia”. En: Miguel Ramírez Zaragoza (ed.). *Movimientos sociales en México. Apuntes teóricos y estudios de caso*. (pp. 225-246), México: Colofón/Universidad Autónoma Metropolitana/Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales.
- ARANDA MARCO (2017b). “La Institucionalización del Proyecto Zapatista: Autonomía, Democracia y Gobierno en el Sureste Mexicano”, *Trayectorias*, n. °44, pp. 23-42.
- ÁVILA, ODÍN (2019). “El sujeto zapatista y su proyecto político. Un análisis desde documentos fundamentales”, *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 19(37), pp. 83-94.
- BARONETT, BRUNO, MORA, MARIANA y STAHLER-SHOLK, RICHARD (coords.) (2011). *Luchas ‘muy otras’. Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas*. México: CIESAS, UAM y UAC.
- BELLINGERI, MARCO (2003). *Del agrarismo armado a la guerra de los pobres. Ensayos de la guerrilla rural en el México contemporáneo, 1940-1974*. México: Ediciones Casa Juan Pablos y Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
- BOBROW-STRAIN, AARON (2007). *Intimate enemies: Landowner, power, and violence in Chiapas*. Durham: Duke University Press.
- BURGUETE, ARACELI (2004). “Desplazando al Estado: la política social zapatista”. En: Pérez, Maya (coord.). *Tejiendo historias. Tierra, género y poder en Chiapas*. (pp. 143-189). México: INAH.
- BURGUETE, ARACELI (2002). “Procesos de autonomía *de facto* en Chiapas. Nuevas jurisdicciones y gobiernos paralelos en rebeldía”. En: “, en Shannan Mattiace, Rosalba Hernández, Jan Rus, Jan (eds.). *Tierra, libertad y autonomía: impactos regionales del zapatismo en Chiapas*. (pp. 269-317). México: CIESAS e IWGIA.

- CASTELLANOS, LAURA (2001). *México armado 1943-1981*. México: Era.
- CEDILLO, ADELA (2012): “Análisis de la fundación del EZLN en Chiapas desde la perspectiva de la acción colectiva insurgente”, *LiminaR*, n.º 2, pp. 15-34.
- DE VOS, JAN (2002). *Una tierra para sembrar sueños. Historia reciente de la Selva Lacandona, 1950-2002*. México: FCE-CIESAS.
- EISENSTADT, TODD (2011). *Politics, Identity, and Mexico's Indigenous Rights Movements*. UK: Cambridge University Press.
- ENRÍQUEZ, JAVIER (2017). “Dos actos fundacionales para los nuevos movimientos sociales: EZLN y la Batalla de Seattle”, *Revista internacional de Historia de la Comunicación*, n.º 8, pp. 89-112.
- ESCALONA, JOSÉ LUIS (2019). *Política en el Chiapas rural contemporáneo. Una aproximación etnográfica al poder*. México: UNAM, UAM, UIA y CIESAS.
- ESTRADA, MARCO (2019). “Muerte sin fin. Una relectura de la matanza de Acteal de 1997”. En Marco Estrada. *Contornos de lo político. Ensayos sociológicos sobre memoria, protesta, violencia y Estado*. (pp. 123-163). México: El Colegio de México.
- ESTRADA, MARCO (2018). “Chiapas and the Zapatista National Liberation Army”. En: William Beezley (ed.): *The Oxford Research Encyclopedia of Latin American History*. (pp. 1-26). New York: Oxford University Press.
- ESTRADA, MARCO (2016^a [2007]). *La comunidad armada rebelde y el EZLN. Un estudio histórico y sociológico de los tojolabales en las Cañadas Tojolabales de la Selva Lacandona (1935-2005)*. México: ColMex, 2º edición, corregida y aumentada.
- ESTRADA, MARCO (2016b), *El pueblo ensaya la revolución. La APPO y el sistema de dominación oaxaqueño*. México: El Colegio de México.
- ESTRADA, MARCO (2015). *Sistemas de protestas. Esbozo de un modelo no accionalista de los movimientos sociales*. México: El Colegio de México.
- ESTRADA, MARCO (2013). “Zapatista movement”. En: David Snow, Donatella Della Porta, Bert Klandermans y Doug McAdam, Doug (eds.). *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*. (pp. 1419-1422). London: Blackwell Publishing.
- ESTRADA, MARCO (2009). “Articulando la resistencia: la organización militar, civil y política del neozapatismo”. En: Marco Estrada (ed.). *Chiapas después de la tormenta. Estudios sobre economía, sociedad y política*. (pp. 501-528) México: El Colegio de México, Cámara de Diputados, LX Legislatura, Gobierno del Estado de Chiapas.

- ESTRADA, MARCO y VIQUEIRA, JUAN PEDRO (coords.) (2010). *Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista. Microhistorias políticas*. México: El Colegio de México.
- GALINDO DE PABLO, ADRIÁN (2015). “El paramilitarismo en Chiapas. Respuesta del poder contra la sociedad organizada”, *Política y Cultura*, n°. 44, pp. 189-213.
- GARCÍA DE LEÓN, ANTONIO (2007). “From Revolution to Transition: The Chiapas Rebellion and the Path to Democracy in Mexico”. En: Sarah Washbrook (ed.). *Rural Chiapas Ten Years after the Zapatista Uprising*. (pp. 92-110). New York/London: Routledge.
- GARCÍA DE LEÓN. ANTONIO (2002). *Fronteras interiores. Chiapas: una modernidad particular*. México: Océano.
- GARZA, ANNA (2007). “Conflicto, etnicidad y género en la política interna de San Pedro Chenalhó, Chiapas”, *Sociológica*, n°. 63, pp. 85-110.
- HARVEY, NEIL, PINEDA, FRANCISCO y SÁNCHEZ, CARLOS (eds.) (2015a). *Las Fuerzas de Liberación Nacional y la Guerra Fría en México 1969-1974*. Nuevo León: Grupo editorial de la Casa de Todas y Todos. Volumen I de Cuadernos de Trabajo: Dignificar la Historia.
- HARVEY, NEIL, PINEDA, FRANCISCO y SÁNCHEZ CARLOS (2015b).., *Las Fuerzas de Liberación Nacional y los combates por la memoria 1977-1977*. Nuevo León: Grupo editorial de la Casa de Todas y Todos. Volumen II de Cuadernos de Trabajo: Dignificar la Historia.
- HARVEY, NIEL (2000). *La rebelión de Chiapas. La lucha por la tierra y la democracia*. México-Era.
- HERNÁNDEZ, ROSALBA y ZYLBERGBERG, VIOLETA (2004). “Alzando la vista: los impactos del zapatismo en la organización y vida cotidiana de las mujeres indígenas”. En: Maya Pérez (coord.). *Tejiendo historias. Tierra, género y poder en Chiapas*. (pp. 219-246). México: INAH.
- INCLÁN, MARÍA (2018). *The Zapatista Movement and Mexico's Democratic Transition. Mobilization, success and survival*. New York: Oxford University Press.
- LE BOT, YVON (1997). *Subcomandante Marcos. El sueño zapatista*. Barcelona: Plaza y Janés.
- LEGORRETA, MA. DEL CARMEN (manuscrito inédito, s/f). *El EZLN en Chiapas en perspectiva histórica*. pp. 213-225.

- LEGORRETA, MA. DEL CARMEN Y BATAILLON GILLES (2007). “Aventuras en el seno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: una conversación con Alfonso Toledo Méndez”, *Sociológica*, n°.63, pp. 213-245.
- LEGORRETA, MA. DEL CARMEN (1988). *Religión, política y guerrilla en las Cañadas de la Selva Lacandona*. México: Cal y Arena.
- LEYVA, XÓCHITL y SONNLEITNER, WILLIBALD (2000). “¿Qué es el neo-zapatismo?”, *Espiral. Estudios sobre Estado y sociedad*, VI, n.º 17 pp. 163-202.
- MATTIACE, SHANNAN, HERNÁNDEZ, ROSALBA y RUS, JAN (2002). *Tierra, libertad y autonomía: impactos regionales del zapatismo en Chiapas*. México: CIESAS e IWGIA.
- MEGCHÚN, RODRIGO (2017). “Política de baja intensidad: uso estratégico de los límites estatales en un contexto de militarización. El caso del ejido Emiliano Zapata en la selva Lacandona, Chiapas”. En: Alejandro Agudo, Marco Estrada y Marianne Braig (eds.). *Estatalidades y soberanías, “disputadas: la reorganización contemporánea de lo político en América Latina*. (pp. 205-241). México: El Colegio de México
- MELENOTTE, SABRINA (2009). “Una experiencia zapatista: San Pedro Pohló, doce años después”. En: Francis Mestries, Geoffrey Pleyers y Sergio Zermeno (coords.). *Los movimientos sociales: de lo local a lo global*. (pp. 231-248). México: UAM-A y Anthropos.
- MOLINA, IVÁN (2000). *El pensamiento del EZLN*. México: Plaza y Valdés.
- MORA, MARIANA (2015). “The Politics of Justice: Zapatista Autonomy at the Margins of the Neoliberal Mexican State”, *Latin American and Caribbean Ethnic Studies* 10, n°. 1, pp. 87-106.
- MUÑOZ, GLORIA (2003). *20 y 10, el fuego y la palabra*. México: La Jornada Ediciones y Rebeldía.
- OLIVERA MERCEDES (2007). “Subordination and Rebellion: Indigenous Peasant Women in Chiapas Ten Years after the Zapatista Uprising”. En: Sarah Washbrook (ed.). *Rural Chiapas Ten Years after the Zapatista Uprising*. (pp. 192-212). New York/London: Routledge.
- OLIVERA, MERCEDES (2004). “Sobre las profundidades del mandar obedeciendo”. En: Maya Pérez (coord.). *Tejiendo historias. Tierra, género y poder en Chiapas*. (pp. 355-385). México: INAH.
- PÉREZ, MAYA (2005). *¡Todos somos zapatistas! Alianzas y rupturas entre el EZLN y las organizaciones indígenas de México*. México, INAH.

- PITARCH, PEDRO (2004). “El zapatismo y el arte de la ventriloquia”, *Istor*, n°. 17, pp. 95-132.
- PLEYERS, GEOFFREY (2009). “Autonomías locales y subjetividades en contra del neoliberalismo: hacía un nuevo paradigma para entender los movimientos sociales”. En: Francis Mestries, Geoffrey Pleyers y Sergio Zermeno (coords.). *Los movimientos sociales: de lo local a lo global*. México: UAM-A y Anthropos.
- REBÓN, JULIÁN (2001). *Conflicto armado y desplazamiento de población. Chiapas 1994-1998*. México: FLACSO-Porrúa.
- RODRÍGUEZ, ARIEL (2020). *Historia mínima de las izquierdas en México*. México- El Colegio de México.
- RUS, JAN (2012). *El ocaso de las fincas y la transformación de la sociedad indígena de los Altos de Chiapas, 1974-2010*. Tuxtla, Gutiérrez: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica.
- SCHULZ, MARKUS (2014). “Nuevos medios de comunicación y movimiento transnacional: el caso del movimiento zapatista”, *Perfiles Latinoamericanos* 44, pp. 171–194.
- TOLEDO, SONIA (2002). *Fincas, poder y cultura en Simojovel, Chiapas*. San Cristóbal de las Casas: UNAM-UNACH.
- TOLEDO, SONIA (2010). “Raíces del zapatismo en Huitiupán. Narraciones sobre experiencias organizativas, acuerdo, conflictos, ejecuciones y venganzas”. En: Marco Estrada y Juan Pedro Viqueira (coords.). *Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista. Microhistorias políticas*. (pp. 277-329). México: El Colegio de México.
- VAN DER HAAR, GEMMA (2001). *Gaining ground. Land reform and the constitution of community in the Tojolabal Highlands of Chiapas, Mexico*. Amsterdam: Thela.
- VILLAFUERTE, DANIEL, MEZA, SALVADOR, ASCENCIO, GABRIEL et al. (1999). *La tierra en Chiapas. Viejos problemas nuevos*. México: Plaza y Valdés: UNICACH.
- VILLALOBOS, OSWALDO y TRENCH, TIM (2014). “¿Pero qué le vamos a hacer?": Un testimonio desde la Selva Lacandona, Chiapas”, *Entre Diversidades*, pp. 217-244.
- VIQUEIRA, JUAN PEDRO y SONNLEITNER, WILLIBALD (2000). *Democracia en tierras indígenas. Las elecciones en Los Altos de Chiapas (1991-1998)*. México: CIESAS, El Colegio de México e Instituto Federal Electoral.



“Nunca más un México sin nosotros”: La defensa neozapatista del Estado y la Nación

“Never again a Mexico without us”:
The neo-Zapatista defense of the State and the Nation

John M. Ackerman

Universidad Nacional Autónoma de México

<https://orcid.org/0009-0004-8370-4026>

johnmill.ackerman@gmail.com

Recibido: 17 de marzo de 2024.

Aprobado: 2 de abril de 2024.

Resumen

“Nunca más un México sin nosotros” es un poderoso grito de inclusión, no de separación, y expresa la voluntad de disputar el Estado-Nación mexicano, no de abandonarlo o siquiera superarlo. Lo que hizo que el país y el mundo voltearan a ver al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no fue solamente su innovadora forma de entender y ejercer la política, sino también su decisión de combatir de manera frontal tanto al Estado autoritario como al nacionalismo criollista en sus propios terrenos. La tesis general que defenderemos en el presente artículo por medio de un análisis de las primeras seis declaraciones de la Selva Lacandona, es que la evidente transformación del discurso y la práctica del EZLN entre 1994 y 2005 no implicó un abandono de los principios originarios del movimiento a favor de la transformación del Estado y la Nación mexicana, sino que más bien supone la reinención y el acomodo de estos mismos principios a un proceso político impredecible y en constante transformación. Específicamente cuestionaremos la tesis, ofrecida tanto por defensores como por críticos del movimiento neozapatista, de que la Cuarta y la Sexta Declaración de la Selva Lacandona implicarían un rompimiento radical con las tesis centrales de la Primera Declaración.

Palabras clave: EZLN, neozapatismo, Estado, neoliberalismo, México, declaraciones.

Abstract

“Never again a Mexico without us” is a powerful cry of inclusion, not separation, and expresses the will to contest the Mexican Nation-State, not to abandon it or even overcome it. What made the country and the world turn to look at the Zapatista Army of National Liberation (EZLN) was not only its innovative way of understanding and exercising politics, but also its decision to combat head-on both the authoritarian State and nationalism. Creole on their own lands. The general thesis that we will defend in this article through an analysis of the first six declarations of the Lacandon Jungle, is that the evident transformation of the discourse and practice of the EZLN between 1994 and 2005 did not imply an abandonment of the original principles of the movement. in favor of the transformation of the State and the Mexican Nation, but rather it involves the reinvention and accommodation of these same principles to an unpredictable and constantly transforming political process. Specifically, we will question the thesis, offered by both defenders and critics of the neo-Zapatista movement, that the Fourth and Sixth Declaration of the Lacandona Jungle would imply a radical break with the central theses of the First Declaration.

Keywords: EZLN, neo-Zapatismo, State, neoliberalism, Mexico, statements.

1. Introducción

El levantamiento armado del 1 de enero de 1994 fue una réplica contundente a aquellas voces que habían declarado el “fin de la historia”, desde Francis Fukuyama (1992) hasta Jorge Castañeda (1993), a raíz de la caída de la Unión Soviética en 1991. La irrupción de la dignidad rebelde en la Selva Lacandona recordó al mundo entero que el neoliberalismo globalista no era una praxis de paz, justicia y desarrollo, sino de violencia, desigualdad y saqueo. Y la declaración de guerra en contra del Estado mexicano lanzada por las y los indígenas campesinos de Chiapas demostró que la victoria del “mundo libre” en la Guerra Fría no había puesto fin a las luchas populares, sino más bien inaugurado una nueva etapa en las batallas por la justicia social global.

Durante la gestión del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), México llegó a ser un país ejemplar con respecto a la aplicación de las políticas neoliberales del “Consenso de Washington” (Harvey, 2007). Salinas emprendió un proceso de privatizaciones masivas y de represión política que los mexicanos recordamos hasta la fecha por su profunda corrupción e inmoralidad (Sandoval, 2011). Pero desde el punto de vista de Washington, Salinas era su hijo más fiel en América Latina, ya que logró que México se sometiera de manera absoluta a los dictados económicos del neoliberalismo por medio de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993. De ahí la importancia y la relevancia del levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994, precisamente el día en que entró en vigor el TLCAN, que fue el momento en que se dictó la “sentencia de muerte” en contra del pueblo mexicano.

Así que la interrupción del proyecto neoliberal en México aquel primero de enero de 1994 tuvo una relevancia histórica y global de gran alcance. No solamente le quitó la máscara al capitalismo global triunfante de la guerra fría. También puso un alto al neocolonialismo saqueador del imperio norteamericano justo en la región más cercana de su “patio trasero”.

Pero en adición a exhibir los profundos dolores de los pueblos olvidados por el desarrollismo neoliberal, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) también impulsó una visión propia sobre cómo dignificar y empoderar a estos pueblos y a la humanidad entera. Los análisis más comunes al respecto enfatizan los elementos altermundistas, “híbridos” y autonomistas de la visión neozapatista (Millán, 2023). También se enfocan en el carácter indígena del movimiento (Cruz, 2018) y enfatizan su apuesta por ejercer la política de otra manera, desde abajo, con la sociedad y a partir de la participación popular y comunitaria (Ramírez, 2018).

Todas estas características, sin duda, tienen un lugar prominente dentro de la teoría y la praxis neozapatista y constituyen una aportación clave a la

historia de México y a las luchas sociales del mundo entero. Sin embargo, el argumento principal del presente artículo es que la profunda fuerza disruptiva del neozapatismo no solamente proviene de estas propuestas innovadoras, sino que también abreva de la sólida reivindicación del Estado y de la Nación mexicana. Es decir, si bien es cierto que el neozapatismo tiene muchos rasgos “pos-modernos” sumamente visionarios que prepararon el terreno para las teorías y las prácticas de izquierda más congruente del siglo XXI (Raiter y Muñoz, 1996), este movimiento también fue y sigue siendo profundamente “moderno”, en cuanto da continuidad a las luchas clásicas del siglo XX por dignificar el Estado y defender a la Nación.

“Nunca más un México sin nosotros” es un poderoso grito de inclusión, no de separación, y expresa la voluntad de disputar el Estado-Nación mexicano, no de abandonarlo o siquiera superarlo. En un momento en que el Consenso de Washington basado en la “globalización” del “libre mercado” era la ideología dominante (Klein, 2012), los rebeldes del sur de México recordaban a la humanidad que la Nación y el Estado eran todavía elementos centrales en la lucha por la justicia. Lo hicieron de una manera sumamente innovadora, con poéticos comunicados digitales, misteriosos pasamontañas, rifles de palo y una creativa estrategia mediática. Sin embargo, lo que hizo que el país y el mundo voltearan a ver a estas mismas innovaciones fue su decisión de combatir de manera frontal tanto al Estado autoritario como al nacionalismo criollista en sus propios terrenos.

Nuestro rescate del carácter clásico del neozapatismo no pretende ser una crítica a la praxis revolucionaria del movimiento, sino todo lo contrario. Es decir, mi pretensión no es argumentar que a los neozapatistas les ha faltado ser más radicales o creativos a la hora de deshacerse de los viejos esquemas, sino más bien demostrar que es precisamente este sólido compromiso con los viejos esquemas lo que ha permitido al neozapatismo trascender en la historia. Si los rebeldes del sur no hubieran disputado tan frontalmente los símbolos y las estructuras centrales del Estado-Nación mexicano, el esfuerzo no hubiera pasado de ser una bella, pero al final de cuentas marginal, intervención estrictamente cultural en la discusión pública, sin haber sacudido tan profundamente las raíces del sistema político con tan trascendentes consecuencias hasta la fecha.

El transcurrir de los últimos treinta años ha puesto nuestros esquemas de cabeza. Hace seis lustros, cuando los neozapatistas tomaron San Cristóbal de las Casas, todavía era muy presente la lógica del asalto al poder estatal por medio de una revolución armada al estilo cubano. Lo sorprendente en ese entonces era que un levantamiento armado que se había pronunciado tan claramente a favor del derrocamiento del gobierno mexicano se convirtiera tan rápidamente en un movimiento social pacífico a favor de “otra forma de hacer política”, convocando a la “sociedad civil” del mundo entero.

Pero hoy las viejas formas de hacer política yacen en el descrédito a los ojos de las nuevas generaciones. Ni la revolución armada ni la vía electoral generan ya grandes ilusiones entre los y las jóvenes, sino que más bien las nuevas corrientes de pensamiento reivindican otras maneras de organizarse y expresarse, a partir de las redes sociales y por medio de movimientos sociales más horizontales y plurales. Este nuevo contexto no surgió espontáneamente, sino que es resultado de la misma victoria cultural y política del movimiento neozapatista y movimientos similares en el mundo. Aunque también habría que reconocer que esta nueva visión de la política también es producto de un proceso contrarrevolucionario que busca recuperar precisamente los terrenos que el zapatismo y movimientos similares abrieron y ocuparon durante los años noventa.

Pero, independientemente de los motivos y los procesos que hayan generado la nueva coyuntura política global, lo cierto es que cuando hoy nos asomamos a los momentos de mayor fragor del neozapatismo durante la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado, lo que más sorprende a las mentalidades contemporáneas no son en realidad los elementos novedosos que abrieron la puerta al siglo XXI en que hoy vivimos, sino más bien aquellos que reproducen los esquemas del siglo XX que cada vez van quedando más en el pasado.

Nuestro rescate del carácter nacionalista y estatista del movimiento zapatista no se realizará a partir de una crítica “trascendental” basada en puntos de vista externos al movimiento, sino a partir de una crítica “inmanente” basada en las propias palabras del EZLN (Caviglia, 2017). Específicamente, nuestro material de estudio serán las primeras seis *Declaraciones de la Selva Lacandona* emitidas por el EZLN entre 1994 y 2005. Es por medio de estos muy valiosos documentos históricos que la Comandancia General del movimiento fue explicando, justificando y modificando sus diversas estrategias políticas y posicionamientos ideológicos a partir de un profundo y poético ejercicio crítico y autocrítico que además proporciona datos duros y relevantes sobre el desarrollo histórico concreto del periodo correspondiente.

La tesis general que defenderemos es que la evidente transformación del discurso y la práctica del EZLN entre 1994 y 2005 no implicó un abandono de los principios originarios del movimiento a favor de la transformación del Estado y la Nación mexicana, sino que más bien supone la reinención y el acomodo de estos mismos principios a un proceso político impredecible y en constante transformación. Específicamente cuestionaremos la tesis, ofrecida tanto por defensores como por críticos del movimiento neozapatista, de que la Cuarta y la Sexta Declaración de la Selva Lacandona implicarían un rompimiento radical con las tesis centrales de la Primera Declaración.

Nuestro argumento entonces coincide en la forma, pero no en el fondo, con aquellos análisis que buscan encontrar las raíces de la actual posición más

autonomista, “posmoderna” y anti-electoral en las primeras expresiones públicas del EZLN. Coincide con ellos a la hora de enfatizar la continuidad y la congruencia de la visión zapatista desde el principio hasta el final, pero simultáneamente invierte el sentido de la continuidad. En vez de defender la hipótesis de que los zapatistas han sido posmodernos desde el inicio, demostraremos que en realidad han sido modernos hasta el final.

El artículo avanza en tres pasos. En primer lugar, analizaremos el origen de la teoría y la práctica neozapatista a favor de la toma del poder estatal en defensa de la Nación que se manifestó en las primeras tres Declaraciones de la Selva Lacandona, publicadas entre el 1 de enero de 1994 y el 1 de enero de 1995. Posteriormente, en la segunda sección, exploraremos los entretelones y los alcances del viraje que tuvo lugar en la visión neozapatista a partir de la Cuarta y la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, publicadas el 1 de enero de 1996 y el 30 de junio de 2005 respectivamente. Finalmente, ofreceremos algunas luces con respecto a la relación actual tan compleja y contradictoria entre el zapatismo y el obradorismo, donde ambos bandos simultáneamente se repudian en público y se emulan en la práctica.

La toma del poder

Hay quienes prefieren interpretar la Primera Declaración de la Selva Lacandona a la luz de los posicionamientos de la Sexta Declaración. Buscan descubrir dentro de la primera declaración de guerra del EZLN las semillas de la posición “posmoderna” y anti-institucional que posteriormente se volverían elementos centrales de la visión zapatista. Así construyen una tesis a favor de la continuidad ideológica de la lucha neozapatista desde sus orígenes.

Por ejemplo, en un importante escrito titulado “Cinco miradas para asomarse al puente zapatista”, Luis Hernández Navarro (2004), uno de los más lúcidos analistas de la ideología y la praxis revolucionaria del EZLN, afirma que:

Los rebeldes no buscaron tomar el poder y así lo dijeron desde el primer momento, aunque no se les haya querido escuchar entonces y no se les oiga ahora. En la Primera Declaración de la Selva Lacandona llamaron a deponer al usurpador que se hizo del control del Estado por medio del engaño, y convocaron a los otros poderes a hacerse cargo de la situación. Simultáneamente se presentaron como un movimiento contra la opresión y por la liberación del pueblo, enarbolando un programa de demandas históricas que mantienen hasta el día de hoy (Hernández Navarro, 2004).

Es sin duda correcto que el EZLN mantiene hasta la fecha las mismas “demandas históricas” originales de 1994 de “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”. Sin embargo, es más debatible la idea de que “desde el primer momento” los zapatistas hayan proyectado una forma radicalmente diferente de entender el poder y la lucha por el mismo.

Si bien es cierto que los neozapatistas nunca buscaron colocar directamente a un nuevo presidente de la República, no es del todo cierto que “no buscaron tomar el poder” del Estado. Específicamente, la Primera Declaración de la Selva Lacandona sí anuncia una clara voluntad de conquistar las altas esferas del poder estatal, posición que luego sería ratificada también en la Segunda y Tercera Declaración.

Si bien, los neozapatistas jamás buscaron *tomar* directamente el poder estatal para ellos, sí plantearon desde el primer momento *disputar* el poder estatal junto con el pueblo organizado. Ello queda meridianamente claro al final de la Primera Declaración (EZLN, 1994a) que culmina con la frase: “Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático.”

La Primera Declaración tiene el estilo clásico de un manifiesto o pronunciamiento revolucionario mexicano, con fuertes ecos del Plan de San Luis Potosí que detonó la Revolución Mexicana. Después del fraude electoral de 1910 en que Porfirio Díaz fue “electo” por octava ocasión como presidente de la República, Francisco I. Madero publicó desde la clandestinidad el 5 de octubre de 1910 su histórico llamado al levantamiento armado en contra del usurpador. De la misma manera, en el contexto de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el primero de enero de 1994, la Primera Declaración llama a derrocar al mal gobierno usurpador encabezado por Carlos Salinas de Gortari producto del fraude electoral de 1988.

El Plan de San Luis Potosí (Madero, 1910) inicia con una contraposición entre, por un lado, la permanente lucha del pueblo por la justicia y, por otro lado, la “tiranía” de los gobernantes actuales:

Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos: una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir, desde que conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal manera, que ha llegado a hacerse intolerable.

El segundo párrafo de la Primera Declaración de la Selva Lacandona (EZLN, 1994a) recurre a un lenguaje más florido, poético y confrontacional que el utilizado en el Plan de San Luis Potosí; sin embargo, las ideas-fuerza son esencialmente las mismas, al contraponer la lucha histórica del pueblo mexicano por la justicia con una dictadura de “conservadores y vendepatrias”:

HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que

formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la Expropiación Petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo.

Ahora bien, después de estas denuncias y llamados a la acción, ambos manifiestos rápidamente giran su enfoque para abogar a favor de la institucionalidad democrática. Los autores de ambos comunicados quieren dejar meridianamente claro que el propósito de derrocar al mal gobierno no es para simplemente ponerse ellos en Palacio Nacional, el clásico “quítate tú, para ponerme yo”, sino que buscan restituir tanto el Estado de derecho como el poder democrático del pueblo para elegir a sus propios gobernantes.

En el Plan, Madero (1910) afirma que “el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional, y ésta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento” y argumenta que su causa no es personal, sino colectiva y a favor de la institucionalidad democrática:

Yo he comprendido muy bien que si el pueblo me ha designado como su candidato para la Presidencia, no es porque haya tenido la oportunidad de descubrir en mí las dotes del estadista o de gobernante, sino la virilidad del patriota resuelto a sacrificarse, si es preciso, con tal de conquistar la libertad y ayudar al pueblo a librarse de la odiosa tiranía que lo oprime... En tal virtud, y haciéndome eco de la voluntad nacional, declaro ilegales las pasadas elecciones, y quedando por tal motivo la República sin gobernantes legítimos, asumo provisionalmente la Presidencia de la República, mientras el pueblo designa conforme a la ley sus gobernantes.

Y finalmente, en el numeral V. del mismo Plan, Madero (1910) declara que “tan pronto como la capital de la República y más de la mitad de los Estados de la Federación estén en poder de las fuerzas del pueblo, el presidente provisional convocará a elecciones generales extraordinarias para un mes después y entregará el poder al presidente que resulte electo, tan luego como sea conocido el resultado de la elección.”

Por su parte, la Primera Declaración de la Selva Lacandona (EZLN, 1994a) recurre a una argumentación similar, al señalar que “nuestra lucha se apegas al derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad”. Específicamente, los neozapatistas recurren al artículo 39 de la Constitución y a la división de poderes.

Como nuestra última esperanza, después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el Artículo 39 Constitucional que a la letra dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” Por tanto, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente al ejército federal mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari. Conforme a esta Declaración de guerra pedimos a los otros Poderes de la Nación se aboquen a res-taurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo al dictador.

Pero a pesar del firme compromiso con la institucionalidad democrática como fin último del levantamiento, presente en ambos manifiestos, los autores correspondientes también dejan perfectamente claro que el medio de lucha elegida no es otra que la guerra sin cuartel en contra del enemigo.

Madero (1910) dice sin rodeos que “para lograr este objeto es preciso arrojar del poder a los audaces usurpadores que por todo título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral”, y por lo tanto designa “el domingo 20 del entrante noviembre para que de las seis de la tarde en adelante, en todas las poblaciones de la República se levanten en armas bajo el siguiente PLAN”.

Por su parte, la Primera Declaración (EZLN, 1994a) indica que “conforme a esta Declaración de Guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes: Primero. Avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a sus propias autoridades administrativas.”

Ambos pronunciamientos terminan con un párrafo de remate que vuelve a recordar al lector los profundos motivos sociales que justificarían los levantamientos armados. El Plan de San Luis (Madero, 1910) concluye así:

CONCIUDADANOS: Si os convoco para que toméis las armas y derroquéis al Gobierno del general Díaz, no es solamente por el atentado que cometió durante las últimas elecciones, sino para salvar a la Patria del porvenir sombrío que le espera continuando bajo su dictadura y bajo el gobierno de la nefasta oligarquía científica, que sin escrúpulo y a gran prisa están absorbiendo y dilapidando los recursos nacionales, y si permitimos que continúe en el poder, en un plazo muy breve habrán completado su obra: habrá llevado al pueblo a la ignominia y lo habrá envilecido; le habrán chupado todas sus riquezas y dejado en la más absoluta miseria; habrán causado la bancarrota de nuestra Patria, que débil, empobrecida y maniatada se encontrará inerme para defender sus fronteras, su honor y sus instituciones.

Y La Primera Declaración (EZLN, 1994a) culmina de manera similar:

PUEBLO DE MÉXICO: Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático.

Esta breve yuxtaposición entre El Plan de San Luis Potosí y La Primera Declaración de la Selva Lacandona revela que hay mucha más continuidad que cambio entre el primero y el segundo documento. Hay, desde luego, algunas diferencias en las formas de expresión literaria utilizadas en los respectivos textos. Madero generalmente prefiere ser más prudente y formal, a veces recurriendo a un estilo casi aristocrático con la utilización de la primera persona, por ejemplo, mientras

los neozapatistas utilizan un lenguaje más exagerado y con expresiones del argot popular en su esfuerzo por apelar a la población en su conjunto.

Sin embargo, cuando tomamos en cuenta la distancia de casi cien años en la redacción de ambos documentos, la diferencia estilística no parece tan relevante. Por ejemplo, así como los neozapatistas hablan de “la ambición insaciable... [de] una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias”, Madero también escribe sobre “la nefasta oligarquía científica sin escrúpulo” y “los audaces usurpadores que por todo título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral”.

La Primera Declaración entonces de ninguna manera anuncia la llegada de una guerrilla “posmoderna” e “híbrida” que busca encabezar una revolución descentralizada o culturalista que innovaría las formas de lucha por el poder, sino todo lo contrario. En 1994 los neozapatistas declararon la guerra al gobierno mexicano y lanzaron una invitación al pueblo a que tomara las armas en defensa de la legalidad y la democracia, así como de la soberanía nacional en fiel continuidad con los procesos revolucionarios históricos del pueblo mexicano a lo largo de los últimos dos siglos.

El carácter esencialmente nacionalista y estatista del movimiento zapatista se confirma con el contenido de la Segunda y la Tercera Declaración de la Selva Lacandona, emitidas el 10 de junio de 1994 y el 1 de enero de 1995, respectivamente. Si bien estos dos documentos ponen particular atención a y celebran la fuerza de “la sociedad civil” como el factor más importante que detuvo la respuesta violenta del gobierno federal en contra de los neozapatistas a principios de 1994, de ninguna manera se apartan del proyecto original del EZLN de conquistar el poder estatal y defender a la nación mexicana.

La Segunda Declaración se publica en vísperas de las elecciones presidenciales y también para las de gobernador del Estado de Chiapas que tendrían lugar en agosto de 1994. En este comunicado, los neozapatistas ratifican su compromiso con “lograr el tránsito a la democracia” a partir del combate al fraude electoral y “la muerte del sistema de partido de Estado”. Si bien, reculan de su inicial llamamiento a los poderes legislativo y judicial (“hoy no llamamos a los fallidos poderes de la Unión que no supieron cumplir con su deber constitucional, permitiendo que el Ejecutivo Federal los controlara”), de ninguna manera abandonan el proyecto de conquistar el poder gubernamental para el pueblo e incluso interpelan directamente a “los partidos independientes” que no habían mencionado anteriormente en la Primera Declaración.

En una sección particularmente llamativa del comunicado (EZLN, 1994b), los neozapatistas comparten una reflexión sobre la importancia de la política electoral y la necesidad de generar una nueva cultura política partidista:

El EZLN ha entendido que el problema de la pobreza mexicana no es sólo la falta de recursos. Más allá, su aportación fundamental es entender y plantear que cualquier esfuerzo, en algún sentido o en todos, sólo pospondrá el problema si estos esfuerzos no se dan dentro de un nuevo marco de relaciones políticas nacionales, regionales y locales: un marco de democracia, libertad y justicia. El problema del poder no será quién es el titular, sino quién lo ejerce. Si el poder lo ejerce la mayoría, los partidos políticos se verán obligados a confrontarse a esa mayoría y no entre sí. Replantear el problema del poder en este marco de democracia, libertad y justicia obligará a una nueva cultura política dentro de los partidos. Una nueva clase de políticos deberá nacer y, a no durarlo, nacerán partidos políticos de nuevo tipo.

Llaman la atención dos elementos importantes en este extracto. Primero, los neozapatistas están subordinando la dimensión económica, de la pobreza, a la dimensión política, lo cual implica un distanciamiento de la visión marxista clásica que típicamente prioriza la lucha en la estructura económica por encima de la lucha en la superestructura de las instituciones políticas. El posicionamiento es entonces, estrictamente hablando, “reformista” en lugar de “revolucionario”, siguiendo los debates sobre el tema que marcaban el siglo XX.

Segundo, la manera de conceptualizar la lucha política no cuestiona de fondo el sistema burgués de competencia electoral multipartidista, sino que se limita a intentar perfeccionar o limpiarlo con “una nueva clase de políticos” y “partidos políticos de nuevo tipo” que surgirían de la celebración de elecciones limpias y equitativas que asegurarían que “el poder lo ejerce la mayoría”.

Esta Segunda Declaración (EZLN, 1994b) también convoca a la celebración de una “Convención Nacional Democrática de la que emane un Gobierno Provisional o de Transición, sea mediante la renuncia del Ejecutivo federal o mediante la vía electoral.” Adicionalmente, se plantea que la Convención y el Gobierno de Transición “deben desembocar en una nueva Carta Magna en cuyo marco se convoque a nuevas elecciones.” De nuevo, a pesar de los enérgicos llamados a la fuerza de “la sociedad civil” a lo largo de este comunicado, de ninguna manera nos hemos apartado de manera estructural de los planteamientos originales de lucha por rescatar al Estado y la Nación mexicanos.

La Tercera Declaración, emitida en el primer aniversario del levantamiento armado y después de la experiencia con los fraudes electorales nacionales y estatales de agosto de 1994, continúa con una línea política e ideológica similar a la de la Segunda Declaración. Si bien señala que “el proceso electoral de agosto de 1994 es un crimen de Estado” y afirma que “las elecciones no son, en las condiciones actuales, el camino del cambio democrático” (EZLN, 1995), de ninguna manera se renuncia a la vía electoral, sino todo lo contrario. De hecho, la propuesta central de este comunicado es la idea de complementar a la Convención Nacional Democrática emanada de la Segunda Declaración con un nuevo Movimiento para la Liberación Nacional que incluiría explícitamente a “las fuerzas políticas de oposición” en general y específicamente al antiguo candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas.

Este *Movimiento para la Liberación Nacional* luchará de común acuerdo, por todos los medios y en todos los niveles, por la instauración de un gobierno de transición, un nuevo constituyente, una nueva carta magna y la destrucción del sistema de partido de Estado. Llamamos a la Convención Nacional Democrática y al ciudadano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a encabezar este Movimiento para la Liberación Nacional, como frente amplio de oposición. (EZLN, 1995)

Adicionalmente, esta Tercera Declaración (EZLN, 1995) disputa directamente el control sobre los más importantes símbolos de la Nación y el Estado mexicanos. La Primera resolución del comunicado anuncia que por la vía de los hechos “se le retira al gobierno federal la custodia de la Patria. La Bandera de México, la ley suprema de la Nación, el Himno Mexicano y el Escudo Nacional estarán ahora bajo el cuidado de las fuerzas de la resistencia hasta que la legalidad, la legitimidad y la soberanía sean restauradas en todo el territorio nacional.”

Otra temática central que aborda la Tercera Declaración es la resistencia a convertir la causa del EZLN en una mera reivindicación de derechos y culturas indígenas al nivel local. El comunicado denuncia el intento de “quitar legitimidad a nuestra lucha diluyendo la problemática nacional en el marco local indígena”, para después afirmar que:

La cuestión indígena no tendrá solución si no hay una transformación RADICAL del pacto nacional. La única forma de incorporar, con justicia y dignidad, a los indígenas a la Nación, es reconociendo las características propias en su organización social, cultural y política. Las autonomías no son separación, son integración de las minorías más humilladas y olvidadas en el México contemporáneo. Así lo ha entendido el EZLN desde su formación y así lo han mandado las bases indígenas que forman la dirección de nuestra organización. Hoy lo repetimos: NUESTRA LUCHA ES NACIONAL. (EZLN, 1995)

Una vez más, vemos cómo la disputa por la Nación es central en el proyecto del neozapatismo. Es sumamente relevante, por ejemplo, que aclaren que la lucha por las autonomías indígenas no busca romper en absoluto con el Estado-Nación imperante, sino más bien fortalecerlo a partir de la “integración de las minorías... en el México contemporáneo”.

2. El viraje

Algunos han señalado que la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona constituyó un punto de viraje radical en la ideología zapatista, que a partir de ahí se abrió la brecha entre el neozapatismo y la izquierda electoral que sigue obstaculizando hoy la posibilidad de unir y articular en un solo movimiento las diversas expresiones de esta tendencia política. Por ejemplo, en su entrevista con la periodista Blanche Petrich (2023), la antigua asesora de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) Dolores González Saravia afirma que la fractura entre los movimientos y los partidos de izquierda “empieza a partir de la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona (1996), con el rechazo a la vía institucional y la doble militancia, y se concreta con la Sexta Declaración (2005), cuando

los zapatistas llaman a no votar. Eso abrió dos rutas estratégicas que nunca se volvieron a encontrar, no volvieron a tener un piso común. Eso ha trabado la posibilidad de convergencias.”

Sin embargo, un análisis detallado de la Cuarta Declaración, publicado el 1 de enero de 1996 con motivo del segundo aniversario del levantamiento armado, revela que si bien el EZLN efectivamente quiso ajustar su estrategia política en el contexto de dos años de traiciones del gobierno y el estancamiento en las negociaciones, los rebeldes de Chiapas también ratifican que seguirán insistiendo en impulsar su proyecto para rescatar la Nación y el Estado mexicanos por la vía democrática e institucional. En este importante comunicado señalan que el año 1995:

se caracterizó por la definición de dos proyectos de nación completamente distintos y contradictorios. Por un lado, el proyecto de país que tiene el poder, un proyecto que implica la destrucción total de la nación mexicana; la negación de su historia; la entrega de su soberanía; la traición y el crimen como valores supremos; la hipocresía y el engaño como método de gobierno; la desestabilización y la inseguridad como programa nacional, y la represión y la intolerancia como plan de desarrollo. Este proyecto encuentra en el PRI su cara criminal y en el PAN su mascarada democrática. Por el otro lado, el proyecto de la transición a la democracia, no una transición pactada con el poder que simule un cambio para que todo siga igual, sino la transición a la democracia como el proyecto de reconstrucción del país; la defensa de la soberanía nacional; la justicia y la esperanza como anhelos; la verdad y el mandar obedeciendo como guía de jefatura; la estabilidad y la seguridad que dan la democracia y la libertad; el diálogo, la tolerancia y la inclusión como nueva forma de hacer política. (EZLN, 1996a)

Este resumen de las coordenadas centrales de la política en 1995 fácilmente podría haberse extraído de la plataforma electoral del Partido de la Revolución Democrática de aquel año o también de la plataforma de Morena en 2018. Muy poco lo distingue en principio de la visión de los partidos de izquierda de los últimos treinta años, que también han buscado la “defensa de la soberanía nacional” y una verdadera “transición a la democracia”.

Desde luego, el EZLN también mantiene sus demandas históricas:

Llamamos a todos los hombres y mujeres de México, a los indígenas y a los no indígenas, a todas las razas que forman la nación; a quienes estén de acuerdo en luchar por techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, información, cultura, independencia, democracia, justicia, libertad y paz; a quienes entienden que el sistema de partido de Estado es el principal obstáculo para el tránsito a la democracia en México; a quienes saben que democracia no quiere decir alternancia del poder sino gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo; a quienes estén de acuerdo con que se haga una nueva Carta Magna que incorpore las principales demandas del pueblo mexicano y las garantías de que se cumpla el artículo 39 mediante las figuras de plebiscito y referéndum; a quienes no aspiran o pretenden ejercer cargos públicos o puestos de elección popular; a quienes tienen el corazón, la voluntad y el pensamiento en el lado izquierdo del pecho; a quienes quieren dejar de ser espectadores y están dispuestos a no tener ni pago ni privilegio alguno como no sea el participar en la reconstrucción nacional; a quienes quieren construir algo nuevo y bueno, para que formen el Frente Zapatista de Liberación Nacional. (EZLN, 1996a)

Aunque aquí ya se empieza a asomar un importante nuevo posicionamiento político en cuanto se afirma que la convocatoria al Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) solamente se extiende “a quienes no aspiran o pretenden ejercer cargos públicos o puestos de elección popular”. Y unas líneas antes en el mismo comunicado, los zapatistas (EZLN, 1996a) aclaran que el FZLN será “una fuerza política cuyos integrantes no desempeñen ni aspiren a desempeñar cargos de elección popular o puestos gubernamentales en cualquiera de sus niveles. Una fuerza política que no aspire a la toma del poder. Una fuerza que no sea un partido político.”

Sin embargo, este posicionamiento viene matizado por la afirmación en la cita anterior de que “el sistema de partido de Estado es el principal obstáculo para el tránsito a la democracia en México”. Este pronunciamiento demuestra que los zapatistas de ninguna manera han abandonado la lucha político-electoral *per se* o en principio. Al ubicar a un partido político específico, y no “la clase política” o “el sistema de partidos”, como su adversario principal se abre naturalmente la opción de generar alianzas de colaboración con partidos políticos de izquierda que comparten el mismo adversario con el FZLN.

De hecho, en esta misma Cuarta Declaración el EZLN (1996a) hace la muy importante aclaración de que el FZLN no reemplaza al Movimiento para la Liberación, previamente convocada en la Tercera Declaración, sino que formará parte de aquel movimiento más amplio que sí incluye a los partidos políticos de izquierda. Señalan que el FZLN será “una nueva fuerza política que forme parte de un amplio movimiento opositor, el Movimiento para la Liberación Nacional, como lugar de acción política ciudadana donde confluyen otras fuerzas políticas de oposición independiente, espacio de encuentro de voluntades y coordinador de acciones unitarias.”

La “nueva fuerza política nacional” que se anuncia con la creación del FZLN constituye entonces una transformación propia solamente del EZLN y no del Movimiento para la Liberación Nacional en su conjunto. Es decir, no implica la clausura del Movimiento a los partidos políticos o a la vía institucional en general, sino más bien la apertura del EZLN a la lucha política y social pacífica al nivel nacional. De hecho, el comunicado explica que la estructura de mando del EZLN será la base del FZLN. “Con la unidad organizada de los zapatistas civiles y los combatientes zapatistas en el Frente Zapatista de Liberación Nacional, la lucha iniciada el 1o. de enero de 1994 entrará en una nueva etapa. El EZLN no desaparece, pero su esfuerzo más importante irá por la lucha política. En su tiempo y condiciones, el EZLN participará directamente en la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional” (EZLN, 1996a).

Así que no es preciso decir que con la Cuarta Declaración hubo un “rechazo a la vía institucional y la doble militancia”, como señalara González Sarabia (Pe-

trich, 2023). Como indica el EZLN (1996a) en el mismo comunicado: “La guerra zapatista es sólo una parte de esa gran guerra que es la lucha entre la memoria que aspira a futuro y el olvido con vocación extranjera.” Si bien es cierto que se aclara que el FZLN, como brazo político y pacífico del EZLN, no tendría ninguna pretensión o aspiración electoral, todavía se plantea tanto su apoyo a la lucha institucional como su disposición a generar alianzas estratégicas con partidos políticos de la oposición dentro del marco del Movimiento para la Liberación Nacional.

Ahora bien, nueve años después, con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (2005), emitida el 30 de junio de 2005, los neozaptistas sí tomaron el paso de romper de manera definitiva con los partidos políticos de la oposición y trazar un camino nuevo. Como contexto para esta decisión, el comunicado relata la gran traición de todos los partidos, PRI, PAN y PRD, en la votación en el Congreso de la Unión durante 2001 sobre la reforma constitucional en materia indígena inspirada por los Acuerdos de San Andrés:

Y entonces pues ahí lo vimos claro que de balde fueron el diálogo y la negociación con los malos gobiernos de México. O sea que no tiene caso que estamos hablando con los políticos porque ni su corazón ni su palabra están derechos, sino que están chuecos y echan mentiras de que sí cumplen, pero no. O sea que ese día que los políticos del PRI, PAN y PRD aprobaron una ley que no sirve, pues lo mataron de una vez al diálogo y claro dijeron que no importa lo que acuerdan y firman porque no tienen palabra. Y pues ya no hicimos ningún contacto con los poderes federales, porque entendimos que el diálogo y la negociación se habían fracasado por causa de esos partidos políticos. (EZLN, 2005)

Y es ahí donde, incluso, se aprecia cierto resentimiento de parte del EZLN:

Y también vimos que nuestro corazón está como más lastimado, que sea más herido. Y no es que está herido por el engaño que nos hicieron los malos gobiernos, sino porque cuando tocamos los corazones de otros pues tocamos también sus dolores. O sea que como que nos vimos en un espejo. (EZLN, 2005)

Pero aun así se niegan a renunciar a la acción política nacional:

¿Estamos diciendo que la política no sirve? No, lo que queremos decir es que ESA política no sirve. Y no sirve porque no toma en cuenta al pueblo, no lo escucha, no le hace caso, nomás se le acerca cuando hay elecciones, y ya ni siquiera quieren votos, ya basta con las encuestas para decir quien gana. (EZLN, 2005)

Así que el EZLN entonces decide lanzar “una política de alianzas con organizaciones y movimientos no electorales que se definan, en teoría y práctica, como de izquierda” para en lugar de “tratar de resolver desde arriba los problemas de nuestra Nación”, mejor “construir DESDE ABAJO Y POR ABAJO una alternativa a la destrucción neoliberal, una alternativa de izquierda para México.”

Podemos detectar un par de otros virajes importantes en la Sexta Declaración. Por ejemplo, en contraste con la Cuarta Declaración que frontalmente rechazó los intentos de “quitar legitimidad a nuestra lucha diluyendo la problemática nacional en el marco local indígena”, ahora el texto no tiene problema

con enfocar la lucha en el terreno específicamente indígena: “queremos la democracia, la libertad y la justicia para todos los mexicanos, aunque más bien nos concentramos en los pueblos indios” (EZLN, 2005).

Adicionalmente, se ha perdido el antiguo énfasis en el rescate de los principios revolucionarios de la Constitución de 1917 y ahora se plantea más directamente como objetivo principal la creación de una nueva constitución. Ello porque “la Constitución ya está toda manoseada y cambiada. Ya no es la que tenía los derechos y las libertades del pueblo trabajador, sino que ahora están los derechos y las libertades de los neoliberalistas para tener sus grandes ganancias.”

Yásnaya Elena A. Gil (2023) analiza el viraje de la Sexta Declaración de la siguiente manera:

Creo que hay de fondo un viraje ideológico fundamental que el EZLN supo dar, pero una buena parte de la izquierda, ahora obradorista, no pudo hacerlo. Después de que el gobierno mexicano traicionara los Acuerdos de San Andrés que antes había firmado, el EZLN y sus bases crearon estructuras organizativas de autogestión llamadas Caracoles, representadas por las Juntas de Buen Gobierno. El hecho de que funcionaran —y funcionen— fuera de las lógicas del Estado evidenciaba lo lejos que estábamos ya de aquel EZLN que en la Primera Declaración de la Selva Lacandona llamaba a no dejar de pelear hasta formar “un gobierno de nuestro país libre y democrático”. Ya no se trataba de la toma del poder para que, desde el andamiaje del Estado, se garantizaran los derechos de los pueblos indígenas y se formara un nuevo gobierno; la idea era construir otra realidad con mecanismos autogestivos propios. El EZLN, que en un principio recalcó que su lucha estaba apegada a la Constitución mexicana, ahora se alejaba del afán de reformar el Estado y apostaba por la creación de estructuras concretas para coordinar la vida en común desde principios anticapitalistas.

Con la Sexta Declaración los zapatistas anuncian su rompimiento con la clase política y deciden dedicarse exclusivamente a la construcción del poder popular desde abajo. ¿Quizás ahora sí podemos hablar de un movimiento plenamente “posmoderno”, “híbrido” y “descentralizado” por lo cual se ha vuelto famoso mundialmente?

En los hechos no fue así. Por ejemplo, este comunicado anuncia la creación de una nueva “campaña” nacional que participaría directamente en el contexto de las campañas electorales de los candidatos a la Presidencia de la República: “entonces es como una campaña, pero muy otra porque no es electoral... esta CAMPAÑA NACIONAL para la construcción de otra forma de hacer política, de un programa de lucha nacional y de izquierda, y por una nueva Constitución.” Y posteriormente el EZLN intervendría directamente en las elecciones presidenciales de 2006 llamando a no votar por Andrés Manuel López Obrador (Balboa, 2006).

Así que, si bien es cierto que a partir de 2005 los neozapatistas rompen abiertamente con el PRD, y después con Morena y con Andrés Manuel López Obrador, no es correcto que hayan abandonado la lucha política-electoral tradi-

cional. Por ejemplo, en las elecciones de 2018 el EZLN intentaría postular a su propia candidata a la Presidencia de la República, la compañera María de Jesús Patricio Martínez, por la vía de la candidatura independiente.

3. Colofón: zapatistas contra obradoristas

Los neozapatistas niegan tener una ideología propia. Por ejemplo, en la Invitación al Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo de 1996, al que acudimos miles de personas de todos los rincones del planeta, se afirma que:

El zapatismo no es una nueva ideología política o un refrito de viejas ideologías. El zapatismo no es, no existe. Solo sirve, como sirven los puentes, para cruzar de un lado a otro. Por tanto, en el zapatismo caben todos, todos los que quieran cruzar de uno a otro lado. Cada quien tiene su uno y otro lado. No hay recetas, líneas, estrategias, tácticas, leyes, reglamentos o consignas universales. Solo hay un anhelo: construir un mundo mejor, es decir, nuevo. En resumen: el zapatismo no es de nadie y, por lo tanto, es de todos. (EZLN, 1996b)

Esta filosofía de humanismo, tolerancia, pluralidad, generosidad y construcción conjunta de un nuevo mundo marcó a toda una generación y propició el contexto para el florecimiento de nuevas formas de entender y ejercer la política en la actualidad. Hoy todos y todas somos neozapatistas o por lo menos postzapatistas, incluyendo a quienes se definen como antizapatistas o exzapatistas.

Incluso Andrés Manuel López Obrador frecuentemente hace referencia a la necesidad de “mandar obedeciendo” y de construir “una nueva forma de hacer política”, y Claudia Sheinbaum Pardo (2023) retomó recientemente una clásica expresión zapatista en uno de sus eventos de precampaña: “Nunca más un México sin nosotras, nunca más un México donde estemos atrás, nunca más el ‘calladita te ves más bonita’. ¡Es tiempo de ser protagonistas de la historia!”

Sin embargo, la naturaleza absolutamente inclusiva de la “ideología” zapatista es más mito que realidad. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 2018 el EZLN le dio la bienvenida de la siguiente manera al nuevo gobierno de López Obrador: “Figúrense cómo está de loco [Andrés Manuel López Obrador], dice que va a gobernar para pobres y ricos. Solamente un loco que está mal en su cabeza eso lo puede decir, porque entonces no trabaja su mente, es descerebrado” (EZLN, 2018). Es decir, los zapatistas están abiertos a todas las expresiones de izquierda menos a las que ellos consideran inaceptables y, en ese caso, las atacan y las ridiculizan en extremo. Reservan, entonces, el derecho de decidir quién tiene el privilegio de pasar por su puente a la esperanza.

Empero, tal y como hemos argumentado a lo largo del presente ensayo, sí existe una ideología zapatista. Es una ideología que retoma de manera muy marcada los esquemas clásicos de la lucha por el Estado y la Nación propios de

las revoluciones y las luchas electorales de izquierda del siglo XX. Y es precisamente este arraigo en las teorías del siglo XX lo que le dotó de tanta fuerza histórica a la lucha del EZLN.

Además, si bien se aprecia el esfuerzo por abrir “el zapatismo” a la re-orientación de una diversidad de ideologías y pensamientos, de sentires y de puntos de vista, no debemos olvidar que ese valioso “espacio” nuevo, fértil, plural, pacífico y emocionante fue al final de cuentas el resultado de un ataque armado a la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, así como a las poblaciones de Larráinzar, San Andrés, Simojovel, Chalam, Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, Chantal, Altamirano y Las Margaritas, donde perdieron la vida 46 indígenas y donde las fuerzas sublevadas mataron a 27 e hirieron a 40 integrantes de las fuerzas federales (Bellinghausen, 2023).

Por otro lado, el proyecto original de Morena se inspira en gran parte en la visión zapatista. Cuando se creó el Movimiento de Regeneración Nacional se buscó construir un “partido-movimiento” donde las bases del mismo tuvieran un papel preponderante en la dirección del instituto político por medio de comités de base y asambleas comunitarias que decidirían la línea política y las candidaturas del partido. Aunque en los hechos se haya abandonado este proyecto en aras del “pragmatismo electoral” y hoy Morena se parezca cada vez más al antiguo PRI o PRD, todavía hay voces dentro del partido, como los integrantes de la Convención Nacional Morenista, que reivindican el “espíritu originario” del movimiento obradorista como un instituto político cercano a los movimientos sociales (Ackerman, 2023).

Así que en el fondo el zapatismo y el obradorismo no son tan distintos como parecerían ser a primera vista. Los zapatistas quieren transformar al Estado y promulgar una nueva Constitución, mientras los obradoristas buscan empoderar al pueblo y generar las condiciones para el ejercicio de una democracia popular. ¿Por qué entonces ha sido tan difícil generar puentes de entendimiento y trabajo mutuo entre estos dos bandos de la izquierda mexicana?

Tendríamos que esperar hasta un próximo ensayo para contestar a esta pregunta con toda la profundidad y complejidad que se merece, pero en principio me parece que cualquier respuesta tendría que iniciar con una crítica y una autocrítica frontal por igual a ambas fuerzas políticas, donde nos hagamos cargo tanto de la hipocresía y el oportunismo del lado obradorista como del resentimiento y el sectarismo del lado zapatista. Solamente si asumimos y procesamos los profundos errores cometidos por cada lado de la ecuación podremos empezar a asomarnos a alguna solución de largo plazo.

Referencias

- ACKERMAN, John (2023). “Discurso del Dr. John M. Ackerman en encuentro con Alfonso Durazo”. *Convención Nacional Morenista*. Recuperado de: <https://morenademocracia.mx/revolucion-de-las-conciencias/discurso-john-m-ackerman-encuentro-con-alfonso-durazo-1-julio-2023/>
- BALBOA, Juan (2006), “Divide llamado del EZLN no votar por AMLO”. *La Jornada*. Recuperado de: <https://www.jornada.com.mx/2006/03/18/index.php?section=politica&article=013n1pol>
- BELLINGHAUSEN, Hermann (2023). “Los retornos del zapatismo”, *Zapatistas a 30 años del levantamiento*. México, La jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/serviciosjornada/microservicios/edicionpdf/ES-PECIALESPDF_2359.pdf
- CASTAÑEDA, Jorge (1993). *La utopía desarmada*. México, Joaquín Mortiz.
- CAVIGLIA, Alessandro (2017). “Crítica social, crítica inmanente y crítica trascendente”. *Derecho y sociedad*, Núm. 48, pp. 323-332. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6754564>
- CRUZ CARDOSO, Anatali (2018). “El movimiento zapatista y la defensa del territorio indígena”. *Tiempo UAM*, Vol. 1, Núm. 1, pp. 39-48.
- EZLN (1994a) “Primera Declaración de la Selva Lacandona”. *Enlace zapatista*. Recuperado de: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/01/primera-declaracion-de-la-selva-lacandona/>
- EZLN (1994b) “Segunda Declaración de la Selva Lacandona”. *Enlace zapatista*. Recuperado de: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/06/10/segunda-declaracion-de-la-selva-lacandona/>
- EZLN (1995) “Tercera Declaración de la Selva Lacandona”. *Enlace zapatista*. Recuperado de: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/01/01/tercera-declaracion-de-la-selva-lacandona/>
- EZLN (1996a). “Cuarta Declaración de la Selva Lacandona”. *Enlace zapatista*. Recuperado de: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuarta-declaracion-de-la-selva-lacandona/>
- EZLN (1996b). “Invitación al Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo”. *Enlace zapatista*. Recuperado de: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/06/09/invitacion-al-encuentro-intercontinental-por-la-humanidad-y-contra-el-neoliberalismo/>
- EZLN (2005). “Sexta Declaración de la Selva Lacandona”. *Enlace zapatista*. Recuperado de: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/sdsl-es/>
- EZLN (2018). “Palabras del CCRI-CG del EZLN a los pueblos zapatistas en el 25 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido”. *Enlace zapatista*.

ta. Recuperado de: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/01/01/palabras-de-la-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-dirigidas-a-los-pueblos-zapatistas/>

FUCUYAMA, Francis (1992). *El fin de la historia y el último hombre*. Barcelona, Planeta.

GIL, Yásnaya Elena (2023). “¿A quiénes les habla el zapatismo ahora?” *Revista de la Universidad de México*. Recuperado de: <https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/f0bcac1c-38b4-4e72-88ee-a99e90bfb0d0/a-quienes-les-habla-el-zapatismo-ahora>

HARVEY, David (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid, Akal.

HERNÁNDEZ NAVARRO (2004), Luis. “Cinco miradas para asomarse al puente zapatista”. *Pensamiento crítico*. Recuperado de: <http://www.pensamientocritico.org/luiher0104.htm>

KLEIN, Naomi (2012). *La doctrina del shock*. Barcelona, Booket.

MADERO, Francisco I. (1910). “Plan de San Luis”. En *Derechos del pueblo mexicano: México a través de sus constituciones*. (2016). (pp.500-506). México, Cámara de diputados, Miguel Ángel Porrúa.

MILLÁN, Margara (2023). “Superar el Estado, ¿un límite de nuestra imaginación política?” *Revista de la Universidad*, Núm. 903, pp. 63-70.

PETRICH, Blanche (2023). “Entrevista a Dolores González Saravia”, *Zapatistas a 30 años del levantamiento*. México, La jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/serviciosjornada/microservicios/edicionpdf/ESPECIALESPDF_2359.pdf

RAITER, Guillermo y MUÑOZ, Irene (1996). “El discurso zapatista ¿Un discurso moderno?”, *Discurso*, Universidad de Buenos Aires, pp. 39-59. Recuperado de: https://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5536/2/03_raiter.pdf

RAMÍREZ ZARAGOZA, Miguel Ángel Miguel (2018). “La praxis política del movimiento zapatista”. *HistoriAgenda*, Vol. 4, Núm. 37, pp. 7-30. Recuperado de: <https://www.revistas.unam.mx/index.php/historiagenda/article/view/67910>

SANDOVAL BALLESTEROS, Irma Eréndira (2011). *Rentismo e intervencionismo neoliberal en la banca: México (1982-1999)*. México. Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

SHEINBAUM PARDO, Claudia [@Claudiashein] (2023, 17 de junio) *Nunca más un México sin nosotras, nunca más un México donde estemos atrás, nunca más el “calladita te ves más bonita”*. [Tweet]. Twitter. <https://twitter.com/Claudiashein/status/1670104314700767234?s=20>



Nos alimentamos de esperanzas: Chiapas a tres décadas del levantamiento zapatista

We feed on hope: Chiapas three decades after the Zapatista movement

Daniel Villafuerte Solís

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica,
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

<http://orcid.org/0000-0002-5866-4534>

gasoda2000@gmail.com

Recibido: 23 de marzo de 2024

Aprobado: 24 de mayo de 2024

Resumen

En el presente artículo se analizan las transformaciones que han ocurrido en los últimos años en Chiapas. Se trata de examinar en qué medida las motivaciones que tuvo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para levantarse en armas permanecen como una deuda social. También se indica la emergencia de nuevos problemas como resultado de las contradicciones en el itinerario económico y sociopolítico de Chiapas. En particular se destaca la persistencia de la pobreza, la migración y las remesas, así como las violencias, entre las que sobresalen las desapariciones y la violencia criminal, que han ocasionado desplazamientos forzados en varios municipios de la entidad.

Palabras clave: zapatismo, Chiapas, pobreza, migración, violencia criminal

Abstract

This article analyzes the transformations that have occurred in recent years in Chiapas. It tries to examine the motivations that the Zapatista National Liberation Army (EZLN) had to take up arms and whether these remain a social debt. It also indicates the emergence of new problems, as a result of the contradictions in the economic and sociopolitical itinerary of Chiapas. In particular, the persistence of poverty, migration and remittances stands out, as well as violence, which includes disappearances and criminal violence, which have caused forced displacement in several municipalities of the entity.

Key words: Zapatismo, Chiapas, poverty, migration, criminal violence

Introducción

Chiapas vive tiempos difíciles; siempre han sido dolorosos para la gran mayoría de la población y para muchas comunidades indígenas y campesinas, que siguen subsistiendo con las carencias más elementales. Todavía está fresca la memoria del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a pesar de haber transcurrido tres décadas desde su aparición pública. Recordemos que sus demandas fundamentales fueron: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Aunque son reivindicaciones básicas y atendibles en una sociedad moderna, hasta ahora, en el primer tercio del siglo XXI, constituyen una deuda pendiente.

Los grandes temas de Chiapas siguen siendo la pobreza, la marginación y el desprecio a los que menos tienen, lo que ha creado un caldo de cultivo para la generación de violencias. Muchas comunidades de las regiones de Los Altos, Meseta Comiteca Tojolabal (antes Fronteriza), Selva Lacandona y Sierra Mariscal (antes Sierra), han venido registrando conflictos y desplazamientos forzados de población. Además, a la violencia política se ha sumado la violencia criminal en varios puntos de la geografía chiapaneca.

Lo nuevo es que la conflictividad y el desplazamiento se han normalizado en Chiapas, tanto, que en 2017 y 2018 se ha colocado entre las tres entidades con mayor número de personas desplazadas, junto con Guerrero y Sinaloa (Pérez, Barbosa y Cabada, 2018, p. 18.). En 2016 el estado registró 1 117 personas desplazadas, en 2017 el número incrementó a 6 090 y en 2018 bajó a 5 035, mientras que en 2021 la entidad ocupó el segundo lugar, después de Michoacán, con 7 117 personas desplazadas: “Juntos, Michoacán, Chiapas y Zacatecas concentraban el 85% de las personas desplazadas en los episodios de desplazamiento masivo” (Pérez, Barbosa y Cabada, 2022, p. 65).

Los desplazamientos forzados constituyen un indicador del nivel de violencia existente en un territorio. Los desplazamientos han ocurrido como consecuencia de la violencia generada por grupos armados organizados, y buena parte de estos se han concentrado en los municipios más pobres de la entidad chiapaneca: Chenalhó, Aldama, Chalchihuitán, Pantelhó, Ocosingo y Altamirano. No hay comida, pero hay grupos armados. Los desplazamientos más recientes se ubican en la Sierra Mariscal, sobre todo en los municipios de Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera y Chicomuselo, como resultado del enfrentamiento entre grupos criminales.

En una marcha multitudinaria de alrededor de 10 000 personas, realizada en Chicomuselo en octubre de 2023, se indicó la existencia de enfrentamientos, desapariciones, despojos, extorsiones y reclutamiento forzado. “Denunciaron que la violencia se agravó desde hace más de dos años por la disputa del territo-

rio, cuando el Cártel de Sinaloa se dividió y un grupo se integró al cártel Jalisco Nueva Generación” (Redacción Animal Político, 12 de octubre, 2023).

De acuerdo con cifras recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2023), 1.6 millones de personas en Chiapas padecen hambre. Los niveles de pobreza son apabullantes pues, a pesar de la disminución registrada entre 2020 y 2022, la cifra es de 3.8 millones, es decir, 67.4 por ciento de la población se encuentra en condición de pobreza, mientras en el país el promedio es de 36.3 por ciento, es decir, cerca de la mitad de la cantidad que se registra en Chiapas. La entidad contribuye con el 8.2 por ciento de los pobres del país y con 17.6 por ciento de los pobres extremos.

Según la misma fuente, entre 2020 y 2022 hubo una reducción de 9 por ciento con respecto a las cantidades indicadas, sin embargo, no es para vanagloriarse, sino motivo de preocupación. ¿Qué es lo que se proyecta hacia el futuro ante una realidad como la que reflejan las cifras oficiales? Nos encontramos a pocos meses de la conclusión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con un proceso preelectoral avanzado y complejo en el que se definirá el futuro de los aspirantes para el relevo presidencial, el poder legislativo federal y los gobernadores de los estados. En este periodo de definiciones políticas algunos sectores de la población se preguntan sobre el rumbo que tomarán sus vidas, sus empleos, su familia, el porvenir de sus hijos.

En el marco indicado, el propósito de este artículo es hacer un breve recuento de los acontecimientos más importantes ocurridos en Chiapas a tres décadas del levantamiento zapatista, con énfasis en el presente. Esta entidad federativa tiene una historia particular, una composición social, étnica y geográfica que lo hace singular, y su condición de frontera, como bisagra que conecta con Centroamérica, lo convierte en un territorio de interés geopolítico.

Este artículo se estructura en tres secciones y unas reflexiones finales que en conjunto dan cuenta de los grandes y graves problemas que ha enfrentado la mayoría de la población chiapaneca durante los sucesivos gobiernos que, en el mejor de los casos, han tratado de administrar la crisis.

En la primera sección se analizan las tensiones entre la realidad de la vida material y la presencia de organizaciones políticas, cuya plataforma de acción consiste en cambiar las condiciones sociales en las que vive la gente del campo, y se revisan los contrastes socioeconómicos, en los que se conjuga el presente con el pasado, y que dan como resultado una sociedad profundamente abigarra-da. En la segunda se analizan los temas de la persistente pobreza y de la pobreza laboral como rasgos distintivos del atraso secular en el que han vivido millones de chiapanecos. En la tercera sección se hace un breve recuento, en el que se indica que todo se movió para quedar en el mismo lugar, lo que ofrece un balance

negativo para la población históricamente desposeída. Termina el artículo con unas reflexiones sobre la situación de Chiapas, principalmente sobre los rezagos sociales y la violencia criminal.

Tribulaciones de un estado periférico

Chiapas fue y sigue siendo tierra de plantaciones agrícolas, de ranchos ganaderos, de producción de maíz y café, caña y frutas tropicales. Tierra de campesinos e indígenas, de injusticias sociales, de una reforma agraria tardía. Es un estado con población predominantemente joven¹ sin muchas expectativas, un territorio de jornaleros que trabajaron por décadas en las fincas cafetaleras del Soconusco y de la zona norte, cuyos hijos y nietos ahora trabajan en la economía informal o han migrado a Estados Unidos.

La entidad chiapaneca es un territorio de grandes paradojas; parafraseando a Thomas Benjamin (1995), es tierra rica con pueblo pobre. Cuando irrumpió el EZLN, el 1 de enero de 1994, todavía se encontraban grandes propiedades agrarias y ranchos ganaderos, muchos de los cuales fueron invadidos por el movimiento social y aún ahora son objeto de disputa entre organizaciones.

La mitad de la década de los setenta del siglo XX marcó un punto de inflexión en la historia de Chiapas, pues entonces se identificaron las profundas injusticias sociales. La diócesis de San Cristóbal de Las Casas, liderada por el obispo Samuel Ruiz, organizó el Congreso Indígena en 1974, donde se hicieron denuncias y se revisaron los temas más acuciantes, todo lo cual sirvió como guía para las luchas sociales. Por otra parte, se hicieron presentes las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) en la selva Lacandona, donde se registró un enfrentamiento “con el ejército en Ocosingo el 17 de febrero de 1974” (Sagasti *et al.*, 2016). Este grupo se había formado en 1969 y tenía instalado “un foco guerrillero cerca de Tenosique en los linderos de Chiapas y Tabasco” (Harvey, 2015, p. 19).

Otro actor relevante en la historia de Chiapas fue la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), que desde su fundación en 1963 se propuso luchar por la tierra, el agua, el crédito y la defensa de los trabajadores agrícolas. Aunque la presencia territorial de esta organización en el estado no es muy precisa, en una de sus zonas (Simojovel, Huitiupán, Sabanilla) empezó la rebelión contra los finqueros y el sistema de fincas “a finales de la década de 1970” (Toledo, 2002, p. 200) —José Rodríguez, miembro de esta organización campesina, refirió “que ellos habían llegado en 1973” (Toledo, 2002, p. 201)—. De cualquier forma, la presencia de la CIOAC, junto con el trabajo pastoral de la diócesis, fue gene-

1 De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2022), el 57.5 por ciento de la población del estado en 2020 era menor a 30 años, lo que significa un reto fenomenal en términos de demandas sociales y laborales de cara al próximo sexenio.

rando procesos de subjetivación, a tal grado que el movimiento campesino cobró fuerza y terminó con el sistema de fincas en la zona de Simojovel.

Muchas historias se han tejido en el estado más austral de México; una de ellas, quizá la más importante y de mayor duración, fue la lucha agraria, que luego se extendió a los precios de los productos agrícolas, en la que destaca el movimiento de los maiceros de la zona de la Frailesca.² La acumulación de contradicciones de una sociedad local, con el peso del tiempo histórico, llevó justo al levantamiento del EZLN. Entonces, muchas voces lanzaron las campanas al aire, pues por fin la revuelta cambiaría el rumbo de la historia, como lo señaló la revista *América Indígena* en su sección editorial titulada “Las lecciones de Chiapas”:

Los indígenas han dejado de ser minorías remotas y pasivas, y son ahora un sector central y muy dinámico que pugna por sus reivindicaciones históricas específicas, al mismo tiempo que se interesa por el presente y el futuro del conjunto de la sociedad en que viven, en la cual quieren verse, junto a los demás sectores, iguales en deberes y derechos, pero étnicamente distintos (Instituto Indigenista Interamericano, 1994, p. 5).

En la editorial de la revista referida se enumeran las enseñanzas de la rebelión zapatista, y en una parte del texto se refiere lo siguiente:

La otra lección de Chiapas, tal vez la más valiosa y universal, es que la pobreza y la marginación, que han sido los signos distintivos de la condición de indígena en América por más de 500 años, no tienen más lugar en sociedades que aspiran a la modernidad, a la justicia y el pleno desarrollo. No hay que olvidar que la zona del alzamiento, el Estado de Chiapas, es la de mayor densidad indígena en México y, por coincidencia que no es casual, es también de las más deprimidas y pobres de todo el país (Instituto Indigenista Interamericano, 1994, p. 6).

Existen muchas referencias sobre los momentos más álgidos del conflicto que, partiendo de la izquierda y de muchas organizaciones sociales, anunciaban grandes expectativas. Sin embargo, con el transcurrir de los años los ánimos se hicieron menos optimistas, para entrar en el terreno de la incertidumbre y el escepticismo. Los Acuerdos de San Andrés, que fueron el resultado sólo de una parte de la serie de mesas esperadas, no llegaron a ser aprobados por el Congreso Federal. En 1999 el gobierno de Chiapas se adelantó y promulgó la Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas, que en su artículo 5º reconoce

[...] el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas chiapanecos, en toda su amplitud política, económica, social y cultural, fortaleciendo la soberanía, la democracia y los tres niveles de gobierno, en el marco de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del estado (*Periódico Oficial*, 29 de julio, 1999).

Sin embargo, el contenido de la ley local no se corresponde con los preceptos del artículo 5º ni con los del resto de los artículos, y tampoco refleja una correspondencia con los contenidos de los Acuerdos de San Andrés en términos de su espí-

2 Sobre el tema véase el trabajo de Castillo (1988).

ritu y profundidad. El distanciamiento entre el EZLN y el gobierno federal elevó las tensiones; este último se dedicó a dividir a las comunidades mediante una serie de estrategias, entre ellas la cooptación de organizaciones que antes simpatizaban con el movimiento del EZLN, o la entrega de diversos artículos a las comunidades que simpatizaban con el zapatismo. Las organizaciones indígenas y campesinas agrupadas en torno al Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas (CEOIC) se divorciaron de las causas del zapatismo, y sólo quedó en la memoria aquel histórico comunicado de su comandancia:

Que hablen ahora nuestros hermanos que andan otros caminos para llevar nuestro dolor a nuevos soles. Que hable la voz de nuestros hermanos del CEOIC, que digan su palabra los indígenas todos de estas tierras, que no calle el campesino pobre, que grite el obrero en las ciudades, que este canto guerrero no olvide la voz de maestros y estudiantes, de los empleados y de los pequeños en todos los sentidos (CCRI-CG, 15 de marzo, 1994).

La Marcha del Color de la Tierra, junto con la realización del Tercer Congreso Nacional indígena y la participación del EZLN en el Congreso de la Unión en 2001, marcaron un punto de inflexión. Pese a las presiones, el Congreso de la Unión no aprobó la Ley Cocopa, que sintetizaba los Acuerdos de San Andrés, y en su lugar se decretó una reforma indígena, más conocida como la Ley Bartlett-Fernández de Cevallos, que relegó la autonomía. El intelectual Roger Bartra, que hoy es un férreo crítico del obradorismo, desaprobó al EZLN y la Ley Cocopa, a la que se refirió en los siguientes términos: “por donde quiera que se le mire, es cualquier cosa, menos revolucionaria” (Bartra, 2001, p. 109, citado en Villafuerte, 2007, p. 71). La tildó de conservadora:

Podemos advertir los peligros de este conservadurismo para la propia población indígena: exclusión de los partidos políticos y de instituciones nuevas que contengan semillas de cambio, confusión de funciones políticas y eclesásticas católicas, marginación de jóvenes, mujeres y disidentes de la práctica cotidiana de una democracia directa ejercida en asambleas, transformación del disfrute colectivo de los recursos naturales en usufructo corporativo de rentas y royalties cobrados a compañías privadas, y otras amenazas que serían largo de enumerar (Bartra, 2001:109, citado en Villafuerte, 2007, p. 72).

A partir de estas consideraciones nos hacemos las siguientes preguntas: ¿en qué claves leer la realidad de Chiapas?, ¿cuáles son los hilos que permiten entender una complejidad en la que muchos procesos están desfasados de la historia del país? En esta entidad federativa resulta muy difícil pensar y definir la democracia como “construcción y producción de igualdad” (Tapia, 2009, p. 15). Asimismo, algunos conceptos que en el presente ocupan un lugar central en las ciencias sociales, como democracia, igualdad, prosperidad y desarrollo, no encuentran una base consistente en Chiapas. Aquí es notoria la ausencia de estos principios elementales, incluso hasta en procesos básicos como la nominación de candidatos a elección popular, que son definidos desde el centro del país, de manera que se podría decir que las desigualdades son prácticas que no contribuyen ni al fortalecimiento de la democracia ni a la formación de ciudadanía.

El desvanecimiento de los anhelos neozapatistas

Han pasado tres décadas desde el histórico levantamiento del EZLN y muchos de los problemas básicos de entonces se mantienen, en particular la pobreza y el hambre, pero también los relacionados con el trabajo y la salud. Junto con la pobreza y la falta de opciones de empleo se encuentra la migración a Estados Unidos, cuya relevancia se observa en el lugar que ocupa Chiapas en el conjunto de los estados que reciben remesas. Asimismo, el problema de la violencia que se había registrado en varias comunidades por la acción de grupos paramilitares, ahora ha escalado hacia la violencia criminal en varias regiones, lo que ha generado desplazamientos de población.

La persistencia de la pobreza

Parece que el tiempo se ha detenido en Chiapas, y por más que se agiten las aguas, el estado permanece en el mismo lugar. Los indicadores económicos y sociales básicos se han mantenido estacionados en el tiempo, lo que es una paradoja si se toma en cuenta la existencia de vastos recursos naturales que posibilitarían mejorar la calidad de vida de la población. El proceso de desruralización ha sido lento. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2022), el 51 por ciento de la población del estado es rural, frente al 21 por ciento en el ámbito nacional; 20 951 localidades son rurales, mientras sólo 206 son urbanas, escasamente el uno por ciento. La ruralidad no necesariamente es una marca de atraso, sin embargo, por las características estructurales de Chiapas la condición rural sí representa un obstáculo para el mejoramiento de la vida de la población, sobre todo del sector campesino e indígena que vive en condiciones de extrema precariedad.

Cuadro 1. Chiapas. Medición de la pobreza 2008-2020

Año	Pobreza		Pobreza extrema	
	Porcentaje	Miles de personas	Porcentaje	Miles de personas
2008	77.0	3 682.3	38.7	1 850.8
2010	78.5	3 866.3	38.3	1 885.4
2012	74.7	3 782.3	32.2	1 629.2
2014	76.2	3 961.0	31.8	1 654.4
2016	77.1	4 114.0	28.1	1 498.6
2018	76.4	4 174.6	29.7	1 623.3
2020	75.5	4 218.0	29.0	1 623.1

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL (2019 y 2021).

Como se observa en el cuadro 1, en 2008 el porcentaje de población en condiciones de pobreza fue de 77 por ciento, y en 2020 se situó en 75.5 por ciento, 1.5 pun-

tos porcentuales menos con respecto al primer año. Esto significa que en 12 años apenas se registró una reducción de 1.5 puntos. Sin embargo, en cifras absolutas se observó un incremento de 535 000 personas, lo que supone un aumento de 14.5 por ciento en el mismo periodo. De esta manera, el número de pobres no sólo se ha mantenido, sino que ha crecido; así, Chiapas se mantiene como la principal fábrica de pobres del país.

En el mismo cuadro se observa una reducción de 9.7 puntos porcentuales de población en condiciones de pobreza extrema. Aunque parece un enorme logro, es impresionante observar que este segmento de la población alcanza poco más de 1.6 millones de personas; además, las 228 000 que dejaron de estar en situación de pobreza extrema pasaron a engrosar las filas de la pobreza moderada. La masa de “descamisados” que conforman los pobres extremos pesa sobre la clase política, que reproduce en cada ciclo sexenal. Frente al desengaño, miles de chiapanecos pobres o empobrecidos han emigrado a diversas ciudades del país y a Estados Unidos.

En la actualización de las cifras pospandemia del CONEVAL no es sorpresa ver que los estados con mayor pobreza en 2022 eran Chiapas, Guerrero y Oaxaca, dato que refleja una realidad estructural relacionada con las condiciones históricas, sociales y económicas de estas entidades. Le siguen tres estados: Puebla con 54 por ciento, muy cerca de Oaxaca; Tlaxcala con 52.5 por ciento, y Veracruz, cuyo nivel de pobreza multidimensional se ubicó en 51.7 por ciento.

En seis años (2016-2022) se produjo una reducción en la cantidad absoluta de pobres en Chiapas, que pasó en números redondos de 4 millones a 3.8 millones, esto es, 198 000 personas menos. No obstante, el número sigue siendo muy alto, pues representa 67.4 por ciento con respecto a la población total estimada para el año 2022, que en números absolutos rondaba los 5.6 millones de habitantes.

Cuadro 2. *Medición de la pobreza multidimensional, indicadores seleccionados. Porcentajes*

Concepto/año	2016	2018	2020	2022
Pobreza	77.9	78.0	75.5	67.4
Pobreza extrema	29.6	30.6	29.0	28.2
No pobre y no vulnerable	6.7	6.8	7.1	8.1
Rezago educativo	30.2	31.2	32.5	31.1
Carencia por acceso a los servicios de salud	15.0	17.6	37.1	66.1
Carencia por acceso a la seguridad social	81.9	83.1	78.9	77.9
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos	49.5	49.4	44.1	36.6
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos	81.5	81.0	78.8	70.0

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL (2023).

En estos seis años llama mucho la atención el dato de la pobreza extrema porque, como una terca realidad, se mantiene, e incluso es mayor en términos de la cantidad absoluta de personas con respecto al año 2016. Que 1.6 millones de personas se encuentren en la miseria, o sea, 28 por ciento de la población, no es cosa menor y obliga a una reflexión profunda sobre su existencia en un estado donde abundan los recursos naturales. El dato por lo menos muestra el desorden del sistema, lejos de la idea de una historia de progreso que implica “crecimiento inexorable, niveles de vida cada vez más altos, productividad en aumento y mejoras continuas en la salud, el bienestar personal y el bienestar social” (Shaikh, 2022, p. 53). Como se observa en el cuadro 2, sólo el 8 por ciento de la población chiapaneca es beneficiaria del progreso, pues se encuentra en condición de no pobre y no vulnerable.

A la par de la pobreza de la población se registran carencias sociales que, aun cuando han experimentado una disminución relativa, mantienen al estado en uno de los tres primeros lugares en el conjunto de las entidades del país. Son particularmente notorias las carencias en cuanto a acceso a servicios de salud, rezago educativo e infraestructura sanitaria, en particular la carencia de drenaje en las viviendas. Por ejemplo, en 2020 casi 30 por ciento de la población no tenía acceso a los servicios de salud, más de 31 por ciento presentaba rezago educativo, 22 por ciento de las viviendas registraban hacinamiento y 15 por ciento no contaban con drenaje (CONEVAL, 2021). En lo que respecta a alimentación, las cifras de 2018 son alarmantes, pues el total de población en situación de inseguridad alimentaria fue de 2 850 000 personas, de las cuales 1 630 000 presentaban una condición leve, 796 000 moderada y 424 000 severa (CONEVAL, 2020, p. 50). Por lo anterior, no es casual que el programa Cruzada Nacional contra el Hambre comenzara en Chiapas.

En 2022 cuatro indicadores llamaron la atención: el rezago educativo, que se mantuvo por arriba del 30 por ciento; la falta de acceso a servicios de salud, que casi se duplicó al pasar de 37.1 a 66.1; la carencia de acceso a seguridad social, que también se mantuvo, con 77.9 por ciento; y la población en situación de pobreza por debajo de la línea de pobreza, con 70 por ciento. Estos datos reflejan que hubo una leve mejora, pero no dejan de ser alarmantes. El conjunto de los cuatro indicadores constituye una radiografía de la injusticia y la privación social, y también muestra que las demandas básicas planteadas por el EZLN el 1 de enero de 1994 no se cumplieron. Llama mucho la atención, por ejemplo, que 3.7 millones de chiapanecos carezcan de acceso a servicios de salud y que 4.4 millones no cuenten con seguridad social; asimismo, la pensión universal para adultos mayores de 65 años que se instauró durante el gobierno de la 4T no cubre lo que debe ser la seguridad social.

Cuadro 3. *Medición de la pobreza multidimensional, indicadores seleccionados. Miles de personas*

Concepto/año	2016	2018	2020	2022
Pobreza	4 036.7	4 166.0	4 218.0	3 838.7
Pobreza extrema	1 535.4	1 632.7	1 623.1	1 607.5
No pobre y no vulnerable	347.4	361.8	397.2	459.9
Rezago educativo	1 563.4	1 667.6	1 816.5	1 772.4
Carencia de acceso a servicios de salud	779.1	939.7	2 072.6	3 764.4
Carencia de acceso a seguridad social	4 243.7	4 440.3	4 410.4	4 437.4
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos	2 565.6	2 636.3	2 466.4	2 087.8
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos	4 223.7	4 324.4	4 401.4	3 990.8

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL (2023).

La pobreza laboral

En correspondencia con los niveles de pobreza de la gente, exasperada en las localidades rurales donde vive población indígena y campesina, se observa la pobreza laboral, la cual presenta niveles que rebasan con mucho el promedio nacional.

Cuadro 4. *Porcentaje de la población en pobreza laboral al IV trimestre de cada año*

Año	Nacional	Chiapas	Año	Nacional	Chiapas
2005	36.7	69.5	2015	43.3	71.7
2006	36.2	68.7	2016	41.4	71.8
2007	36.4	65.6	2017	42.5	73.5
2008	39.2	68.0	2018	40.7	71.9
2009	40.4	66.4	2019	38.9	67.6
2010	41.7	68.7	2020	42.0	68.1
2011	41.5	67.2	2021	40.3	69.3
2012	42.7	69.1	2022	38.5	68.8
2013	42.8	70.3	2023*	37.7	67.2
2014	45.4	73.1			

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL (2023). *Primer trimestre.

El registro de casi dos décadas sobre la pobreza laboral en Chiapas muestra una realidad compleja en el marco de un país que ha estado cambiando. México cuenta con una de las economías más abiertas del mundo, y sostiene una fuerte relación con la economía más poderosa, Estados Unidos. Durante el gobierno de la 4T se llevó a cabo una reforma laboral y se incrementaron los salarios mínimos a partir del Tratado de Libre Comercio, ahora rebautizado como T-MEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá), sin embargo, las condiciones de pobreza laboral permanecen. La información presentada por el CONEVAL (véase cuadro 4) revela que casi el 70 por ciento de la población laboral chiapaneca se ha mantenido a lo largo de 18 años con un ingreso que no le permite cubrir la canasta básica.

En 2005, el porcentaje de población en pobreza laboral promediaba 69.5 por ciento, y 18 años después, en 2022, fue de 68.8 por ciento. Como se puede apreciar en el cuadro 4, las cifras fueron más altas en el periodo 2013-2018, justo durante las administraciones del presidente Enrique Peña Nieto en el país y del gobernador Manuel Velasco Coello en Chiapas, cuando se registraron cifras superiores al 70 por ciento. La potencia de este indicador es que devela un nivel muy alto de vulnerabilidad de la población trabajadora de Chiapas, pues el ingreso no alcanza a cubrir los gastos de comida, mucho menos de educación y salud, que son las necesidades básicas que todo país que se precie de ser democrático debe cubrir con suficiencia.

La diferencia del indicador con el promedio nacional fluctúa entre 89 y 79 por ciento, una diferencia abismal que coloca a Chiapas en el primer lugar de las entidades federativas en materia de precariedad laboral. Este indicador se correlaciona con los de pobreza general y de pobreza extrema, cuyos datos tampoco han variado durante los últimos años en las mediciones realizadas por el CONEVAL. Esto explica, en parte, la propensión a emigrar a otras entidades de la República y a Estados Unidos.

La migración como expresión de la crisis

La migración de personas chiapanecas a Estados Unidos comenzó a tener visibilidad a partir de 1990, en el marco de la baja de los precios agrícolas, particularmente con la gran crisis de los precios internacionales del café, el levantamiento del EZLN y el cambio en la política agrícola y agraria. A tres décadas de la rebelión neozapatista, la migración internacional se ha consolidado, lo que se refleja en las enormes sumas procedentes de remesas familiares. La migración se constituyó en una opción para miles de productores y campesinos endeudados y empobrecidos y para la población urbana sin posibilidades de conseguir un empleo. Chiapas se convirtió en tierra de migrantes, y con la emigración se cumplió la idea de Gunnar Myrdal sobre la “causación circular acumulativa”,

pues una vez iniciada tendió a convertirse en un proceso acumulativo y con mayor velocidad.

Un indicador de la importancia de este fenómeno son las remesas familiares, pues la entidad ha pasado a ocupar el cuarto lugar nacional en cuanto a cantidades recibidas por este medio, después de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, muy a la par con el Estado de México. En 2020, el Banco de México contabilizó 1 042.8 millones de dólares en remesas; en 2021 la cifra experimentó un incremento de 81.5 por ciento, para colocarse en 1 893 millones; y en 2022 aumentó en 66.5 por ciento, con lo que alcanzó la cifra histórica de 3 152.2 millones de dólares. Hasta el tercer trimestre de 2023 la cifra superó los 3 200 millones de dólares, lo que representa un incremento de 46.7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, pues fue mayor en 94 millones de dólares a la cifra alcanzada en 2022 (Banco de México, 2023). Para tener un punto de comparación, la cifra de remesas de 2022 fue equivalente al 60 por ciento del presupuesto de egresos de Chiapas en el mismo año.

Mientras en los años noventa Chiapas ocupaba los últimos lugares en captación de remesas, actualmente se sitúa en el cuarto lugar, superando a entidades que históricamente han sido importantes como Puebla y Oaxaca, e incluso Guerrero. También llama la atención la importancia que han adquirido dos municipios chiapanecos:

En el primer semestre de 2023, San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, ya se posiciona como el municipio que más recibe remesas en el país, con 420 millones de dólares (md). Ya ha desplazado a Tijuana, en Baja California, a la segunda posición, con un flujo de 386 md. Le siguen en relevancia otros municipios en el país que son importantes centros urbanos como Guadalajara (330 md), León (305 md), Morelia (304 md), Puebla (282 md), Aguascalientes (282 md) y Monterrey (278 md). Después de estas importantes urbes, aparece otro municipio de Chiapas en la novena posición: Comitán de Domínguez (241 md) (Li, 2023, p. 4).

San Cristóbal de Las Casas captó 20.4 por ciento de las remesas de Chiapas en el primer semestre de 2023, y Comitán 11.7 por ciento, por lo que estos dos municipios captaron 32.2 por ciento del total de remesas que llegaron a la entidad. Cabe destacar que San Cristóbal es el mayor centro urbano de la región Altos de Chiapas, donde predomina la población indígena. A esta ciudad concurren habitantes de toda la región, principalmente de los municipios cercanos como San Juan Chamula, Zinacantán, Tenejapa, Amatenango del Valle, Teopisca, San Andrés Larrainzar y Oxchuc. En ella se encuentran los principales bancos, a los que la gente concurre para cobrar remesas y diversos apoyos de los programas sociales del gobierno federal. Aun con todo, no deja de generar interrogantes el por qué San Cristóbal y Comitán concentran la captación de tal cantidad de remesas.

De cualquier manera, lo relevante es que Chiapas hoy se posiciona en uno de los primeros lugares entre las entidades que reciben remesas. Esta carac-

terística es propia de los estados que no tienen capacidad de brindar condiciones laborales y otras oportunidades para su población, especialmente para los jóvenes del medio rural. El sector agrícola, que desde el credo neoliberal vendría a dar libertad y a generar progreso, ha sido abandonado a la dictadura del mercado y está en crisis. La prédica neoliberal durante cuatro décadas ha concentrado el ingreso de manera brutal, lo que ha producido más pobres, ha precarizado el trabajo y ha generado más expulsiones; basta ver el crecimiento de la migración internacional y de los desplazamientos forzados en todas partes del mundo, y Chiapas no es la excepción.

La sentencia de Lampedusa: todo se movió para quedar en el mismo lugar

A tres décadas del levantamiento neozapatista el balance para los sectores mayoritarios de la población es negativo. La ausencia de justicia y de satisfactores básicos, como la comida, es un caldo de cultivo para la penetración del crimen organizado en las comunidades y entre sus jóvenes, que quedan expuestos frente a la falta de opciones y la pérdida de sentido en un mundo incierto. En este escenario tendencial las opciones no son muchas: entrar a la economía informal, enlistarse en las filas del crimen organizado o formar parte del flujo migratorio.

En las economías precarias, en condiciones sociales altamente vulnerables, se facilita la penetración del crimen organizado. Por ejemplo, lo que ocurrió en Chilpancingo, Guerrero, es una muestra de lo que sucede en varias entidades del país, incluido Chiapas. Todo comenzó con la detención de dos personas, identificadas como líderes de la organización criminal Los Ardillos, el 8 de julio de 2023, lo que desató la violencia en Tixtla, Guerrero, con saldos rojos; dos días después fue bloqueada la autopista del Sol por un grupo de al menos 3 000 personas. Ante contextos como este, Zepeda Paterson asegura que los “cárteles también viven su Cuarta Transformación”, en alusión a que el gobierno ha descuidado la seguridad desde abajo.

En términos estrictos, no se trata de un descuido del gobierno de la 4T, pues el gobierno ha respondido con programas sociales. En el medio rural destaca el programa Sembrando Vida, que es una estrategia dirigida a los campesinos, sobre todo a los jóvenes, y también otros programas de apoyo a la juventud, como Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para estudiantes, etc.

El problema radica, por un lado, en que los recursos otorgados a través de los programas sociales de la 4T son insuficientes para competir con lo que ofrecen las organizaciones delincuenciales, además de que éstas ejercen coerción, de tal modo que se van creando formas de comportamiento entre la población que participa en los grupos delincuenciales, mediante recursos como el otorgamiento

de dinero fácil y abundante o el pago sin trámites. A propósito del evento de Guerrero, Zepeda Paterson considera que

[...] ahora estamos viviendo una especie de cuarta transformación, por la presencia de dos nuevos rasgos: un énfasis geográfico adicional al extenderse al sureste atrasado, y una modalidad política que no habíamos visto al vincularse a movimientos sociales de carácter tradicional. *Por lo que toca al primero, la omnipresencia de cárteles y bandas en Chiapas, Guerrero, Puebla o Michoacán, particularmente en las zonas campesinas, antes ignoradas por el narco* salvo en las montañas propicias para el cultivo de amapola y mariguana (Zepeda, 13 de julio, 2023, cursivas añadidas).

Lo que se descubre recientemente en Chiapas, a propósito de la bienvenida que varios pobladores brindaron a un convoy del cártel Jalisco Nueva Generación que ingresó al poblado de Chamic, en el municipio de Frontera Comalapa, fundamenta la idea de Zepeda sobre el vínculo entre las necesidades de la población y el crimen organizado. En este sentido dice: “su supervivencia deriva de las derramas directamente vinculadas a las actividades de las bandas. Seguramente una mezcla de temor, de conveniencia y de ausencia de oportunidades” (Zepeda, 13 de julio, 2023).

En efecto, la falta de oportunidades y la persistencia de la pobreza, convertida esta última en una enfermedad que corroe a las familias y que se reproduce en espiral porque no se atienden sus causas profundas, constituyen el fermento de las violencias. Hasta ahora no se visibiliza un cambio que comience a generar condiciones para un mayor acceso a empleo decente y a un salario digno. A pesar de que el gobierno de la 4T ha incrementado el salario mínimo, esto no se refleja en las condiciones de vida de la población, y tal situación conduce a la construcción de un estado social vulnerable y expuesto a la violencia de las organizaciones criminales. Mantener a la población chiapaneca en condiciones de pobreza, en un alto porcentaje con bajos niveles de escolaridad o analfabetas, inhibe procesos emancipatorios. Esto parece una paradoja, pues desde la teoría crítica se piensa que las condiciones materiales ayudan a crear conciencia de la realidad en la que se vive, no obstante, es importante considerar otros factores que contribuyen a la alienación de las masas.

Chiapas fue durante muchos años un laboratorio social y político donde se ensayaron numerosas iniciativas, desde algunas de carácter político-religioso —como las prácticas del Instituto Lingüístico de Verano, cuya presencia en Chiapas data de los años 40 del siglo XX—, hasta la intervención de organismos internacionales —por ejemplo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que impulsaron la ganadería bovina, y organizaciones ambientalistas como The Nature Conservancy (TNC)—, así como la implementación de programas gubernamentales —como el llamado Solidaridad, impulsado por el presidente Salinas, o la Cruzada Nacional contra el Hambre, con Peña Nieto— y la aparición del EZLN. Asimismo, la lista de organizaciones que han tenido presencia en la entidad es muy extensa.

Instituciones de educación superior nacionales, entre otras la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma Chapingo, y extranjeras como las universidades de Harvard y Chicago, han tenido presencia en Chiapas con el interés de contribuir a esclarecer los fenómenos sociales y antropológicos del estado. Especial atención destinaron a la cuestión étnica, a los movimientos sociales y a la presencia de Iglesias protestantes. También ha desfilado una cantidad indeterminada de organizaciones no gubernamentales, sobre todo en los tiempos turbulentos del zapatismo. Otras organizaciones sociales históricas que han tenido y tienen presencia en el campo son: la CIOAC, la Organización Regional de Cafecultores de Ocosingo (ORCAO), la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), la Confederación Nacional Campesina (CNC), Otros Mundos, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) o la Casa del Pueblo.

No obstante, la nutrida presencia de organizaciones en Chiapas no se ha visto reflejada en movimientos sociales robustos que se traduzcan en cambios de la realidad, quizá por su carácter fragmentario. Fuera del EZLN, que durante tres décadas ha persistido en sus luchas por cambiar el orden de cosas, otras han desaparecido o se han desmembrado. Por ejemplo, una de las organizaciones impulsadas desde el magisterio fue Solidaridad Campesino-Magisterial (Socama), que poco después resultó ser “incubadora de varias bandas armadas” (*La Jornada*, 10 de febrero, 2005). Esta agrupación

se convirtió, a raíz del levantamiento zapatista, en una de las organizaciones rurales más influyentes en Chiapas. Formada por profesores que en su mayoría pertenecen a la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y por grupos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), ha sido una de las centrales más favorecidas con recursos gubernamentales desde 1994 (*La Jornada*, 10 de febrero, 2005).

El movimiento magisterial, que en determinadas épocas mantuvo fuertes posiciones, se quedó atrapado en sus demandas específicas; en unos momentos los maestros se movilizaron en contra de las reformas en materia educativa impulsadas por el gobierno de Peña Nieto, y en otros por el incremento de salarios, el pago de bonos, etc. Algunos actos de protesta, como los que ocurren frecuentemente en el municipio de Venustiano Carranza, están centrados en la disputa por la tierra. Otras organizaciones, como el Frente de Lucha por el Socialismo, ha trabajado por la reducción de los precios de la luz eléctrica y para reivindicar los derechos humanos, y existen a su vez organizaciones que se enfocan en la defensa de los migrantes.

Se trata, pues, de una fragmentación de organizaciones y demandas en la que no existe un eje de convergencia hacia la emancipación. Es comprensible que esto ocurra en el contexto de una realidad de precariedad extrema, donde lo prioritario es procurar la sobrevivencia. En estas condiciones, es posible esperar un escenario de estallido social de mayor magnitud que el de 1994; otro escenario es el tendencial, de descomposición y ruptura del tejido social de

mayor calado que llegue a la anomia social, es decir, una especie de “pérdida de control social, desintegración del lazo social o esquemas básicos de convivencia” (Osorni, 2008, p. 41).

El panorama es sombrío, pues la tendencia se encamina a la profundización de escenarios de violencia. El estado no está actuando en las bases, que es donde se gesta el germen de la violencia: en la comunidad, en el municipio, en la colonia, en el barrio. Las autoridades locales tienen una enorme responsabilidad, pero muchas veces responden a intereses ajenos a las comunidades que dicen representar. El descontento en relación con las autoridades municipales ha ido creciendo, y los ejemplos abundan: Frontera Comalapa, Teopisca, Oxchuc, Pantelhó, Tila, Altamirano. Como refiere Cruz (2005, p. 9) “no hay ley de la historia que asegure al progreso: [...] en cualquier momento podemos regresar a la barbarie”.

Es revelador que sólo en Chiapas ocurra una combinación de violencias: violencia por grupos armados organizados y política, conflictividad social y conflictos territoriales, lo que muestra la complejidad y singularidad del estado, que ha entrado en una situación peligrosa. Dos hechos son indicadores de una sociedad local violenta que está avanzando por la senda del crimen organizado: por una parte, la emergencia de grupos de familiares de desaparecidos que se han manifestado públicamente y, por otra, la desaparición de niños y niñas. Independientemente de la discordancia entre las cifras oficiales federales y las estatales, el hecho es que se registran actos de desaparición. La Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM) refirió que en 2021 hubo 232 “personas menores de edad reportadas como desaparecidas y/o no localizadas” (RDIM, 2022, p. 25). Este fenómeno viene de años atrás, pues en 2013 se registraron 170 menores desaparecidos, en 2014 la cifra subió a 268, y en 2020 se contabilizaron 208 (2022, p. 25). Entre enero y septiembre de 2023, de acuerdo con la Red para los Derechos de las Infancias y las Adolescencias en Chiapas (REDIAS), se registraron 428 denuncias de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, lo que equivale a 47 desaparecidos por mes (Gómez, 16 de octubre, 2023).

Ambos indicadores, que sólo se veían en otras latitudes del país tradicionalmente azotadas por la violencia, ya están presentes en Chiapas. ¿Cuál es el curso que tomará la violencia criminal? El crimen organizado se ha extendido y ha penetrado hasta en comunidades de fuerte raigambre organizativa, lo cual ha llevado al EZLN a cambiar su estrategia territorial para poder hacer frente a la violencia criminal; esta organización propone una nueva estructura de la autonomía, esto es, una reorganización en la que se sustituyen los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MARES) y las Juntas de Buen Gobierno (JBG), y se pone énfasis en el núcleo de la autonomía zapatista, es decir, en el Gobierno Autónomo Local (GAL) (Enlace Zapatista, 12 de noviembre, 2023).

Las decisiones tomadas por el EZLN en las últimas semanas de 2023 son resultado de un proceso que esta organización venía anunciando desde 2021, en el que se avizora un escenario de mayor conflictividad para 2024, cuando se sumarán los conflictos pre y postelectorales.

En un comunicado titulado “Chiapas al borde de la guerra civil”, fechado el 19 de septiembre de 2021 y dirigido al pueblo de México y a los pueblos del mundo, firmado por el subcomandante insurgente Galeano, el EZLN hace señalamientos puntuales sobre las acciones en contra de bases de apoyo zapatistas, en particular por parte de la ORCAO, grupo al que caracteriza como de corte paramilitar patrocinado por el gobernador de Chiapas. El documento refiere:

El desgobierno de Rutilio Escandón está haciendo todo lo posible porque se establezca al suroriental estado mexicano de Chiapas:

Sus alianzas con el narcotráfico provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa, porque el gobierno nada hace para preservar la vida, libertad y bienes de los pobladores. El gobierno de Chiapas no sólo solapa a las bandas de narcotraficantes, también alienta, promueve y financia grupos paramilitares como los que atacan continuamente comunidades en Aldama y Santa Martha (CCRI-CG, 19 de septiembre, 2021).

El clima de violencia que se vive en Chiapas, sobre todo en ciertas comunidades, está consignado en un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el cual concluye reiterando la presencia en el estado de un entorno de violencia generalizada que está llevando a la fragmentación de las comunidades y al desplazamiento forzado, “vinculado a las acciones de violencia política contrainsurgente”, a la que ahora se añade la violencia generada por grupos del crimen organizado. Al respecto se recupera el siguiente fragmento de este informe:

Hemos documentado, entre el año 2010 y el mes de octubre del 2022, el desplazamiento forzado de al menos 16,755 personas. Del 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Guatemala hay al menos 2,000 personas (400 familias) que abandonaron sus comunidades debido a la violencia generada de la disputa por el control territorial de grupos criminales (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 2023, p. 9).

A esto, el centro añade:

El periodo en que se enfoca el informe 2020-2022 está caracterizado también por una *disputa abierta de la tierra recuperada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994*, lo que ejemplifica cómo está operando la contrainsurgencia hacia el proyecto zapatista; son diversas las agresiones y hostigamientos cometidos por parte de organizaciones corporativistas alineadas con el Estado; así como por una reconfiguración territorial a partir del proyecto, columna vertebral de la actual administración federal, *Sembrando Vida* (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 2023, p. 10, cursivas añadidas).

Al hilo de las consideraciones del comunicado del EZLN, dos años después un miliciano que participó en el levantamiento del 1 de enero de 1994, cuando tenía apenas 14 años, refirió que

[...] en la nueva etapa de la guerra contrainsurgente se está echando mano de grupos del crimen organizado para desmovilizar a las comunidades zapatistas, con acciones directas o con reclutamientos forzados de jóvenes para que formen parte de organizaciones criminales, grupos paramilitares o de narcoparamilitares (Rueda y Muñoz, 2 de agosto, 2023, cursivas añadidas).

A tres décadas del levantamiento del EZLN se constata que el clima de violencia en Chiapas se ha extendido más allá de lo que se denominó zona de influencia del zapatismo. En el presente, son diversas las violencias provocadas por actores también diversos, pero estas se pueden agrupar, *grosso modo*, en dos grandes conjuntos: las de carácter político-electoral y las provocadas por organizaciones criminales que se disputan el control territorial.

En este marco, los zapatistas reconocen que la construcción de autonomía es un proceso difícil que, aunque ha experimentado avances, no se debe considerar como un modelo, por lo que invitan a no idealizarla (Baschet, 2022, p. 36). En efecto, uno de los ejes centrales del movimiento zapatista de los últimos años ha sido la construcción de la autonomía, sin embargo, esta camina en medio de la presión de la “hidra capitalista”, por lo que tienen la claridad de que es frágil e incompleta (Baschet, 2022, p. 39). Hace 20 años los zapatistas decretaron la muerte de los Aguascalientes y anunciaron el nacimiento de los Caracoles y los Municipios Autónomos, lo que significaba el inicio de una nueva forma de relación del movimiento con organizaciones que apoyaban el EZLN.

La complejidad para construir autonomía es basta. Por ejemplo, algunos movimientos inspirados en el EZLN han intentado impulsar autonomía, entre los que destacan el Ejido Tila, que nació con fuerza y ha enfrentado muchas dificultades, pero en el que a lo largo del tiempo la participación de la gente ha disminuido, o el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE),³ que también enfrenta diversos problemas, uno de los cuales, como menciona uno de sus voceros, es la construcción de los gobiernos comunitarios:

divisionismo, cooptación de gente y de las autoridades ejidales por parte de los partidos políticos y presidentes municipales, por el alcoholismo, la drogadicción, el tráfico de armas, y por la intimidación por grupos armados del crimen organizado (Tenejapa) o relacionados con el poder caciquil (Oxchuc y Altamirano) (Arellano, 23 de octubre, 2023).

Aun con todo, el MODEVITE está vivo y activo y es una de las organizaciones que más llama la atención de los estudiosos de los movimientos sociales. En el caso de Chilón, cuya lucha inició por la falta de democracia en el sistema de partidos y de libre determinación, según Sánchez “es en la actualidad un nudo de conflictos, por lo que el proceso de reconocimiento de Gobierno Comunitario está lejos de su concreción” (2022, p. 81). En su trabajo, esta autora llega a dos

3 “El MODEVITE es un movimiento de tseltales, tsotsiles y ch’oles que surgió en 2014 en conjunto con 11 municipios de la zona Altos y Selva de Chiapas” (Sánchez, 2022, p. 64).

conclusiones: 1) la idealización de la autonomía; 2) la existencia de una realidad compleja política, social y cultural (Sánchez, 2022, p. 81).

Reflexiones finales

Chiapas padece una fatiga crónica, una enfermedad grave y de larga data que puede empeorar. Un escenario indeseable es que puede convertirse en un estado dominado por los grupos criminales, como ya ocurre en otros del país. En la entidad la violencia criminal comienza a ser un tema de gran tensión social, pues se observa en varios puntos, principalmente de la frontera con Guatemala, tanto en la porción de la selva Lacandona como en la región Sierra.

Varias organizaciones han asegurado que en México se vive un proceso de militarización; no obstante, en Chiapas resulta un tema controvertido, pues muchas comunidades del estado reclaman la presencia del ejército y la Guardia Nacional, que no siempre llegan, pero cuando lo hacen su actuación frente a las organizaciones criminales es muy limitada. Por ello la pregunta es: ¿acaso existe tolerancia o se trata de una estrategia de no confrontación de las fuerzas armadas con la delincuencia?

Nos inclinamos por la idea de que se implementa una estrategia de seguridad que tiene como sustento filosófico la frase “abrazos, no balazos”, interpretada por los detractores del gobierno de la 4T como una especie de tolerancia frente al crimen organizado, lo que explicaría el relativo fracaso de la política de seguridad. Este es un tema que requiere un análisis más profundo desde la particularidad de Chiapas, una entidad fronteriza y con un porcentaje considerable de población indígena y campesina.

La cuestión chiapaneca requiere también una reflexión más detallada sobre sus quiebres y su devenir histórico. Este breve artículo sólo presenta algunos elementos que se han mantenido y profundizado, y otros que han emergido frente a la ausencia del Estado mexicano, que históricamente ha considerado esta entidad como un territorio lejano y marginal, pero útil para los votos que benefician a la “clase” política dominante. El abandono deliberado del Estado ha cobrado factura en los ámbitos económico y sociopolítico, y mantiene a Chiapas en una situación de conflictividad.

Históricamente, se ha considerado la entidad como un espacio liminar, difícil de asir, y por lo mismo la “clase” política se ha contentado con usar el poder para reproducir, parafraseando a Gunder Frank (1967), el “desarrollo del subdesarrollo”, con lo que se mantiene la pobreza de la población, sobre todo de los sectores más vulnerables y desposeídos.

Resulta por lo menos perturbadora la existencia, en el umbral de la tercera década del siglo XXI, de rezagos sociales y de una gran masa de pobladores indígenas y campesinos en condiciones de vida miserables, que se mantienen en su terruño a falta de oportunidades, mientras otros se han trasladado a las ciudades del sur, centro y norte del país, y otros más han considerado la opción de emigrar a la frontera norte y a Estados Unidos.

El EZLN todavía perdura en el pensamiento de mucha gente. Si bien “el sueño zapatista” (Le Bot, 2006) aún no cobra materialidad, muchas comunidades agrupadas en organizaciones luchan por la autonomía, por la vida y la defensa del territorio; viven en un sueño, con la esperanza de un cambio que hará que los millones de chiapanecos, niños y jóvenes, cambien su condición de olvidados. El sueño zapatista se expresó en las primeras semanas de la aparición pública del movimiento de la siguiente manera:

Nosotros somos sombras de tierna furia, nuestro paso cubrirá otra vez el cielo, arrojará con su manto protector a los desposeídos y a los hombres y mujeres buenos que entienden que justicia y paz bien pueden ir de la mano. Si nos niegan los derechos nuestros, entonces nuestra tierna furia entrará en las mansiones altaneras, no habrá muro que no salten, puerta que no abran, ventana que no rompan, pared que no derrumben, nuestra sombra llevará dolor a los que claman guerra y muerte para nuestra raza, habrá más llanto y sangre para que la paz se sienta a nuestra mesa con bondad (CCRI-CG, 15 de marzo, 1994).

El sueño no trascendió y la historia de horror siguió su curso. Por lo pronto, nuestra hipótesis es que las grandes masas de indígenas y campesinos chiapanecos seguirán olvidadas otros seis años, a menos que se produzca un acontecimiento que cambie el rumbo de la historia. La complejidad de Chiapas, en el marco de un país que recibe enormes presiones del imperio estadounidense, requiere un análisis amplio y profundo que rebasa con mucho el interés de este breve artículo. Es necesario profundizar en la investigación, y como refiere Marx, citando a Dante, “al entrar en la ciencia, así como en la entrada al infierno, deber formularse esta exigencia ‘abandónese aquí todo recelo, mátese aquí cualquier vileza’” (Marx, 1859[2008], p. 7). Esto se traduce en un compromiso intelectual por conocer las raíces de la compleja realidad de Chiapas y alumbrar el camino de las vías de su transformación y emancipación.

Referencias

ARELLANO, MAURICIO. (23 de octubre, 2023). “Movimientos sociales en Chiapas y sur de México”. *Chiapas Paralelo*. Recuperado de: <https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2023/10/movimientos-sociales-en-chiapas-y-el-sur-de-mexico/>

BANCO DE MÉXICO. (2023). “Balanza de pagos. Remesas por entidad federativa”. Recuperado de: <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultar.aspx?id=1>

tarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA79&locale=es

- BASCHET, JÉRÔME. (2022). *La autonomía zapatista, un faro en la lucha por la vida*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; San Cristóbal de Las Casas: Cooperativa Editorial Retos; Guadalajara: Cátedra Jorge Alonso.
- BARTRA, ROGER. (2001). “Derechos indígenas. Imaginería política e ingeniería legislativa”. *Letras Libres*, 29, mayo.
- BENJAMIN, THOMAS. (1995). *Chiapas: tierra rica, pueblo pobre. Historia política y social*. México: Grijalbo.
- CASTILLO, MARÍA TERESA. (1988). *Producción y comercialización de granos básicos: el movimiento de la Unión estatal de productores de maíz de Chiapas* (Tesis de maestría). UAM Xochimilco. México.
- CCRI-CG (Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional). (15 de marzo, 1994). “Al CEOIC. Sombras de tierna furia”. Recuperado de: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/03/15/al-ceoic-sombras-de-tierna-furia/>
- CCRI-CG (Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional). (19 de septiembre, 2021). “Chiapas al borde de la guerra civil”. Recuperado de: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/19/chiapas-al-borde-de-la-guerra-civil/>
- CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. (2023). *Informe Frayba 2023: Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado*. San Cristóbal de Las Casas: Editorial Fray Bartolomé de Las Casas.
- CONEVAL. (2019). “Medición de la pobreza 2008-2018. Estados Unidos Mexicanos”. Recuperado de: <https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx>
- CONEVAL. (2020). “Informe de pobreza y evaluación 2020. Chiapas”. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Chiapas_2020.pdf
- CONEVAL. (2021). “Treinta años de evolución de las carencias sociales a partir de instrumentos censales y la Encuesta Intercensal, 1990-2020”. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Carencias_sociales_censales_90_20/Presentacion_evolucion_carencias_sociales_censales_1990_2020.pdf

- CONEVAL. (2023). “Cuadro de indicadores ITLP 2023”. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_pobreza_laboral.aspx
- CRUZ, MANUEL. (2005). “Introducción. Hannah Arendt, pensadora del siglo”. En Arendt, H. *La condición Humana*. Barcelona: Paidós.
- ENLACE ZAPATISTA. (12 de noviembre, 2023). “La nueva estructura de la autonomía zapatista”. Recuperado de: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2023/11/12/novena-parte-la-nueva-estructura-de-la-autonomia-zapatista/>
- GÓMEZ, ALEJANDRO. (16 de octubre, 2023). “Reportan más de 400 niños y adolescentes desaparecidos durante el año en Chiapas”. *Diario del Sur*. Recuperado de: <https://www.diariodelsur.com.mx/local/redias-cuantos-ninos-desaparecidos-en-chiapas-registro-nacional-de-personas-desaparecidas-y-no-localizadas-10858096.html>
- GUNDER FRANK, ANDRE. (1967). “El desarrollo del subdesarrollo”. *Pensamiento Crítico*, 7, 159-173.
- HARVEY, NEIL. (2015). “Las fuerzas de Liberación Nacional y la guerra fría en México (1969-1974)”. En Neil Harvey, Francisco Pineda y Carlos Sánchez. *Dignificar la historia. Primera etapa (1969-1974)* (pp. 11-33). Apodaca: La Casa de Todos y Todas.
- INEGI. (2022). “Población total por entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales de 1990 a 2020”. *Censo de Población y Vivienda 2020*. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60c-d8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b&idrt=123&opc=t
- INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. (1994). *América Indígena*, LIV(1-2), enero-junio.
- LA JORNADA. (10 de febrero, 2005). “Socama, incubadora de varias bandas armadas”. Recuperado de: <https://www.jornada.com.mx/2005/02/10/index.php?section=politica&article=006n1pol>
- LE BOT, YVON. (2006). *El sueño zapatista*. Barcelona: Anagrama.
- LI, JUAN JOSÉ. (2023). “Remesas suman 30, 238 md durante el primer semestre. Bancomer”. *BBVA Research*. Recuperado de: <https://www.bbva-research.com/publicaciones/mexico-remesas-suman-30238-md-durante-el-primer-semester-99-a-tasa-anual/>
- MARX, KARL. (1859[2008]). *Contribución a la crítica de la economía política*. México: Siglo XXI Editores.

- OSORNI, MARÍA EMILIA. (2008). “Sociedad, cohesión social y crisis. Una lectura desde el pensamiento de Emile Durkheim”. *CIFRA*, segunda época, 3, 29-43. Recuperado de: <https://fhu.unse.edu.ar/index.php/cifra-3>
- PÉREZ, BRENDA GABRIELA, BARBOSA, LIGIA Y CABADA, PABLO DANIEL. (2022). *Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Informe 2021*. México: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Recuperado de: <https://cmdpdh.org/2023/01/24/presentacion-informe-episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico-2021/>
- PERIÓDICO OFICIAL. (29 de julio, 1999). Decreto 207. Ley de Derechos y Cultura Indígenas del estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez: Secretaría de Gobierno.
- RDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México). (2022). *La infancia cuenta en México 2022. Niñez y desapariciones*. México. Recuperado de: <https://investigaciones.derechosinfancia.org.mx/la-infancia-cuenta-en-mexico-2022-ninez-y-desapariciones/>
- REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO. (12 de octubre, 2023). “Marchan por la paz en Chicomuselo, Chiapas; denuncian extorsiones, saqueos y desapariciones”. *Animal Político*. Recuperado de: <https://www.animalpolitico.com/estados/marcha-paz-chicomuselo-chiapas>
- RUEDA, RIVELINO Y MUÑOZ, ERNESTO. (2 de agosto, 2023). “El EZLN advierte que retomará las armas ante asedio del crimen organizado”. *El Sol de México*. Recuperado de: <https://www.elsoldemexico.com.mx/república/sociedad/ezln-advierte-que-retomara-las-armas-ante-asedio-del-crimen-organizado-10474468.html>
- SAGASTI, MARÍA JOSÉ ET AL. (2016). *Las fuerzas de Liberación Nacional y los combates por la memoria 1974-1977*. Apodaca: La Casa de Todos y Todas.
- SHAIKH, ANWAR. (2022). *Capitalismo. competencia, conflicto y crisis*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- SÁNCHEZ, LUVIA MAGDALENA. (2022). *Experiencias de autonomía indígena: El caso del gobierno comunitario en Chilón, Chiapas* (Tesis de doctorado en Ciencias en Desarrollo Rural Regional). Universidad Autónoma Chapingo. San Cristóbal de Las Casas.
- TAPIA, LUIS. (2009). *Pensando la democracia geopolíticamente*. La Paz: Muela del Diablo Editores / Comuna / CLACSO / CIDES / UMSA.
- TOLEDO, SONIA. (2002). *Fincas, poder y cultura en Simojovel, Chiapas*. México: UNAM, UNACH-Instituto de Estudios Indígenas.

- VILLAFUERTE, DANIEL. (2003). “Chiapas: Las fronteras del desarrollo”. *LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos*, 1(1), enero-junio, 69-98.
- ZEPEDA, JORGE. (13 de julio, 2023). “Los cárteles también viven su cuarta transformación”. *Milenio*. Recuperado de: <https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/los-carteles-tambien-viven-su-cuarta-transformacion>



La reinención de los gobiernos purhépechas

The reinvention of the Purhépecha governments

José Eduardo Zárate Hernández

El Colegio de Michoacán, A.C.

<https://orcid.org/0000-0002-0131-3784>

zarate@colmich.edu.mx

Recibido: 22 de marzo de 2024

Aprobado: 07 de junio de 2024

Resumen

El objetivo de este trabajo es mostrar qué son los autogobiernos purhépechas en la actualidad y cuáles son sus principales retos. El derecho a gobernarse según sus usos y costumbres, así como de recibir la porción del presupuesto que les corresponde de manera directa, es una demanda de hace varias décadas. Si bien, las comunidades purhépechas han mantenido movimientos reivindicativos desde principios de los años ochenta, de siglo XX, la búsqueda de autonomía tiene su mayor impulso en los años noventa, luego del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Propongo que no es posible comprender su avance y configuración actual sin considerar el contexto político (un gobierno populista de izquierda) y social (violencia y extractivismo) en el que el crimen organizado y los agentes depredadores del territorio asechan a las comunidades y sus recursos. Más allá del reconocimiento formal (o de jure, como dicen los juristas), los retos para los gobiernos comunales son mantener el orden y la cohesión social, frente a las tendencias disruptivas de los agentes depredadores del capitalismo neoliberal.

Palabras clave: Autogobierno, comunidad, democracia, etnia, gobernabilidad

Abstract

The aim of this paper is to show what the Purhépecha self-governments are today and what their main challenges are. The right to govern themselves according to their uses and customs, as well as to receive the portion of the budget that corresponds directly to them, is a demand that has been going on for several decades. Although the Purhépecha communities have maintained protest movements since the early 1980s, the search for autonomy had its greatest momentum in the 1990s, after the uprising of the Zapatista Army of National Liberation (EZLN). I propose that it is not possible to understand its current advance and configuration without considering the political context (a left-wing populist government) and social context (violence and extractivism) in which organized crime and predatory agents of the territory stalk communities and their resources. Beyond formal recognition (or de jure, as jurists say), the challenges for communal governments are to maintain order and social cohesion, in the face of the disruptive tendencies of the predatory agents of neoliberal capitalism.

Keywords: Self-government, community, democracy, ethnicity, governance

1. Introducción

La asignación del presupuesto directo y del reconocimiento del gobierno por “usos y costumbres” a más de 50 comunidades indígenas del Estado de Michoacán, hasta hoy, representa una auténtica reconfiguración de los gobiernos indígenas locales, así como del orden municipal, que había prevalecido por más de un siglo en el Estado, (heredero de las reformas borbónicas del siglo XVIII). No en balde los principales opositores a este reconocimiento han sido los presidentes de varias cabeceras municipales, aun cuando pertenezcan al mismo partido gobernante en el estado que ha promovido el reconocimiento. También, en un registro más general, ha implicado una redefinición en las formas de participación democrática, al delegarse la aceptación o no de partidos políticos y de la instalación de urnas electorales a las autoridades comunales. Y, sobre todo un claro empoderamiento de las comunidades indígenas, en términos de manejo de su presupuesto, de la definición y realización de obras públicas, de la conformación de guardias, rondas o policías comunitarias, de la instalación de retenes en las vías públicas y de la impartición de justicia en ciertos ámbitos.

Significa esta reforma ¿una manera más eficaz de integración a las nuevas condiciones de reproducción del Estado mexicano?, o ¿dotar efectivamente de ciertos instrumentos y recursos, jurídicos y materiales a las comunidades para hacer frente, por sí mismas, a los retos que plantea el capitalismo global contemporáneo? Para los académicos y activistas involucrados, se trata, en efecto, de fortalecer a las comunidades para enfrentar a los agentes externos, incluyendo al Estado (Aragón, 2013; Ventura, 2012; Gasparello, 2018), aun cuando prevalezcan los conflictos internos y entre comunidades. Para los críticos, significa, junto con los programas sociales del actual gobierno, apuntalar el clientelismo y al Estado populista. Para los comuneros involucrados en el proceso de reconocimiento, se trata de una herramienta para enfrentar una serie de problemáticas que han dominado esta etapa del capitalismo tales como: sobre explotación de los bosques, expansión indiscriminada de cultivos comerciales, privatización de los recursos comunitarios, migración y una notable presencia del crimen organizado.

La discusión en torno a la autonomía de los gobiernos indígenas y su relación con el proyecto de nación no es nueva, atravesó toda la segunda mitad del siglo XX y se ha renovado en nuestros días, aunque con nuevas coordenadas políticas y reordenamientos mundiales y nacionales totalmente inéditos. Vale la pena recordar que esta discusión fue inaugurada en 1953, por G. Aguirre Beltrán, para quien era necesario conocer las formas de gobierno indígena para mejor integrar a las comunidades al proyecto transformador del Estado mexicano revolucionario. Siguiendo un marco evolucionista en su obra aparecen los entonces tarascos, hoy autodenominados purhépechas de Michoacán, como el grupo

étnico más aculturizado, en tanto era notable la presencia de partidos políticos nacionales, mediante los cuales se elegían a sus autoridades. Como sucedió con los estudios de política local que se hicieron durante la segunda mitad del siglo XX, la presencia de partidos políticos y la participación en los procesos electorales, eran los indicadores más claros de que se había superado el parroquialismo y se aceptaban las reglas de la democracia representativa, aún cuando en esos años el sistema político estaba diseñado para controlar a las masas populares. Por consiguiente, no se esperaba que, como sucede en la actualidad, se rechazara la intervención de los partidos en la vida comunitaria.

La obra de Aguirre Beltrán se escribió en el momento de consolidación del Estado nacional revolucionario. Predomina el corporativismo, se fortalece la intermediación política y se niega la importancia de las diferencias culturales, en este marco, las comunidades quedaron subordinadas al gobierno municipal. Lo dice de manera certera A. Fábregas, en su presentación de los años ochenta a la obra de Aguirre Beltrán “Formas de gobierno indígena, tiene la particularidad de mostrar como la vida comunal pierde su autonomía y pasa a ser parte del proceso estatal” (Fábregas, 1983, p. IV). Este periodo se inicia con el reparto agrario, en las primeras décadas del siglo XX, cuando se restituyen las tierras comunales y se reconocen comunidades agrarias. Para Dietz (1999), significó el establecimiento de un pacto entre el cardenismo y las comunidades indígenas de Michoacán. No obstante, este momento fue tan importante para la reconfiguración de los gobiernos locales que todavía hacia finales de los años ochenta, cuando el partido oficial estaba en franca crisis, estudios como los de Vázquez (1992), interpretaban las reivindicaciones comunales como estrategias para lograr reconocimiento estatal dentro de la estructura del Estado. El arreglo político logrado entre el Estado y los sectores populares entra en crisis hacia los años setenta cuando se cuestiona el nacionalismo y, para las comunidades indígenas de Michoacán, hacia finales de esa década cuando se desprenden de las organizaciones campesinas oficiales. La aparición a finales de los años setenta, de organizaciones campesinas e indígenas independientes y de una nueva generación de líderes políticos, formados en escuelas normales y universidades públicas, introducirán nuevas formas de participación política que cuestionarán a las organizaciones oficiales, y el discurso integracionista y homogeneizador del Estado nacional, ubicando a las comunidades indígenas como un actor en la lucha de clases. En esta época, se da el primer impulso a la reorganización del gobierno local, en términos de recuperar cierta autonomía, ajena a los partidos y sobre todo a las organizaciones del Estado, poniéndose en el centro a la asamblea comunal de toda la población, desplazando a la asamblea de la comunidad agraria (Zárate, 1993). La crisis del partido oficial, a finales de los años ochenta y la emergencia del pluralismo político significó competencia partidista y alternancia en los ayuntamientos. Los principales actores políticos de las comunidades

purhépechas, no fueron ajenos a las disputas partidistas, sino por el contrario, se involucraron activamente, desde sus propias organizaciones, como lo muestra Jasso (2011 y 2012). De manera definitiva y al calor de los discursos multiculturalistas, de alguna manera impulsados por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, también aparece la demanda de autonomía y remunicipalización, en la región, así como de una ley indígena en el estado que, durante décadas, no se aprobó (Ventura, 2010), sino hasta fechas recientes. Este impulso, se debilita a la par de la imagen ideal de la democracia representativa en las comunidades, por la excesiva intromisión, en los procesos electorales, del capital económico, el desdibujamiento de las fronteras ideológicas o programáticas de los partidos y la posposición de la solución a los problemas de mayor desigualdad y violencia, que ya estaban viviendo las comunidades. Aunque la relación entre los principales actores políticos indígenas y los partidos se mantuvo hasta la primera década del siglo actual (y podríamos decir que en cierto sentido aún se mantiene, aunque con importantes variaciones). En el momento actual, hay un claro cuestionamiento al modelo prevaleciente, se rechaza claramente la intervención a nivel local de los partidos, la comunidad controla algunos de los programas sociales, y se abre la posibilidad de reconocimiento de los gobiernos indígenas y de la aplicación de nuevos mecanismos redistributivos (como el presupuesto directo). Pareciera entonces que se está construyendo una nueva hegemonía comunal a partir del empoderamiento de los gobiernos locales. Aragón (2013), a partir de la experiencia de la comunidad de Cheran, así lo considera.

Ahora bien, hay que señalar que esta reforma fue impulsada por las mismas comunidades que aprovecharon la coyuntura del arribo de un gobierno declarado populista de izquierda y autodenominado la cuarta transformación (4T) y asesorados por las dos organizaciones promotoras del autogobierno: el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) y el Colectivo Emancipaciones (CE), cada una con su propio equipo de abogados. Estas organizaciones y los actores políticos purhépechas, sin pronunciarse a favor de ningún partido (por el contrario, declarando frecuentemente que no aceptarán la presencia de partidos políticos) han negociado con representantes del gobierno actual apoyos de diferentes especies: para obras públicas, para la celebración de las consultas, para programas especiales como fertilizantes, reforestación, migrantes, entre otros. En los eventos públicos de las comunidades, por ejemplo, en algunas celebraciones y aniversarios, aparecen representantes del partido Morena y se busca constantemente el diálogo con representantes del gobierno en el estado. Así pues, el logro del autogobierno ha sido resultado de un largo proceso de negociación y confrontación, cuyo punto de resistencia han sido las cabeceras municipales que han impuesto amparos y visto en la redistribución del presupuesto un ataque directo a su autoridad y autonomía.

2. Autogobiernos ¿cuarto nivel o nuevos municipios?

Si bien la demanda de autonomía de los pueblos indígenas de América Latina, se venía planteando desde la década de los ochenta, (el caso miskito, en Nicaragua, en esa década, fue el ejemplo más representativo de esta demanda) es en los años noventa, luego de la aparición del EZLN, cuando toma mayor impulso en las distintas regiones indígenas de nuestro país. En Chiapas como es bien conocido ocurrió todo un proceso de remunicipalización, que Leyva y Burguete (2007) documentaron. En Oaxaca, entre 1995 y 1998, se aprobaron una serie de reformas tendientes a fortalecer a los gobiernos locales, lo que podría considerarse un “reconocimiento tácito de la autonomía municipal” (Hernández-Díaz, 2011, p.73). En Michoacán, precisamente por la clara imbricación de los actores políticos indígenas locales con los partidos y la clara anteposición de los intereses partidistas a los de las comunidades, no se había podido lograr, sino hasta fechas recientes. Aunque en el discurso oficial se habla de saldar una deuda histórica y de reconocer formas primordiales o propias de gobierno que habían sido negadas pero que se mantenían en la práctica, para gran parte de las comunidades, la conformación de consejos comunales, como la nueva estructura de gobierno, y de guardias, rondas o policías comunitarias armadas (Kuarichas), se asumió como una oportunidad para reorganizarse internamente y tomar el control efectivo de su territorio comunal.

Hasta hace poco, la gran mayoría de las comunidades indígenas de Michoacán mantenían una estructura de gobierno fragmentada, se reconocían como jefaturas de tenencia y como comunidades agrarias. Aunque formalmente correspondían a dos órdenes jurídicos distintos que no se confundían, en algunas comunidades se complementaban y ordenaban jerárquicamente: la jefatura, dependiente del gobierno municipal, se encargaba de los asuntos de orden interno, de carácter civil. Mientras que el Comisariado de Bienes Comunales era el responsable de proteger la propiedad comunal. Éste era el cargo más importante, porque debía de resguardar el territorio comunal, por eso también, se le denominaba el representante de la comunidad. En tanto “representante” encarnaba a la comunidad, toda, como sujeto colectivo, dependiente solo de la asamblea general de comuneros. De hecho, formalmente y en la práctica la comunidad agraria suplantó a la comunidad indígena, que no tendría reconocimiento jurídico, sino hasta fechas recientes. Como categoría social, la comunidad indígena, es más amplia y compleja que la agraria y mantiene como su núcleo el sistema de cargos que también podría considerarse el gobierno espiritual de la comunidad.

A diferencia de las jefaturas de tenencia y ejidos no indígenas lo que lubrica el gobierno local es el sistema de cargos religiosos que ordena, disciplina y produce ciudadanos colectivos o sujetos colectivos que reproducen la jerarquía que va de las familias a los barrios y la comunidad. Castilleja, Paredes y

Terán (2011, p. 331), han hecho una descripción de cómo funciona este sistema cuyo eje localmente se denomina “el costumbre”, que rige el orden comunal, y se refiere al sistema de deberes y obligaciones ceremoniales establecidos para llegar a ser autoridad comunitaria.¹ Y que se sustenta en principios como la marahuátspeni, que se refiere a todo el universo del intercambio pero también del dar y ofrecer, sin esperar reciprocidad (Cortés, 2019) y jatsïpeni (que se refiere a estar al servicio para los demás (Márquez, 2003, p. 572). Si pensamos en términos de gubernamentalidad (o gobernabilidad), según lo expone Foucault (2006), como el establecimiento de un orden y una disciplina que va de lo colectivo a lo individual, básica para el control de la población, el sistema de cargos religiosos representaría el principal dispositivo productor de gobierno al interior de las comunidades indígenas.

Luego de casi cuatro décadas de gobiernos y políticas neoliberales, impulsoras de la privatización, los agronegocios y, como lo señala Harvey (2003) la acumulación por desposesión, las estructuras del gobierno civil se encontraban bastante debilitadas, mostraban una clara incapacidad para hacer frente a los retos de este proceso de integración. A pesar de todas las resistencias de las comunidades a las reformas al artículo 27 constitucional,² en algunas el cargo de representante se debilitó, permitiendo, la venta de parcelas comunales, también otorgando permisos para la explotación del bosque a foráneos, como sucedió hace algunos años en Ocumicho o en Pamatácuaro y en otras comunidades. Cuando los talamontes o los huerteros son confrontados, frecuentemente muestran permisos, convenios, títulos de propiedad otorgados por la autoridad comunal (o representante). También como ha sido el caso de varias comunidades como Ocumicho o Capacuaro, en que pequeñas células del crimen organizado se ha instalado en la localidad y los jefes de tenencia se muestran incapaces para enfrentarlos. En la narrativa local, estas problemáticas vividas, impulsaron a varias comunidades a demandar instrumentos como el presupuesto directo y la creación de sus rondas o policías comunitarias para hacer frente al acoso que sufren, por estos grupos.

De igual manera, el reconocimiento significa tanto una reorganización de la estructura municipal como al interior mismo de las comunidades, en relación al papel y las atribuciones que tendrán las nuevas autoridades (el consejo comunal) y las que todavía por ley no desaparecen como el jefe de tenencia. Las respuestas son muy diversas y variadas y en la mayoría de los casos están en

1 Dicen estos autores, “El costumbre constituye la base social sobre la cual se rige y actualiza el orden social en el ámbito local. Este ámbito local de gobierno ha hecho posible la definición de cada comunidad como una entidad política que mantiene cierto grado de control de las instituciones que, operan en este, también forman parte de sectores supracomunitarios de organización política; control que se expresa en las adecuaciones que la comunidad hace con base en relaciones, prácticas y normatividades cuya vigencia es reconocida por los grupos y personas que la integran” (Castillejas, Paredes y Terán, 2011, p. 331)

2 Véase Decreto de la Nación Purhépecha, en el que explícitamente se advertía a los comuneros que serían expulsados si vendían o privatizaban las tierras de la comunidad.

proceso, en el entendido que ahora la autoridad principal, que representa a la comunidad, es el consejo comunal solo dependiente de la máxima autoridad que es la asamblea general de comuneros, una figura difusa que solo excepcionalmente llega a concretarse, por ejemplo cuando se realizan las consultas, promovidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), para aceptar o rechazar la asignación del presupuesto directo. En relación al Jefe de Tenencia, ahora se discute cuál será su lugar en el gobierno comunitario, en tanto no ha desaparecido jurídicamente, como tampoco los municipios, ni se han creado nuevos municipios. Frente al peso del consejo comunal, que maneja el presupuesto, la policía y define las políticas públicas locales, parecería que el jefe de tenencia, no representa a nadie, y que es prácticamente insignificante. Sin embargo, porque en una buena cantidad de comunidades ya estaba integrado al engranaje del orden político y simbólico local, se conserva. En la mayoría no ha desaparecido, porque formalmente se mantiene como parte de la estructura municipal. En Ocumicho, porque representan a personas de respeto, se convirtieron en jueces locales, aunque en conflicto con el actual consejo comunal, disputando atribuciones y recursos (se discute, por ejemplo, quién manda a la ronda comunal o quien debe decidir sobre ciertas partidas presupuestales). Pero en aquellas, como Santa Fe de la Laguna o Pichátaro, donde la jefatura, prácticamente desde que se reconoció, estaba integrada a la organización por familias, barrios y mitades que sostienen el sistema rotativo de cargos de la comunidad, se mantiene por encima del nuevo consejo comunal. En estas comunidades, quienes deciden el nombramiento de Jefe de tenencia y de miembros del consejo comunal y el uso del presupuesto, son los representantes de los barrios en conjunto con autoridades locales (como jueces, representante y anteriores representantes, entre otros). En Santa Fe de la Laguna, donde se eligen a dos jefes anualmente, representantes de cada una de las mitades de la comunidad, señalan que los miembros del consejo están subordinados a ellos, dicen “son nuestros empleados”. En estas comunidades, los jefes de tenencia son los encargados de mantener el orden mediante la ronda o policía local, además de que hacen registros civiles y expiden cédulas de identificación, entre otras funciones que correspondían al municipio y ahora, en las comunidades con autogobierno, es el consejo comunal. En todos los casos, lo que se busca es adaptar la nueva estructura de los consejos comunales a las necesidades más urgentes de la comunidad, que son, por lo general, el control o defensa del territorio, la seguridad y el desarrollo de la comunidad. Lo que esperan lograr a través de los proyectos sociales y de infraestructura que la misma comunidad demanda y que tienen posibilidad de realizar a partir de que reciben el presupuesto directo. Para ellos esas serían las tareas de la gobernabilidad local. Lo que si queda claro es que los actuales consejos comunales no son equivalentes a los antiguos cabildos, en tanto a diferencia de los cabildos los miembros del consejo son electos y generalmente se elige a personas “que saben” (profesionistas) o “que están preocupadas por la comunidad”. La elección en raras ocasiones se realiza en asamblea comunal, son los barrios, las mitades o en algunos casos, como en Ocumicho, las calles de ve-

cinos quienes eligen a sus representantes. Estas formas de elección, hasta ahora, han sido respetadas por los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), que es la instancia que legitima la conformación de los consejos comunales.

3. Implicaciones. Demandas y retos

No entenderíamos a los actuales gobiernos purhépechas, si no nos preguntamos por lo que consideran sus principales retos para mantener el orden al interior de la comunidad y mantenerlas como colectividades viables, porque claramente existe la percepción generalizada de que el orden comunal y su territorio, se encuentran amenazados, por la expansión de los huerteros y propietarios particulares sobre las tierras comunales y la presencia activa del crimen organizado que asecha cualquier bien comunal (tierra, agua, madera). Es bastante conocido el caso de Cherán y su levantamiento en el año de 2011, contra los talamontes, (Velázquez, 2019; Román, 2014; Ojeda, 2015, son algunos de la gran cantidad de estudios que sobre esta comunidad se han elaborado en la última década), pero la mayor parte de la región está viviendo problemas similares. En días recientes (8 de enero de 2024), fueron secuestrados dos jóvenes de la comunidad de Tanaco. El actual coordinador del Consejo comunal de Ocumicho estuvo también secuestrado por varios días en el año de 2022 y ahora se encuentra amenazado de muerte, el año pasado también aparecieron varios cuerpos mutilados a la orilla de la carretera nacional en Carapan, por mencionar algunos casos. Además, es clara la preocupación por el crecimiento del consumo de drogas y más alcohol entre los jóvenes y niños, lo que ha causado alarma en las comunidades. A lo que también se agrega la movilidad masiva de personas por la necesidad de salir a trabajar (migrar). Además la persistencia de conflictos faccionales al interior de las comunidades ahora vinculados con el control de los cuerpos de seguridad. Todos estos temas se ven como riesgos para la vida comunitaria o para la integración de la comunidad. Algunos autores (Paleta y Fuentes, 2013; Velázquez, 2019; entre otros) sugieren que la presencia del crimen organizado está estrechamente vinculada con la expansión de los cultivos agrocomerciales de exportación en la región, en especial las huertas de aguacate y de frutillas, bayas o berries.

Frente a este panorama, amenazante y conflictivo, las autoridades tradicionales, como el representante y el Jefe de tenencia, se mostraban incapacitados para tomar decisiones. En la mayoría de los casos se trataba de figuras bastante limitadas o débiles para hacer frente a la delincuencia organizada y a los huerteros, que frecuentemente están asociados. Es común escuchar narraciones muy similares, por ejemplo a las de Cherán, de que ante la presencia de los delincuentes, la policía municipal no intervenía y en ocasiones, ante su llamado, ni el ejército, ni la Guardia Nacional han acudido. De ahí que algunas pequeñas comunidades como San Benito de Palermo, una encargatura del orden dependiente de la Co-

munidad de Pamatácuaro, o San Francisco Ocumicho, una comunidad situada en los márgenes de la región purhépecha, vieran como una posibilidad para fortalecerse el reclamo del presupuesto directo y del autogobierno.

Por otra parte, el rechazo a los partidos políticos surge de la convicción generalizada entre los actores políticos de que los miembros o representantes de los partidos estaban más interesados en sus asuntos y en ocupar cargos que en resolver problemas de las comunidades, “no nos hacían caso” o “nunca cumplían lo que prometían antes de las elecciones” (testimonio de N. Valencia de Sevina y de J. Ruiz de San Benito). Frente a esta situación se fortaleció el rechazo a los partidos políticos y a la democracia formal, lo que se expresó en el impedimento de instalación de urnas en la mayoría de las comunidades, de la región, durante los procesos electorales de 2018 y 2021. Además, se tenía el ejemplo de la comunidad de Nurío que desde 2006 mantiene un gobierno por usos y costumbres con un presupuesto propio, negociado directamente con el municipio de Paracho y el gobierno del estado, y de Cherán que inició su movimiento en 2011 y que mediáticamente ha sido el más difundido y estudiado. Por eso, como lo señalan las autoridades entrevistadas consideraron varias posibilidades, para salir de esa situación. “Entonces empezamos a organizarnos para llevar a cabo este proceso... a promover la consulta y nuestro reconocimiento oficial como comunidad indígena”. Implicó también todo un proceso de convencimiento a la gente para que aceptaran que “nosotros si nos podíamos gobernar sin necesidad de partidos, ni del ayuntamiento...convencer a nuestra propia gente de que sí teníamos la capacidad para gobernarnos” nos dijo N. Valencia, un prominente miembro del Consejo comunal de Sevina, “eso [enfatisa] ha sido lo más difícil, por esa mentalidad de que no somos capaces de hacerlo”.

Si bien en algunas comunidades se ha dado un franco rechazo a la intervención de los miembros de partidos políticos en los consejos comunitarios, el tema no está del todo resuelto. En prácticamente todas las comunidades hay voces críticas de los consejos comunales, algunas independientes, pero otras claramente vinculadas a los partidos. Hay personajes como Doña Chepa, de Cherán quien participó en el primer consejo mayor o Jesús de Nurío, quienes se dicen cardenistas de hueso colorado y en los años noventa defensores a ultranza del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hasta que se decepcionaron porque, según ellos, los partidos no hacían nada por la comunidad. Sin embargo, en muchas otras no se trata de un rechazo tajante, sino más bien el tema que se plantean es si se reafirma su capacidad para decidir si se les acepta o no en la comunidad, si se aceptan o no urnas electorales y bajo qué condiciones. Los principales actores políticos (me refiero a quienes ahora promueven la autonomía) manifiestan un claro rechazo a que se considere a las comunidades como simples clientelas electorales, además de hacer patente su capacidad para tomar decisiones que les convengan.

El tránsito del control municipal de la seguridad al local, frente a la expansión de los agentes depredadores, que actúan en la ilegalidad, también representa, en el discurso de los consejos comunales, un regreso a la comunidad para defender los límites territoriales o mantener el control del territorio comunal frente a una serie de problemas, como la violencia, que se han agudizado en los últimos años. Tanto en Ocumicho, como en Capacuaro, las guardias locales han actuado contra pequeñas células del crimen que se han instalado en esas comunidades, en Santa Fe de la Laguna, desmantelaron una pequeña huerta de aguacate que ya habían plantado particulares, en terrenos comunales. Lo significativo es que en el discurso se vincula la crisis de los partidos o el cuestionamiento de la actuación de los partidos con la pérdida de control territorial y el avance de los agentes depredadores del capitalismo global (como son el crimen organizado y los aguacateros) sobre sus territorios y población.

Ahora bien, estos problemas se entretejen con divisiones y conflictos al interior de las comunidades. A partir de que se reforma el artículo 27 constitucional, a principios de los años noventa, se abre la posibilidad de que se privaticen tierras comunales y que algunas autoridades coludidas con particulares privaticen o concesionen porciones del territorio comunal y permitan el ingreso de los agentes externos. La cosmovisión capitalista, de los aguacateros y talamontes, que solo ve ganancias o recursos fáciles en esas actividades, también se encuentra presente en algunos comuneros, frente a la visión comunalista local, que busca preservar para las futuras generaciones los recursos comunales.

Las comunidades que ya están recibiendo su presupuesto directo, para fortalecer a la autoridad local, se han aplicado a promover obra pública: como la construcción y mejoramiento de dispensarios, consultorios, escuelas, centros recreativos y deportivos, locales. Aunque se ha cuestionado mucho la poca experiencia en el manejo presupuestal, la rendición de cuentas, al igual que los ayuntamientos es con la tesorería del estado y bajo las mismas reglas que los municipios. También deben demostrar buen manejo de los recursos a la comunidad (con el fin de legitimar al gobierno local). Ya se han dado casos en que la asamblea general ha destituido a todos los miembros de un consejo y formado uno nuevo, porque no rindieron cuentas claras. Un caso muy comentado en la región es el del primer consejo comunal de Pichátaro, que luego de un año de funcionamiento fue destituido totalmente, en una asamblea comunal, por los representantes de los barrios, porque no fue capaz de presentar cuentas claras ni justificación del presupuesto ejercido durante su primer año de gestión. También se busca crear nuevos consensos entre grupos antagónicos y ampliar la aceptación de las nuevas autoridades por la población.

4 Gobierno local y democracia étnica

En primer lugar hay que decir que desde que se inició con mayor ímpetu la discusión sobre este tema, se ha pretendido explicar a los gobiernos indígenas, con los mismos principios o valores de la democracia moderna. Señalando, por consiguiente, deficiencias en la impartición de justicia local, al no respetar derechos humanos básicos (Vázquez, 2005). También, acostumbrados al derroche y el gasto conspicuo, se ha señalado una incapacidad para rendir cuentas y hacer un uso del presupuesto público discrecional. Que el voto a mano alzada no es democrático, porque los individuos quedan expuestos. Que los líderes devienen en caciques y que el reconocimiento de cualquier autonomía de base étnica conduce necesariamente a la balcanización o fragmentación de la comunidad política nacional, liberal y capitalista o a autocracias segregacionistas, contrarias a la democracia universal y moderna.

Pues bien, esta concepción liberal de participación democrática es la que acompañó al capitalismo a lo largo del siglo XX y como tal mostró claras limitaciones para reconocer derechos de sujetos colectivos que no se identifican plenamente con los valores de individualismo y la libertad individual, sino que se presentan como sujetos colectivos y así quieren que se les reconozca. Esta problemática vinculada al multiculturalismo y al reconocimiento de derechos colectivos fue ampliamente discutida a partir de la década de los noventa por autores como Taylor (2009), Walzer (2001), Benhabib (2004) y otros que participaron en este debate, algunos de los cuales fueron calificados como liberal comunalistas, porque proponían que dentro del Estado liberal moderno se pudieran reconocer derechos colectivos. Como Walzer (2001) quien propuso el reconocimiento de una ciudadanía compleja, como una respuesta a las demandas de reconocimiento colectivo a la vez que individual. En nuestro país L. Villoro fue sin duda el autor más representativo en este debate, en gran medida la discusión se dio desde los años noventa en torno al tema de la ciudadanía étnica (De la Peña, 1995; Solís, 2012) como otra manera de ejercer la democracia y participar en el sistema político.

El modelo neoliberal que se implantó en nuestro país, desde la década de los ochenta, puso un excesivo énfasis en el mercado como el mecanismo fundamental para establecer un orden social sustentado en el auto disciplinamiento de los sujetos y en la reducción del Estado a su mínima expresión. Este sistema hizo posible el avance de las políticas multiculturales o del multiculturalismo, siempre y cuando los sujetos colectivos también participaran en el mercado y bajo sus reglas (lo que Hale, 2004, llamó multiculturalismo de fachada). Es decir que las comunidades pusieran a disposición del mercado sus bienes colectivos, mientras siguieran manteniéndose como una colectividad, que es lo que ha venido sucediendo, en la región, con el avance de las huertas de aguacate, la sobre explotación del bosque y, en general, la privatización de porciones del territorio comunal.

No podemos entender la reorganización de los gobiernos indígenas / purhépechas, si no consideramos que su reorganización ocurre, no solo como una demanda por la defensa de la identidad cultural de estos sujetos, sino que el reconocimiento se convirtió en un recurso necesario para enfrentar una doble problemática que para los comuneros purhépechas tiene que ver con la sobrevivencia y la viabilidad de la comunidad en el mundo global: la soberanía territorial / o sobre su territorio, que se ha visto socavada por la acción de los agentes privatizadores (tanto internos como ajenos a la comunidad) protegidos legalmente por la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, y, en la práctica, por el poder económico y la capacidad de fuego y la violencia, que se ejerce mediante amenazas o acciones concretas a los comuneros y a las autoridades locales. La otra cara de esta problemática, se refiere a lo que podríamos denominar una preocupación por el control de la población en relación a la diversificación de los mercados laborales (ahora hombres y mujeres, salen a trabajar a las empresas agroexportadoras) al consumo, en particular el aumento en el consumo de alcohol entre los jóvenes (de tal manera que en algunas comunidades han instalado celdas para hombres y mujeres, porque en las fiestas se embriagan y escandalizan por igual las y los jóvenes) y la aparición del consumo de drogas entre menores de escuelas primarias y secundarias. Esa problemática se refleja sobre todo en la organización familiar. En tanto el matrimonio sale a trabajar (como sucede en Pamatácuaro o Zirándaro, en que hombres y mujeres jóvenes trabajan en las huertas) o migran a los Estados Unidos y dejan a los hijos en manos de parientes, generalmente los abuelos. De alguna manera, también estos temas confluyen con los discursos del gobierno federal, en tanto legitiman los programas sociales que buscan incidir en la población “más desprotegida”. Fraser y Honneth (2006), han mostrado claramente como el reconocimiento y la justicia redistributiva deben de ir de la mano, sin el uno no existe el otro. En el discurso oficial se trata de una manera de incidir en las causas de la desigualdad y así quitarle base social a la delincuencia. La asignación del presupuesto directo al ser una expresión de la justicia redistributiva y una manera de practicar la democracia étnica, –en este caso a nivel de la comunidad– es interpretado por las autoridades comunitarias, junto con los otros programas sociales, (como becas a los jóvenes, apoyos para ancianos y madres solteras, despensas, que ahora se distribuyen en la comunidad) como la posibilidad para intervenir en estos temas y dicen ellos detener “la descomposición de la comunidad”, lo que se refleja en el desinterés de los jóvenes para involucrarse en los asuntos públicos, como la defensa de su propiedad comunal y sus bosques. De alguna manera, ejercer cierto control de la población local que permita mantener la soberanía sobre el territorio comunal.

Establecer cierto orden que desde los mecanismos tradicionales es difícil de lograr. Si bien hay claros indicios de que, en aquellas comunidades impactadas por la migración, los rituales comunitarios se están lentamente vaciando de contenidos. La migración en todas las comunidades los ha revitalizado con la inyección de

recursos económicos. Ahora las fiestas son más vistosas, amenizan varias bandas y grupos musicales, se queman varios castillos y el gasto en comidas y bebidas alcohólicas se ha incrementado. Si bien, no carecen de significado y los participantes asumen su responsabilidad con mucha disciplina. El sistema de cargos o “el costumbre”, también están cambiando, aunque ocupar un cargo, es considerado el más alto logro al que se puede aspirar en una comunidad, lo que prevalece es la fiesta. Además luego de décadas de negación de los valores positivos de este sistema, por la escuela pública y otros agentes modernizadores (como son los mismos sacerdotes), el sistema de cargos, el costumbre o pintekua, frente a las condiciones actuales o frente a estos retos del contexto actual, parecería insuficiente, por lo que se reconsidera la necesidad de implementar estos otros mecanismos de integración o reintegración comunitaria. Lo que no significa que en el tema de la gobernabilidad no formen un solo campo. Lo que rige al sistema de cargos es la lógica del don (que llega a manifestarse en su máxima expresión en el ofrendar, sin esperar recibir reciprocidad), cuyo objetivo no solo es el prestigio de la persona y su reconocimiento pleno por la comunidad, sino recrear a la comunidad misma. Es poner en escena el ideal de comunidad, hacer real la vida colectiva. Como es bien sabido, la *comunitas* (Turner, 1988) no es permanente, sino un momento o periodo finito, la comunidad como forma de vida para conservarse requiere implementar acciones prácticas tendientes a coincidir o a confluir en ese ideal que, en primera instancia busca preservar el orden interno o al interior de la comunidad, de ahí la importancia de contar con recursos para implementar proyectos comunitarios enfocados a dar respuesta a problemáticas sociales.

El reconocimiento asociado a la justicia redistributiva ha producido una ampliación de los espacios de participación de las comunidades en sus propios asuntos. En el tema del presupuesto directo, si antes una comunidad como Ocu-micho, recibía 250 mil o 300 mil pesos y alguna obra pequeña, de parte del ayuntamiento de Charapan y era éste además el que definía que obra pública se podía llevar a cabo en la comunidad, en la actualidad recibe entre cinco y diez millones, por el número de población que tiene (cerca de cinco mil habitantes). Además, en raras ocasiones enviaban alguna patrulla para vigilar la seguridad en la comunidad. En todas las comunidades se tienen planes para ampliar las clínicas locales, los servicios de limpieza, garantizar el agua potable y mejoras en las escuelas. Aunque no son municipios, los proyectos de obra pública de gasto los deben presentar también a la tesorería del estado para su autorización y de la misma manera para la comprobación de los gastos. En el tema de la impartición de justicia, las autoridades locales solo intervienen en los asuntos domésticos en los que se busca la conciliación. Aunque he conocido de casos de violencia doméstica (de esposo hacia la esposa o de hijos hacia sus padres) en que las mismas autoridades locales recomiendan que se acuda a ministerio público, en cualquier caso, la decisión queda en manos de los afectados, quienes en ocasiones solicitan que mejor sean castigados de acuerdo a las costumbres locales. En los casos más

graves de delitos federales como robo, asesinato, las mismas autoridades tradicionales acuden a instancias federales. No hay una contradicción entre justicia impartida por el Estado y la justicia impartida por las autoridades locales. Sino diversas posibilidades a las que se puede acceder según lo decida la persona afectada. Pero también la apelación a instancias y organismos internacionales de derechos humanos ha permitido a las comunidades indígenas avanzar en el reconocimiento de sus derechos como sujetos colectivos. En el campo de la participación política, desde hace décadas se presentan candidatos a puestos de elección popular originarios de las comunidades. Se ha discutido mucho la creación de un distrito electoral o varios, exclusivos para las comunidades purhépechas, pero hasta ahora no se ha logrado delimitar con claridad, no obstante, se siguen presentando comuneros como candidatos a puestos de elección popular. En esta ocasión, las elecciones del 2024, no será la excepción, sin embargo, la diferencia es que ahora cada comunidad decide si se les permite o no, ingresar y hacer campaña en la comunidad. Hay ciertos gremios como los profesores, que están muy comprometidos con ciertos partidos políticos y ha propuesto que se apoye a ciertos candidatos y que se permita la instalación de urnas. En algunos lugares como Ocumicho, San Benito, Sevina, el tema está en discusión y hay posiciones encontradas, pero en otros como Angahuan, Nurío o San Felipe de los Herreros, han cerrado las puertas a la intromisión de partidos y candidatos.

En la región el espacio público se ha diversificado, más que conducir a un cierre social, el reconocimiento de los autogobiernos ha significado la apertura a otras formas de expresión del sujeto político, en este caso de los sujetos colectivos. En este sentido, se puede decir que se está ampliando la base de participación democrática, pero también las formas de participación. Se están transformando las jerarquías políticas formales luego de un siglo, transfiriendo recursos y obligaciones o responsabilidades a los niveles más básicos de organización. Frente al modelo anterior que iba de los partidos a los ayuntamientos y no se consideraba a las comunidades o, más bien, solo se las consideraba para pedir su voto y en ocasiones se les otorgaba uno o varios regidores, pero en tanto sujetos colectivos, estaban políticamente subordinados. Ahora hay una activa participación, y se podría decir, de integración al sistema mayor, pero también otras maneras de intervención en el espacio público. Toda una reestructuración que tiene como punto de partida una calidad de lo étnico.

Las etnodemocracias o democracias étnicas contemporáneas, en cierto sentido son resultado de la implementación de las políticas neoliberales, que avanzaron a nivel global como sistema ideológico promoviendo el valor supremo del mercado contra la intervención del Estado y su reducción a su mínima expresión, cuestionando el autoritarismo político y resaltando la eficiencia del gobierno mínimo. Destacando como fundamento del orden social la igualdad ante la ley (de los gobernantes) la rendición de cuentas y la transparencia en el uso del

presupuesto público. Frente a la impunidad, el uso discrecional del presupuesto y la opacidad en el manejo de los recursos públicos (Fukuyama, 2016). Si bien, es un dogma del neoliberalismo no utilizar los recursos públicos, en particular los presupuestarios, para garantizar la paz social, porque se incurre en populismo y en su extremo el autoritarismo, autores como North, Wallis y Weingast (2012), señalan que para contener la violencia, no se debería usar el presupuesto en programas sociales, sino, en todo caso, en inversión pública en infraestructura, salud y educación. Es decir, en obras de interés general. La base de este modelo al menos discursivamente, debería ser el Estado de derecho o la igualdad de cada ciudadano ante la ley. Lo cual, como ya ha sido constatado, cuando se refiere a minorías étnicas insertas, como sujetos colectivos, en el Estado nacional resulta bastante problemático. Aunque los contenidos de las democracias étnicas serían resultado del diálogo que establecen los sujetos políticos, con las instituciones modernas, a la vez que, con sus componentes internos, buscan dar respuesta a los retos que les plantea el neoliberalismo contemporáneo.

Sin embargo, como es bien conocido, la aplicación de las políticas neoliberales ocasionó en la mayor parte del mundo, el aumento de las desigualdades y una apropiación desmedida, por parte del gran capital, de recursos, territorios, fuerza de trabajo y bienes comunes, generando procesos de integración subordinados a la globalización. En este proceso el control del territorio, tal como sucedió en el siglo XIX (Zárate, 2011), se convierte en un dispositivo fundamental para refrendar su soberanía. Porque la pérdida del territorio, como bien lo plantearon los alegatos del siglo XIX, contra las reformas liberales de desamortización, los dejaría en una desprotección total, llevándolos a la pobreza extrema y convirtiéndolos en parias en sus mismas comunidades. Ya S. Sassen (2006) había señalado que los puntos sobresalientes en este proceso de globalización serían las disputas por territorio, autoridad y derechos. Pero el territorio carece de significado si no es ocupado por una población que a su vez está sometida a fuertes presiones para que abandone o al menos modifique su forma de vida colectiva. Durante décadas se impulsó la idea del territorio comunal, solo como un bien económico, no es raro que esta idea haya permeado en los valores o esté presente en la cultura local. Sin embargo, esta idea se contrapone a otra que también se ha conservado y que es entender el territorio como parte de una totalidad, compuesta por otros bienes patrimoniales y por personas, esta concepción es la que se destaca en su defensa y frente a los agentes externos depredadores. Eso es lo que de alguna manera se defiende en este proceso y está incidiendo en la reconfiguración del gobierno local. No la comunidad prístina, sino una que mínimamente logre mantener integrados al territorio, las personas y el gobierno local, frente a las amenazas disruptivas de los agentes del capitalismo global. Por lo mismo los consejos comunales no son equiparables a los antiguos cabildos comunales, en los actuales, la presencia de jóvenes profesionistas e intelectuales locales es notable, son quienes elaboran los discursos de reivindicación. En este

sentido lo que hasta ahora, que va iniciando este proceso, se ha puesto en práctica es una serie de acciones tendientes a subsanar las inequidades a que les tenían sometidos los ayuntamientos, controlados por partidos políticos, y a defender el territorio comunitario, como ya lo mencionamos.

En el contexto de un “gobierno populista” de izquierda (Mouffe, 2018) como podría caracterizarse al de la 4T, se discute en la opinión pública el “desmantelamiento” de las instituciones democráticas impulsadas por el régimen neoliberal, como contrapeso al avance del mercado. El reconocimiento de democracias étnicas sería un ejemplo de lo anterior. Sin embargo, detrás de este paso hay una larga lista de propuestas, arreglos y reformas que no ofrecieron soluciones tangibles a las problemáticas que estaban viviendo las comunidades. Por el contrario, agudizaron más las condiciones de extractivismo y violencia que viven las comunidades y pueblos originarios y que las han puesto en riesgo como colectividades que mantienen una forma de vida particular. El gobierno de la 4T, parecería poner en el centro a la población y el control de la población por sobre el territorio. En esto no hay cambio con respecto al neoliberalismo. En lo que sí cambia es en el papel del Estado en el acotamiento o limitación del mercado. Bajo la lógica de que los programas de bienestar enfocados hacia la población más necesitada estarían atacando las causas mismas de la violencia y la base social (o restándole base social) al crimen organizado. Por consiguiente, se podría considerar que al empoderarse la gente, o la población, se logrará el control del territorio. Pues “el uso legítimo de la fuerza” tendría como soporte ideológico el apoyo de las masas populares o de la mayoría de la población. Eso se puede ver claro en el caso del reconocimiento de los “usos y costumbres” y el presupuesto directo a las comunidades indígenas. Ya que este reconocimiento no solo va acompañado del presupuesto directo sino de la aplicación de los mismos programas sociales (becas, apoyos a adultos, despensas y la ampliación de los servicios médicos). Entonces las comunidades, o los pobladores de las comunidades deben de ser los responsables del control de su territorio y si permiten o no la depredación forestal y la expansión de las huertas de aguacate de sus tierras, así como del actuar o repeler a los grupos delincuenciales armados.

En la utilización de los programas sociales para combatir o quitarle base social a la delincuencia, el gobierno de la 4T, parecería seguir a pie juntillas a M. Foucault (2006), en que lo importante es el control de la población y no del territorio de manera directa. Solo que Foucault si veía al mercado (tal como lo postulan los teóricos del neoliberalismo Hayek y Mises) como el regulador ideal (o el generador de orden) de la población en la sociedad capitalista, porque si esta regulación la asume el Estado se corre el riesgo del ascenso del autoritarismo, justificado en la soberanía. Mientras que el gobierno de la 4T estaría recurriendo a una mezcla de intervención del Estado en áreas claves y para fomentar el mercado interno, defender la soberanía. A la vez que permitir al mercado actuar

en áreas no estratégicas, para el control de la población y el territorio. Es en este contexto de políticas de reconocimiento impulsadas por un gobierno de izquierda populista, donde se insertan los nuevos autogobiernos purhépechas y donde encuentran también sus límites.

5 Reflexiones finales

Hasta ahora, ha sido la apelación a los acuerdos internacionales, en especial al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmados por el Estado mexicano, lo que ha permitido el reconocimiento de comunidades indígenas, del gobierno por usos y costumbres, así como el derecho a contar con un presupuesto propio. La democracia indígena a diferencia de la democracia liberal, que se define con base en los derechos ciudadanos y el voto secreto, libre y directo, no considera importante al ciudadano individual sino al sujeto colectivo. Pone énfasis en los contrapesos de los diferentes cuerpos o colectivos que conforman la comunidad (familias, barrios, asamblea) y que tanto en la vida ordinaria como en la ritual se expresan en relaciones de complementariedad, ayuda y cooperación. Este sistema que mira hacia el interior mismo de la comunidad, ahora, frente a los desafíos que le presenta la globalización capitalista, tiene el reto de generar mecanismos de colaboración y acuerdos políticos entre comunidades. Hasta la fecha cuando lo han logrado ha sido cobijados por organizaciones políticas que históricamente han terminado por imponer sus propias agendas (así sucedió con la UCEZ, la ONP y otras), provocando inconformidades y rupturas. Para lo cual los nuevos gobiernos comunales deben mostrar eficacia en el manejo de los recursos y capacidad para generar acuerdos y compromisos de colaboración entre comunidades.

En el momento que escribo este artículo el Poder Ejecutivo, presentó ante el Congreso la iniciativa de reforma constitucional que recoge los acuerdos de San Andrés, Chiapas, y reconoce a los pueblos y comunidades originarios como sujetos de derecho y no solo como sujetos de interés público. Lo que, indudablemente les daría mayor certeza y permitiría consolidar los procesos que están en marcha. Sin embargo, nunca y en ningún caso los procesos sociales son lineales y, como se puede notar, los gobiernos étnicos enfrentan múltiples presiones y problemas que deberán irse resolviendo en la marcha. Los arreglos y el reconocimiento reciente se lograron, en gran medida gracias a la voluntad del gobierno populista de izquierda que opera tanto a nivel federal como del estado de Michoacán, pero la llegada de un gobierno de distinto signo ideológico podría modificar el avance o la dirección del proceso de autonomía. Se trata de un proceso en marcha que puede tomar rumbos inciertos. Existen múltiples ejemplos, a nivel mundial, en que el arribo de gobiernos autoritarios o con un claro sesgo ideológico, étnico o religioso, encuentran artilugios para limitar los derechos de las minorías, argumentando pérdida de soberanía, posesión de recursos estratégi-

cos o garantizar la seguridad de toda la población. Además, está la gran presión que ejercen los agentes depredadores del capitalismo neoliberal sobre los bienes comunales. Frente a este panorama, el fortalecimiento de las democracias étnicas, desde las mismas comunidades y con base en sus usos y costumbres, resulta el reto principal, para mantenerse como una forma de vida viable en el siglo XXI.

Referencias

- AGUIRRE, GONZALO [1953] 1983. *Formas de gobierno indígena*. México, INI.
- ARAGÓN, ORLANDO (2013). “El derecho en insurrección: el uso contra-hegemónico del derecho en el movimiento purépecha de Cherán”. En *Revista de Estudios e pesquisas sobre as Américas*, vol. 7, no. 2, pp.37-69
- BENHABIB, SHEILA (2004). *Los derechos de los otros*. Barcelona, Gedisa.
- CASTILLEJA, AIDA, PAREDES, CARLOS y TERÁN, MARTHA (2011). “Un acercamiento diacrónico al sistema de autoridad y gobierno en pueblos purhépecha”. En A. ROTH (ed.), *Caras y máscaras del México étnico*, El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán.
- CORTÉS, JUAN CARLOS (2019). *Marhuatspeni. El servir sagrado entre los p’urhépechas*. Morelia, UMSNH-El Colegio de Michoacán.
- DECRETO DE LA NACIÓN PURHÉPECHA. *Relaciones estudios de Historia y sociedad*, no. 61-62, pp.163-168
- DE LA PEÑA, GUILLERMO (1995). “La ciudadanía étnica y la construcción de los indios en el México contemporáneo”. *Revista Internacional de Filosofía Política*, no. 6, pp. 116-140.
- DIETZ, GUNTER (1999). *La comunidad purépecha es nuestra fuerza*. Ecuador, Abya-Yala.
- FÁBREGAS, ANDRÉS (1983). “Prólogo”. En Aguirre, Gonzalo, *Formas de gobierno indígena*. (pp. I-IX). México, INI.
- FRASER, NANCY, HONNET, AXEL (2006). *Redistribution or Recognition?* London, Verso.
- FOUCAULT, MICHEL (2006). *Seguridad, territorio, población*. Argentina, F.C.E.
- FUKUYAMA, FRANCIS (2016). *Los orígenes del orden político*. España, Deusto.
- GASPARELLO, GIOVANNA (2018). “Respuestas comunitarias a la violencia en Cherán: seguridad, participación, reconstrucción del territorio y

- de la sociedad”. En Fuentes, A. y Fini, D. (coords.) *Defender al pueblo. Autofensas y policías comunitarias en México*. (pp. 177-202) México, BUAP-Ediciones del Lirio.
- GASPARELLO, GIOVANNA (2019). “Análisis del conflicto y de la violencia en Cherán, Michoacán”. En *Relaciones estudios de historia y sociedad*, no. 155, pp. 77-112.
- HALE, CHARLES (2004). “Rethinking Indigenas Politics in the Era of the ‘Indio Permitido’”. *NACLA, Report on the Americas*, vol. 38, no. 2, pp.16-37.
- HARVEY, DAVID (2003). *El nuevo imperialismo*. Madrid, Akal.
- HERNÁNDEZ-DÍAZ, JORGE (2011). “Autonomía, gobierno local y municipio en Oaxaca”. En Hernández-Díaz, Jorge y Selee, Andrew (coords.) *Organización política y gobernabilidad en territorios indígenas de América Latina*. (pp. 55-83). México, Purrua
- JASSO, IVY (2011). “Organizaciones indígenas purhépechas y estrategias para ocupar el gobierno local en Michoacán”. En Hernández-Díaz, Jorge y Selee, Andrew (coords.) *Organización política y gobernabilidad en territorios indígenas de América Latina*. (pp. 123-148). México, Purrua
- JASSO, IVY (2012). *Los movimientos indígenas y las construcciones identitarias en México. La organización Nación Purhépecha (Michoacán) y Servicios del Pueblo Mixe (Oaxaca)*. México, El Colegio de Michoacán, Universidad de Guanajuato.
- LEYVA, XOCHITL y BURGUETE, ARACELI (2007). *La remunicipalización en Chiapas*. México, CIESAS, Purrua.
- MÁRQUEZ, PEDRO (2019). “Demaratspekua amarhuatspekua: El caso del jefe de tenencia”. En Cortés, Juan Carlos (Coord.) *Marhuatspeni. El servir sagrado entre los p’urhépechas*. Morelia, UMSNH-El Colegio de Michoacán.
- MÁRQUEZ, PEDRO (2003). “Gobierno, organización social y retos del pueblo p’urhépecha en el fin del milenio. El caso de Cheranatzicurin”. En Paredes, Carlos y Martha Terán (coords.) *Autoridad y gobierno indígena en Michoacán*. México, El Colegio de Michoacán, CIESAS, INAH, UMSNH.
- MOUFFE, CHANTAL (2018). *Por un populismo de izquierda*. México, Siglo XXI.
- NORTH, DOUGLAS, WALLIS, JOHN, WEINGAST, BARRY. (2012). *Violence and Social Orders*. Cambridge, Cambridge University Press.
- OJEDA, LORENA (2015). “Cherán: el poder del consenso y las políticas comunitarias”. *Política Común*, No. 7, pp. 12-28.

- PALETA, GUILLERMO y FUENTES, ANTONIO (2013). "Territorios, inseguridad y autodefensas comunitarias en localidades de la Meseta Purépecha de Michoacán, México". *Revista Márgenes*, vol. 10(13), pp. 62-68
- ROMÁN, DENISSE (2014). *El espejismo del orden. Etnografía histórica sobre política local en Cherán, Michoacán (1856-2014)*. (Tesis Doctoral). El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán.
- SOLÍS, JESÚS (2012). *Ser ciudadano, ser indio*. México, El Colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
- TAYLOR, CHARLES (2009). *El multiculturalismo y la política del reconocimiento*. México, FCE.
- TURNER, VICTOR (1988). *El proceso ritual*. Madrid, Taurus.
- VÁZQUEZ, LUIS (1992). *Ser indio otra vez*. México, Conaculta
- VÁZQUEZ, RODOLFO (2005). "Entre el individuo y la comunidad. Derechos de las minorías étnicas". En Lisbona, Miguel (coord.) *La comunidad a debate*. (pp.239-261). El Colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
- VELÁZQUEZ, VERÓNICA (2019). *Territorios encarnados. Extractivismo, comunalismos y género en la meseta p'urhépecha*. Guadalajara, Jalisco: Cátedra interinstitucional Jorge Alonso, U. de G, CIESAS.
- VENTURA, CARMEN (2010). *Volver a la comunidad*. México, El Colegio de Michoacán.
- VENTURA, CARMEN (2012). "Proceso de autonomía en Cherán. Movilizar el derecho". *Espiral*, vol. XIX(55), pp. 157-176.
- WALZER, MICHAEL (2001). *Las esferas de la justicia*. México, FCE.
- ZÁRATE, JOSÉ EDUARDO (1993). *Los señores de utopía*. El Colegio de Michoacán, CIESAS.
- ZÁRATE, JOSÉ EDUARDO (2011). "Comunidad, reformas liberales y emergencia del indígena moderno. Pueblos de la meseta purépecha (1869-1904)". *Relaciones. Estudios de Historia y sociedad*, no. 125, pp. 17-51.

ANEXO 1

COMUNIDADES INDÍGENAS DE MICHOACÁN EN AUTOGOBIERNO

Hasta el 27 de enero del 2024 son 52 comunidades indígenas en autogobierno. De este total, 8 optaron por convenio formalizado con el municipio, 1 por convenio con el Consejo Mayor de Cherán, 10 transitaron por resolución de tribunales electorales y 33 optaron por el mecanismo que establece la Ley Orgánica Municipal.

VIA PARA EL EJERCICIO DEL AUTOGOBIERNO	#	AÑO	COMUNIDAD	MUNICIPIO	REGIÓN	ORGANIZACIÓN O GRUPO QUE LOS ASESORA	PUEBLOS ORIGINARIOS
1). POR CONVENIO FORMALIZADO CON EL MUNICIPIO	1	2005	Nurio	Paracho	Meseta		Purhépecha
	2	2005	Quinceo	Paracho	Meseta		Purhépecha
	3	2019	Urapicho	Paracho	Meseta	CSIM	Purhépecha
	4	2019	Pomacuarán	Paracho	Meseta		Purhépecha
	5	2020	Cherán Atzicurín	Paracho	Meseta	CE	Purhépecha
	6	2023	Ahuirán	Paracho	Meseta		Purhépecha
	7		Aranza	Paracho	Meseta		Purhépecha
	8		Arato	Paracho	Meseta		Purhépecha
POR CONVENIO FORMALIZADO CON EL CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN	1	2012	Santa Cruz Tanaco	Cherán	Meseta	Fue resultado de un acuerdo político	Purépecha
2). POR RESOLUCIÓN DE TRIBUNALES ELECTORALES (TEPJF o TEEM)	1	2011	San Francisco Cherán	Cherán	Meseta	CE	Purhépecha
	2	2016	San Francisco Pichátaro	Tingambato	Meseta	CE	Purhépecha
	3	2017	Nahuatzen	Nahuatzen	Meseta		Purhépecha
	4	2017	San Felipe de los Herreros	Charapan	Meseta	CE	Purhépecha
	5	2018	Arantepacua	Nahuatzen	Meseta	CE	Purhépecha
	6	2018	Comachuén	Nahuatzen	Meseta		Purhépecha
	7	2019	San Benito Palermo	Los Reyes	Meseta	CSIM	Purhépecha
	8	2019	Santa Fe de la Laguna	Quiroga	Lacustre	CE / CSIM	Purhépecha
	9	2020	Santa María Sevina	Nahuatzen	Meseta	CSIM	Purhépecha
	10	2023	Tarecuato	Tangamandapio	Meseta		Purhépecha

3). A TRAVÉS DE LA LEY ORGÁ- NICA MUNICI- PAL	1	2021	San Ángel Zurumu- capiro	Ziracuaretiro	Meseta	CE	Purhépecha
	2		La Cantera	Tangaman- dapio	Meseta	CE	Purhépecha
	3		San Pedro Ocumi- cho	Charapan	Meseta	CSIM	Purhépecha
	4		Jarácuaro	Erongarícuaro	Lacustre	CSIM	Purhépecha
	5		Turícuaro	Nahuatzen	Meseta	CSIM	Purhépecha
	6		Angáhuán	Uruapan	Meseta	CE	Purhépecha
	7		Janitzio	Pátzcuaro	Lacustre	CE	Purhépecha
	8		Donaciano Ojeda	Zitácuaro	Oriente		Mazahua
	9		Crescencio Morales	Zitácuaro	Oriente		Mazahua
	10	2022	San Juan Carapan	Chilchota	Cañada 11 Pue- blos	CE	Purhépecha
	11		Jesús Díaz Tzirio	Los Reyes	Meseta	CE	Purhépecha
	12		Zacán	Los Reyes	Meseta	CSIM	Purhépecha
	13		Nuevo Zirosto	Uruapan	Meseta	CSIM	Purhépecha
	14		San Francisco Pe- ribán	Peribán	Meseta	CSIM	Purhépecha
	15		Santiago Azajo	Coeneo	Ciénega Zacapu	CE	Purhépecha
	16		Sicuicho	Los Reyes	Meseta		Purhépecha
	17	2023	San Matías El Grande	Ciudad Hi- dalgo	Oriente		Otomí
	18		San Cristóbal	Ocampo	Oriente		Otomí
	19		El Coire	Aquila	La Costa		Nahua
	20		Carpinteros	Zitácuaro	Oriente		Mazahua
	21		Tupátaro	Huiramba	Lacustre		Purhépecha
	22		Isla de Tecuana	Pátzcuaro	Lacustre	CSIM	Purhépecha
	23		Pamatácuaro	Los Reyes	Meseta		Purhépecha
	24		San Isidro	Los Reyes	Meseta		Purhépecha
	25		Los Pozos	Los Reyes	Meseta		Purhépecha
	26		Queréndaro	Los Reyes	Meseta		Purhépecha
	27		La Zarzamora	Los Reyes	Meseta		Purhépecha
	28		San Martín Uren- güitiro	Los Reyes	Meseta		Purhépecha
	29		Santa Rosa	Los Reyes	Meseta		Purhépecha
	30		San Antonio	Los Reyes	Meseta		Purhépecha
	31		San Marcos	Los Reyes	Meseta		Purhépecha
	32		La Tinaja	Los Reyes	Meseta		Purhépecha
	33	2024	Tomendán	Taretan	Meseta		Purhépecha
TOTAL	52						

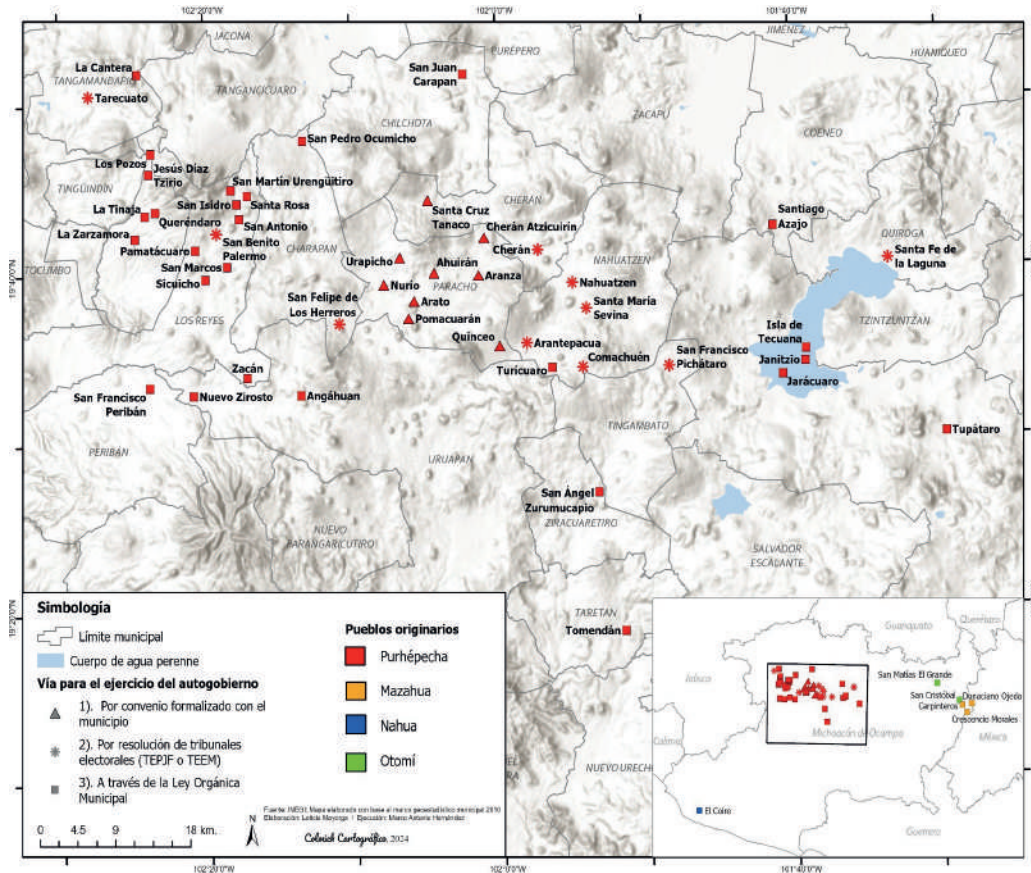
CE = Colectivo Emancipaciones.

CSIM = Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

El listado de comunidades indígenas que ejercen su autogobierno y presupuesto de manera directa no es definitiva ya que continuamente se suman otros pueblos a la defensa de sus derechos.

ANEXO 2

COMUNIDADES INDÍGENAS DE MICHOACÁN EN AUTOGOBIERNO





Imágenes del zapatismo

Images of Zapatismo

Carlos de Jesús Gómez-Abarca

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica,
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (México)

<https://orcid.org/0000-0002-0881-5189>

jesus.gomezabarca@gmail.com

Recibido: 14 de mayo de 2024

Aprobado: 12 de junio de 2024

La importancia de la imagen en la definición cultural de las sociedades contemporáneas es innegable. Sin embargo, su prominencia no siempre conlleva una ampliación de las perspectivas para percibir el mundo, sino más bien un cierto dominio sobre el paisaje iconográfico y una manipulación de la mirada con objetivos comerciales. Como señala Lazo (2007), este fenómeno da lugar a cierta iconografía de la vacuidad, la cual se encuentra completamente subyugada al mercado, desvinculada de los contextos sociales y desprovista de raíces históricas y recuerdos colectivos. Ante esta situación, es esencial plantear interrogantes acerca del significado ético, estético y político de las creaciones visuales.

Esta reflexión inicial nos invita a explorar el vínculo entre información, imagen y poder (Benedicto, 1995; Sartori, 1998), centrándonos especialmente en las imágenes surgidas de, con, desde y para los movimientos sociales. Estas representaciones visuales, imbuidas de un espíritu crítico, constituyen prácticas contrahegemónicas que evidencian los conflictos sociales y proponen alternativas de cambio. De este modo, ponen de manifiesto la forma en que la cultura y el arte se integran en la protesta contemporánea, fomentando la apropiación de espacios públicos, el desarrollo de la conciencia social y la reconfiguración de la memoria colectiva.

Las imágenes generadas por los movimientos sociales son complejas y profundas en su significado. Sus símbolos encierran una amalgama de valores, diagnósticos, distopías, historias, mitos, emociones y utopías, los cuales pueden ser utilizados con propósitos instrumentales, estéticos o afectivos. Estas imágenes desempeñan un papel fundamental en la construcción de identidades y en la difusión de los mensajes dirigidos a diversos medios y audiencias. La influencia

de las nuevas tecnologías en su transmisión es crucial (Della Porta, 2013), especialmente para movimientos como el zapatismo contemporáneo, que han innovado en una variedad de formas de acción colectiva, aprovechando la potencia comunicativa de las redes cibernéticas y las redes globales de activismo.

Aunque se han realizado algunos avances en la investigación sobre la producción visual de los movimientos sociales, aún queda un largo camino por recorrer. En el caso del movimiento zapatista, hay trabajos que ofrecen importantes pistas sobre este tema. Por ejemplo, el ensayo de De Parres (2022) reflexiona sobre el vínculo dialéctico e indisoluble entre el arte y el proyecto político autónomo zapatista. Desde sus inicios, señala De Parres, la celebración y el arte han servido como medios para que los diversos pueblos se conozcan entre sí. A lo largo de los 40 años transcurridos desde la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el arte ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de su sistema de valores para la lucha colectiva, basado en la multiplicidad de símbolos.

Quizá la faceta más explorada del arte sea el uso de recursos literarios en los pronunciamientos. Sin embargo, en la actualidad, se puede observar en los territorios autónomos la práctica de una amplia gama de expresiones artísticas, que van desde la literatura, la música, la poesía, la pintura y la escultura hasta el arte textil, el teatro, el cine y la danza. Durante el período entre 2016 y 2019, las comunidades destacaron con mayor profundidad sus manifestaciones artísticas a través de los festivales CompArte por la Humanidad, donde se abordaron una variedad de temas centrales: el conocimiento ancestral de los pueblos, la resistencia histórica frente a la explotación colonial y las fincas, las historias revolucionarias, las resistencias contemporáneas, las formas de organización, la participación de las mujeres y las múltiples amenazas que enfrentan. A través de un enfoque del arte desde una perspectiva radicalmente distinta, se expresaban denuncias, se exaltaba la resistencia y se reivindicaba la memoria (De Parres, 2022: 18).

En otro estudio, Martí i Puig (2022) ofrece una interpretación del proceso de construcción de la identidad zapatista a través del lenguaje visual plasmado en murales situados en los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas. Según este autor, nos enfrentamos a una “revuelta estética” que puede ser analizada desde sus formas visuales y materiales, sus discursos y su iconografía, así como su reproducción, producción y práctica militante. Considerados como productos culturales, los murales se convierten en portadores de significados y mensajes que se transforman según el espacio donde están ubicados, el tipo de instalación, el material utilizado, la calidad de los elementos, sus creadores y sus procesos de elaboración. Estos murales desempeñan diversas funciones: delimitan territorios, invitan a la contemplación, son objeto de observación y provocan reflexiones en distintos espectadores.

Martí i Puig (2022) llega a la conclusión de que la iconografía zapatista es singular y genuina. Esta reconfigura la identidad revolucionaria oficial y forja una comunidad imaginada zapatista a través de varios elementos: las referencias al mundo precolombino y a la naturaleza, el contraste entre la épica revolucionaria y guerrillera y la sencillez de la vida cotidiana de los miembros de las comunidades en resistencia, así como la representación de los protagonistas, que incluyen tanto íconos del zapatismo como otros personajes clásicos reinterpretados. En esta nueva iconografía, destacan elementos como la mirada, el pasamontañas y la bandera nacional. En lo que respecta a la relación dialéctica entre utopía y distopía, esta se inclina hacia la primera.

En definitiva, los diversos procesos de producción de imágenes en los movimientos sociales constituyen un tema de investigación crucial (Della Porta, 2013). En 2010, esta inquietud me llevó a documentar las manifestaciones visuales callejeras de varios movimientos sociales. Las imágenes que acompañan este breve ensayo foto-etnográfico son ejemplos de estas manifestaciones en distintos formatos, técnicas y materiales, inspiradas en el movimiento zapatista. Fueron capturadas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, un territorio de notable efervescencia social, política y cultural, que ha sido un punto estratégico para la acción y organización de las redes neozapatistas que convergen en los territorios autónomos en rebeldía.

Estas imágenes son creadas por grupos solidarios, simpatizantes y redes de activismo transnacional que transitan por la ciudad o residen en ella. Estas producciones coexisten con consignas y demandas de diversos grupos y movimientos sociales, como denuncias de distintos actores sociales: trabajadores de la educación, campesinos, estudiantes, feministas y ecologistas. En términos de su forma, estas imágenes pueden consistir en textos, imágenes o una combinación de ambos, y se materializan a través de afiches, estenciles y murales comunitarios. Estos elementos se entremezclan con grafitis, arte urbano y diferentes formas de muralismo.

Estas inscripciones suelen realizarse durante las protestas o de forma clandestina, y suelen tener una presencia efímera. Sin embargo, recientemente, obras más elaboradas requieren una aprobación y gestión distintas. Como mencioné en otro trabajo (Gómez-Abarca, 2021), estas obras son portadoras de marcos simbólicos de acción colectiva y constituyen acciones colectivas en sí mismas. Esto implica reconocer que no solo son un producto final, sino que también forman parte de procesos más amplios de protesta, organización y movilización social.

En consecuencia, podemos concluir destacando que, así como la palabra ha desempeñado un papel central en la estrategia de acción del zapatismo contemporáneo, la imagen ha emergido como una dimensión fundamental en la producción cultural, identitaria y política de este movimiento. Este hecho abre

una amplia y necesaria agenda de reflexión e investigación. Por el momento, me complace compartir, en el marco de los 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, algunas pistas que permitan a cada lector y lectora realizar sus propias interpretaciones.

Referencias

- BENEDICTO, JORGE (1995). La construcción de los universos políticos de los ciudadanos, en Jorge Benedicto y María de la Luz Moran (eds.), *Sociedad y política. Temas de sociología política*. Madrid: Alianza.
- DE PARRES, FRANCISCO (2022). *Arte y política en el zapatismo contemporáneo: una relación indisoluble*. Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Cooperativa Editorial Retos; Guadalajara, Jalisco: Cátedra Jorge Alonso: Universidad de Guadalajara.
- DELLA PORTA, DONATELLA (2013). What we can do with visual analysis in social movement studies: some (self) reflections, en *Advances in the Visual Analysis of Social Movements*. Vol. 35, pp. 137-144. Emerald Group Publishing Limited.
- GÓMEZ-ABARCA, CARLOS (2018). La gráfica política y los marcos de acción colectiva en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (2010-2013). *LiminaR*, Vol. 16, Núm. 1, pp. 25-39.
- LAZO, PABLO (2007). La perversión semántica de las imágenes en una sociedad multicultural, en Bolívar Echeverría y Diego Lizarazo (eds.), *Sociedades icónicas. Historia, ideología y cultura en la Imagen*. México: Siglo XXI.
- SARTORI, GIOVANNI (1998). *Homo Videns. La sociedad teledirigida*. México: Taurus.



Fotografía 1. Carlos de Jesús Gómez-Abarca



Fotografía 2. Carlos de Jesús Gómez-Abarca



Fotografía 3. Carlos de Jesús Gómez-Abarca



Fotografía 4. Carlos de Jesús Gómez-Abarca



Fotografía 5. Carlos de Jesús Gómez-Abarca



Fotografía 6. Carlos de Jesús Gómez-Abarca



Fotografía 7. Carlos de Jesús Gómez-Abarca



Fotografía 8. Carlos de Jesús Gómez-Abarca



Fotografía 9. Carlos de Jesús Gómez-Abarca



Fotografía 10. Carlos de Jesús Gómez-Abarca



Fotografía 11. María de Lourdes Morales Vargas



Fotografía 12. Fabián Vidal



Fotografía 13. Fabián Vidal



Fotografía 14. Carlos de Jesús Gómez-Abarca.



Fotografía 15. Carlos de Jesús Gómez-Abarca



Fotografía 16. Carlos de Jesús Gómez-Abarca



Fotografía 17. Carlos de Jesús Gómez-Abarca



Reseña del libro: AGUILAR GARCÍA, FRANCISCO JAVIER Y TORRES-RUIZ, RENÉ (Coords.) (2022). Acciones colectivas en el campo global y regional, México, Universidad Iberoamericana-Juan Pablos Editor

Book review: AGUILAR GARCÍA, FRANCISCO JAVIER AND TORRES-RUIZ, RENÉ (Coords.) (2022). Collective actions in the global and regional field, Mexico, Universidad Iberoamericana-Juan Pablos Editor

Eduardo Torres Alonso

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica,
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

<http://orcid.org/0000-0002-0868-2240>

etorres.alonso@gmail.com

Recibido: 14 de mayo de 2024

Aprobado: 12 de junio de 2024



Francisco Javier Aguilar García
René Torres-Ruiz
(coordinadores)

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
JUAN PABLOS EDITOR

El tema de los movimientos sociales aparece de forma recurrente en la agenda de investigación de las ciencias sociales; en particular de la sociología y la ciencia política. Acaso, no podía ser de otra manera en tanto que ellos son expresión de contradicciones sociales que derivan en acciones de índole contencioso que modifican las interacciones del sistema social y sus subsistemas (político, económico, cultural, etc.), con consecuencias esperadas e inesperadas, duraderas o no, en fin, claramente visibles o no visibles (López Leyva, 2012: 160).

Por ello, no es extraño que aparezcan libros que retomen y actualicen la discusión teórica sobre el tema o aterricen algunos de sus conceptos (los operacionalicen). Este es, precisamente, el objetivo de *Acciones colectivas en el campo global y regional*: analizar y discutir conceptos y categorías sobre los movimientos sociales a la luz de los procesos contemporáneos de cambio, sin que se esté exento de confrontaciones, en las dimensiones planetaria, regional y local.

La obra coordinada por Francisco Javier Aguilar García y René Torres-Ruiz, investigador del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de la Universidad Iberoamericana, respectivamente, reúne una decena de colaboraciones que examinan, cada una con sus particularidades teóricas e instrumentos metodológicos, distintos aspectos en los que los movimientos sociales son el eje explicativo; a saber: el desgaste de la democracia, el medio ambiente, el movimiento zapatista, las transformaciones políticas de Europa, entre otros.

La estructura del libro permite una lectura secuencial de los capítulos ya que estos están agrupados por contenido temático. Se divide en tres grandes secciones, en la primera parte titulada “Apuntes sobre la lógica de los movimientos sociales” aparecen cuatro capítulos: “Acerca de los nuevos movimientos sociales en América Latina”, “Los movimientos sociales ante el desgaste de la democracia y la política”, “Movimientos socioambientales en México” y “Movimientos sociales: agentes de otras culturas de la educación”. El primero de ellos está firmado por Javier Aguilar y Roberto Zepeda Bermúdez quienes realizan un examen de la literatura existente sobre movimientos sociales. Se antoja –y es– una tarea mayúscula, por lo que hacen un necesario un proceso de delimitación: registran que las primeras sistematizaciones al respecto ocurren en el momento de la institucionalización de la sociología como disciplina, advierten la influencia del neoliberalismo en la caracterización de los movimientos y hacen énfasis en su presencia en la región latinoamericana. Todo esto para describir y analizar las características más subrayadas de las teorías, a su juicio, con mayor significación para estudiar los movimientos sociales en el subcontinente. En este capítulo se destaca la predominancia de los movimientos populares, la relevancia de las pastorales católicas y la existencia de movimientos indígenas como actores primordiales de los procesos contenciosos. Los autores, además, resaltan la necesidad de la “articulación transescalar” frente a la monocultura de la escala para dar cuenta de las articulaciones, influencias, dinamisismos y formas de organización de los movimientos en América Latina. Los teóricos con los que Aguilar y Zepeda dialogan muestran una época del pensamiento social (Munk, 2023) y la teoría política latinoamericanos (Covarrubias, 2022): Borón, Gilly, González Casanova, de Sousa, Zavaleta.

El siguiente capítulo, también de Aguilar García, estudia algunos movimientos sociales que han tenido como objetivo la crítica a la democratización y a sus resultados institucionales, mostrando una distancia, cuando no una falta de correspondencia, entre lo alcanzado y los intereses de la sociedad y la sensación de representación efectiva entre la ciudadanía y la clase gobernante. El autor eligió la idea de los movimientos sociales de Tarrow (1997) como desafíos colectivos impulsados por actores que comparten objetivos y mantienen redes de solidaridad, lo que, a su vez, expresa relación y oposición entre ellos y las autoridades, como su marco explicativo de las estructuras de las oportunidades políticas. El capítulo, con el estudio de cuatro países (Chile, Brasil, Argentina y México), sostiene que los movimientos sociales cuestionaron y fragmentaron la narrativa impuesta por la democracia liberal y el neoliberalismo económico, basados en la igualdad y la libertad individuales.

María Fernanda Paz Salinas es autora del capítulo que sigue destinado a estudiar los movimientos socioambientales en México. Para ello, recurre a cuatro puntos: “desde la conflictividad que les da origen; desde su carácter socioambiental, anticapitalista y territorial; desde los discursos que movilizan y les dan identidad y, por último, desde los sentidos de trascendencia que se construyen desde la acción colectiva y que buscan impactar tanto en el marco político nacional, como en los ámbitos de la micropolítica” (Paz Salinas, 2022: 75). Ella persigue caracterizar este tipo de movimientos sin soslayar las diferencias que se registran entre los existentes en América del Norte y Europa. Uno de los conceptos centrales que se utilizan es el de conflictos socioambientales que se pueden definir como confrontaciones entre grupos por el control del ambiente. Los casos de conflictividad que se registran son: proyectos extractivos (minería, petróleo, gas); proyectos de generación y distribución de energía (presas hidroeléctricas, parques eólicos, plantas termoeléctricas, construcción de gasoductos); proyectos de construcción de infraestructura de comunicaciones (puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas, libramientos) y de infraestructura hidráulica (presas de almacenamiento y acueductos); proyectos de desarrollo urbano y de disposición de residuos (centros comerciales y deportivos, desarrollos inmobiliarios, gasolineras, privatización de espacios públicos, rellenos sanitarios, depósitos de residuos peligrosos); proyectos agroindustriales (siembra de soya y granjas de puercos), y proyectos de desarrollo turístico.

Frente a estos, la movilización socioambiental está presente, aunque no de forma homogénea, pero comparte un conjunto de particularidades: carácter socioambiental de las demandas, con un sentido anticapitalista y antipartidista; naturaleza y proyección socioterritorial; la narrativa que construyen y los sostiene, y los procesos de confrontación hacia fuera y de reflexividad y reformulación hacia adentro. La autora hace una aseveración relevante:

Aunque son movimientos anticapitalistas, no son movimientos de clase como el movimiento obrero, o el movimiento de trabajadores agrícolas, con demandas gremiales. Tampoco son movimientos revolucionarios, en el sentido estricto del término; es decir, no persiguen la toma del poder ni la instauración de otro régimen político. Se oponen y resisten al impacto neoliberal que se expresa a través de procesos de ocupación y despojo del territorio, de imposición de un modelo de vida articulado en torno al consumo, así como de destrucción y mercantilización de los bienes naturales. Defienden formas de vida y de organización societaria particulares, en las que la sociedad y el ambiente forman un *continuum* [...] (Paz Salinas, 2022: 93).

Juan Manuel Gatica es autor del capítulo que cierra esta primera parte. Con el auxilio de Pierre Bourdieu explica los movimientos sociales como agentes que, con un *habitus* pedagógico, poseen y difunden formas de educar que son diferentes a la hegemónica (del Estado y del capital). Hay, pues, un interés en mostrar procesos de educación alternativos a los que se originan y diseminan desde el ente estatal. El objetivo es claro: hacer visibles otras maneras de educación, más allá de subrayar las prácticas formativas, de suyo relevantes, de los movimientos sociales. Para esto, se presentan las experiencias de cuatro movimientos sociales que han creado espacios educativos: el Movimiento de los sin Tierra (MST), de Brasil; el Movimiento de Interculturalidad, en Ecuador; la Escuela Autónoma Zapatista, en Chiapas, y el proceso constitutivo de la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur), en Guerrero, México. Estos y otros movimientos sociales pueden verse como agentes pedagógicos, dice el autor, y dan cuenta de procesos de acompañamiento para recuperar la cultura e identidad, fortalecen la autonomía y se distancian de la visión monista de la educación.

La segunda parte se denomina “Los movimientos sociales en los niveles regional y global” y reúne los capítulos “Los movimientos sociales ante el poder y la política. Grecia y España en el contexto de la crisis europea” y “Algunas reflexiones sobre movimientos sociales”. Carlos Ballesteros observa los procesos de aparición de manifestaciones de índole popular, con identidad, presencia y sentido propio, en Grecia y España, describiendo las trayectorias políticas relacionadas con esos movimientos, buscando definir las acciones de protesta en esos territorios y sus repercusiones en la democracia, en un contexto de crisis y de presencia del populismo. Este capítulo analiza el contexto y los resortes que dieron origen a las manifestaciones, resultado de las crisis económica y política griega y española, para luego dar paso al estudio y descripción de las trayectorias que tomaron aquellas para devenir en acciones de protesta masivas. El concepto populismo es fundamental para el autor en la medida que orienta la identificación de conductas y argumentos de los protagonistas, aunque él mismo reconoce que no existe una teoría acaba del mismo.

María Lucero Jiménez Guzmán es la autora del segundo capítulo que se reúne en esta sección. Su trabajo engarza, con solvencia, la discusión teórica y el estudio de caso. Aquí, se describen y discuten algunas de las características de

los movimientos sociales y se señala su importancia. Es de destacar que en este trabajo aparece un actor que no es mencionado en otras partes de la obra colectiva: las juventudes, en particular, las mujeres jóvenes como protagonistas de los movimientos sociales. Los elementos que la autora considera como constitutivos del movimiento social son: 1. Sociedad como actor social, contexto y territorio; 2. Antagonista, entidad social o política que tiene incidencia directa o indirecta contra el movimiento social; 3. Conflicto, interacciones sociales confrontadas; 4. Acción colectiva, supone la negociación de un conflicto que se construyó frente a un agravio; 5. Solidaridad, en su sentido de apoyo, compromiso y reconocimiento de las necesidad de “otros en exclusión”; 6. Identidad, como sentido de filiación, pertenencia y grupo social; 7. Sistema de creencias o creencia generalizada; 8. Límites estructurales, como obstáculos por condiciones inherentes a una sociedad que dificulta la movilización de recursos; 9. Agravio, y 10. Espectadores, como observadores o testigos de la causa que reivindica el movimiento social, pero sin actuación alguna (Jiménez Guzmán, 2022: 168). Sobre los movimientos sociales de mujeres jóvenes, Jiménez destaca lo ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma de México en donde estudiantes de facultades y escuelas protestaron en contra del hostigamiento y acoso sexuales, impactando en la modificación de la legislación universitaria y en la creación de dependencias para atender estos problemas.

Finalmente, la tercera parte “Los movimientos sociales en el nivel local” se compone por cuatro capítulos: “México: movimientos sociales prodemocráticos”, “Movilizaciones ciudadanas como experiencias de rendición de cuentas social en la Ciudad de México: los casos de la Autopista Urbana Oriente y el Tren Interurbano México-Toluca”, “Movimiento zapatista, sujeto democrático-político y mandar obedeciendo indígena: 1970-1994” y “El ‘proceso de cambio’ en Bolivia, ¿un proyecto político indigenista?”.

René Torres-Ruiz, autor del capítulo que abre esta tercera y última sección del libro analiza los movimientos sociales de la época de la postransición política (a partir del año 2000), destacado la capacidad de resistencia en sus repertorios de movilización y en la manera en que se han topado con poderes extralegales o fácticos y con un Estado que es poco receptivo a la profundización de la democracia, más allá de los ámbitos formales (procedimentales). Un hecho interesante que destaca el autor es que los movimientos sociales registrados entre 2000 y 2017 no han afectado radicalmente las bases del modelo económico de perfil neoliberal existente en México, de forma que su impacto en las políticas públicas no ha sido el esperado. Este capítulo hace recordar un trabajo de Tilly (2022 [2008]) en el cual él estudia procesos políticos mexicanos y ambos se complementan. Asimismo, dice Torres-Ruiz, el relevo generacional de los participantes en estos movimientos es un elemento que debe de ser considerado en la medida en que dicho cambio muestra una tradición movimientista en México, que reúne a personas que habitan en las ciudades y las

zonas rurales, que son de clases medias y de clases deprimidas, en fin, sujetos –más que electores– que ven con incertidumbre el futuro.

Jesús Morales, en su capítulo dedicado a la rendición de cuentas social en la Ciudad de México señala que las autoridades piensan que la vigilancia y la rendición de cuentas social es un riesgo para concretar proyectos e inversiones, considerando, de manera equivocada, que la ciudadanía es un obstáculo para la administración pública. Por el contrario, la sinergia que puede darse de la unión entre autoridades y ciudadanía constituye una fuente adicional de legitimidad en el ejercicio de la función pública. El trabajo explora los episodios registrados en la relación entre actores gubernamentales y ciudadanos vinculados con la Autopista Urbana Oriente y el Tren Interurbano México-Toluca. Se trata de un estudio en torno a las movilizaciones contra megaproyectos en donde las autoridades son omisas e ignoran a la ciudadanía. Se destaca la ausencia de mecanismos formales de diálogo y negociación entre ambas partes, lo que hace necesaria la institucionalidad democrática que de cauce a este tipo de demandas. Este capítulo, al abordar aspectos de sustentabilidad, dialoga con el escrito por Jiménez Guzmán.

Hugo Santamaría, por su parte, analiza el movimiento zapatista como democrático-político, a partir de estudiar a la Asociación Rural de Interés Colectivo-Unión de Uniones (ARIC-UU) y la relación que tiene con el mandar obedeciendo y sus procedimientos comunicativos-deliberativos-decisionarios. El componente histórico de este capítulo es notable y gracias a él se da cuenta de los procesos políticos y sociales previos al estallido del movimiento del Ejército Zapatista; por ejemplo, se describe la formación política-cultural de clase hecha en las comunidades indígenas durante el proceso político-organizativo en Las Cañadas, buscando impactar en estructuras y relaciones de poder de naturaleza caciquiles hacia objetivos revolucionarios: la “palabra de Dios”, como parte de la teología de la liberación; el neoindianismo radicalizado y el “acuerdo tradicional indígena” que daba una nueva fisonomía a la comunidad y a la identidad étnica; el maoísmo de la Unión del Pueblo y Política Popular, y el proyecto político-militar marxista-leninista, insurreccional y guevarista de las Fuerzas de Liberación Nacional y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este trabajo hace una lectura contemporánea de actores y coyunturas que enfrentaron (y enfrentan) las comunidades indígenas del sur de México, en particular, las chiapanecas, en un contexto de procesos políticos que confrontan mecanismos autonómicos y soberanos, aspectos que, junto con los políticos (Solís Cruz, 2017) y culturales siguen siendo de interés más cuando han aparecido otros agentes en disputa, como el crimen organizado. Finalmente, Marianela Agar Díaz estudia las trayectorias conservadoras del gobierno de Evo Morales en Bolivia. Algo que resultó contradictorio con relación a su planteamiento gubernamental original que iba en la dirección de sustituir al Estado neoliberal. Para lograr lo anterior, la autora analiza la visión utilitarista del indianismo y la articulación estratégica del indi-

genismo institucionalizado y los discursos de ambos. La conclusión que ofrece es importante en tanto que sostiene que la propuesta y lucha de un Estado indio y el proyecto político indianista fueron eliminadas en las prácticas estatales. Lo que queda, entonces, es una lógica instrumentalizada de las cosmovisiones que sustenta las prácticas neoextractivas.

Acciones colectivas en el campo global y regional es un libro a varias voces en donde cada una posee una formación, está situada en un lugar en el mundo y posee distintas experiencias, pero coinciden en una preocupación: revitalizar el debate académico en torno a los movimientos sociales. En un contexto de procesos de autocratización, de democracias iliberales o desdemocratización (Tilly, 2010), analizar las acciones colectivas, los procesos organizativos y los repertorios de acción viene a ser fundamental para que las ciencias sociales mantengan su capacidad explicativa y ayuden a crear otros futuros, con menos incertezas y mayor justicia.

Referencias

- COVARRUBIAS, ISRAEL (Coord.) (2022). *La teoría política en América Latina. Un mapa de navegación a través de sus cartógrafos*. México: Universidad Autónoma de Querétaro-Tirant lo Blanch, 383p.
- JIMÉNEZ GUZMÁN, MARÍA LUCERO (2022). “Algunas reflexiones sobre movimientos sociales”. En Francisco Javier Aguilar García y René Torres-Ruiz (Coords.). *Acciones colectivas en el campo global y regional* (pp. 163-182). México: Universidad Iberoamericana-Juan Pablos Editor.
- LÓPEZ LEYVA, MIGUEL ÁNGEL (2012). “Los movimientos sociales y su influencia en el ciclo de las políticas públicas”. *Región y Sociedad*, Año XXIV, Núm. 55, pp. 159-197.
- MUNK, GERARDO Y TANAKA, MARTÍN (2023). *El pensamiento sociopolítico latinoamericano. Ciencias sociales e intelectuales en tiempos cambiantes*. Argentina: Prometeo, 474p.
- PAZ SALINAS, MARÍA FERNANDA (2022). “Movimientos socioambientales en México”. En Francisco Javier Aguilar García y René Torres-Ruiz (Coords.). *Acciones colectivas en el campo global y regional* (pp. 75-103). México: Universidad Iberoamericana-Juan Pablos Editor.
- SOLÍS CRUZ, JESÚS (2017). “Ciudadanía y democracia cultural. Los desafíos de la *culturalidad* política en Chiapas”. *Revista Pueblos y Fronteras Digital*, Vol. XII, Núm. 23, pp. 1-21. <https://doi.org/10.22201/cim-sur.18704115e.2017.23.280>

TARROW, SIDNEY (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. España, Alianza Editorial, 369p.

TILLY, CHARLES (2022). “Acciones contenciosas”. En Ernesto Castañeda y Cathy Lisa Schneider (Eds.). *Charles Tilly sobre violencia colectiva, política contenciosa y cambio social. Antología selecta* (pp. 167-177). México: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

TILLY, CHARLES (2010). *Democracia*. España: Akal Ediciones, 288p.



Reseña del libro: DANIEL VILLAFUERTE SOLÍS Y MARÍA DEL CARMEN GARCÍA AGUILAR. 2021. Los avatares de Chiapas. Proyectos, conflictos, esperanzas. CESMECA-UNICACH. Tuxtla Gutiérrez, México

Book review: DANIEL VILLAFUERTE SOLÍS AND MARÍA DEL CARMEN GARCÍA AGUILAR. 2021. The Avatars Of Chiapas. Projects, Conflicts, Hopes. Cesmeca-Unicach. Tuxtla Gutiérrez, Mexico

Darinel Genaro Gutiérrez López

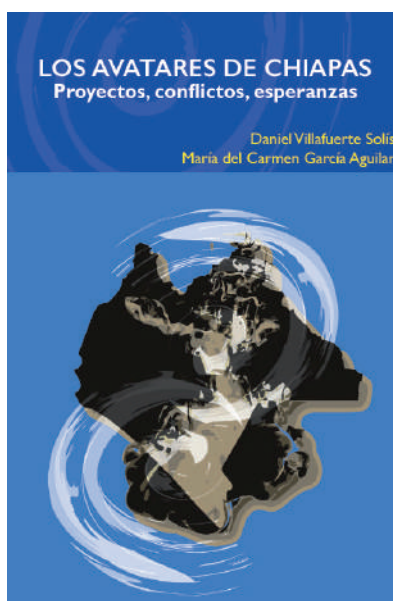
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica,
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

<https://orcid.org/0009-0007-0750-0138>

darinel.yajalon@gmail.com

Recibido: 29 de mayo de 2024

Aprobado: 12 de junio de 2024



Los avatares de Chiapas. Proyectos, Sueños, Esperanzas, es un libro escrito por los doctores: Daniel Villafuerte Solís y María del Carmen García Aguilar; nos ayuda a comprender el complejo fenómeno social de Chiapas: su formación política y productiva; las contradicciones internas abigarradas por su historia; y el lugar que ha ocupado dentro del concierto nacional e internacional. En la introducción nos muestran un estado rico y megadiverso, productor de café, electricidad, gas, petróleo y otros elementos útiles para la industria, pero deudora de justicia social para sus campesinos.

En el primer capítulo, los autores proponen seis pilares para entender la naturaleza y complejidad de Chiapas: 1) la perspectiva histórico-estructural, 2) la economía política, 3) el sistema mundo, 4) la geopolítica, 5) la ecología política y 6) la teoría política.

La perspectiva histórico-estructural, nos permite ver las dinámicas que se construyen en espacios diferenciados y, al mismo tiempo, congruentes, como un rompecabezas ordenado; implica observar la historia dentro de las facetas del proceso de cambios de un sistema en el que participa la estructura; los antecedentes de esta perspectiva la encontramos cuando Marx analizó al capitalismo y sus raíces históricas, cuyo proceso estuvo relacionado a la praxis del cambio social. La estructura económica de Chiapas está relacionada al papel que jugaron sus distintas regiones para el mercado nacional e internacional desde su subordinación a Guatemala; con la anexión a México, el estado tuvo desencuentros con el liberalismo mexicano, esto permitió la permanencia de la vieja estructura social y territorial que se reflejó en sus políticas laborales.

Chiapas es parte del sistema mundo desde las relaciones capitalistas que funcionaban en la colonia; jugó un papel importante dentro del orden “centro-periferia” del mercado, en las relaciones “diacrónico-sincrónicas” del desarrollo global; durante la colonia, gran parte de su economía se dictó desde la capital guatemalteca; en México, su centro está ligado a las políticas de desarrollo nacional del nuevo estado receptor. Como heredera de las relaciones laborales chapinas su proceso de mexicanización tuvo que ser negociado, resultando en una relación peculiar en la propiedad de la tierra que detuvo los cambios revolucionarios de 1910, permitiendo la conservación de cacicazgos que permanecen hasta nuestros días, no obstante, el territorio ha sido adecuado de distintas formas al mercado internacional, desde la cosecha del hule hasta la formación de fincas cafetaleras con capital alemán y norteamericano.

La mirada de la geopolítica y geoeconomía, nos ayudan a entender la subordinación de Chiapas a los designios del gobierno federal. Su condición de periferia definió también su papel dentro del concierto económico nacional. La dependencia presupuestal del estado lo coloca en una posición de desventaja. En lo político imperan los partidos nacionales sin que existan atisbos de los locales, y cuando estos han existido, no han alcanzado el poder si no fuera por las relaciones construidas desde el centro.

Para Villafuerte y Aguilar, la economía chiapaneca no puede pensarse sin la frontera que comparte con Guatemala, a esta le toca ser de las más abandonadas del país, con áreas de ingobernabilidad donde germinan y se desarrolla todo tipo de formas de corrupción y crimen. La condición de Chiapas como vecino guatemalteco ha provocado que en la frontera se desarrolle un comercio bilateral peculiar. Miles de trabajadores cruzan al año para trabajar en temporada de

cosecha, otros se emplean en la construcción; miles han hecho su vida en algún municipio; el Estado se ha convertido en un elemento de reproducción para las familias guatemaltecas, por lo que la migración se ha constituido como algo aspiracional que se alienta.

La ecología política nos ayuda a entender el papel del estado como productor de frutas y granos, y como proveedor de minerales. Las empresas mexicanas, canadienses y chinas participan en la explotación del subsuelo para la generación de riqueza: la concesión de barita en el municipio de Chicomuselo o la extracción de Titanio en Acocoyagua, el proyecto hidroeléctrico de Chicoasén II y la producción de una serie de represas sobre el río Usumacinta, el diseño de las zonas económicas especiales, la construcción del puerto Chiapas, la supercarretera que conecta a Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de las Casas, y el ramal del tren maya que llegará hasta Palenque, son ejemplos de proyectos que han tenido, tienen y tendrán un impacto ecológico. Este panorama está constituyendo conflictos y disputas, al mismo tiempo que se reconfigura una contra geografía en el estado.

La perspectiva política nos ayuda a dar cuenta de lo conservadora que es la política en América Latina. Desde la conformación de independencias, la élite vio la necesidad de desarrollar un marco político que les permitiera existir dentro del sistema con una concepción propia del poder y el dinero; las nuevas naciones, surgieron con una división social que fortaleció instituciones morales, sociales y jurídicas que establecían frenos al poder, al mismo tiempo que orientaban su ejercicio hacia elementos que no se relacionaran con el dinero, de ahí el fortalecimiento de la clase media como receptáculo de planes de profesionalización y de desarrollo moral que impidieran el viraje a la riqueza, que podría corromper un orden donde los privilegios ya estaban ocupados. La clase media se convirtió en el conducto por el cual las élites se comunican con las masas, a quienes les fue vendida la idea de la sociedad democrática, evitando ideologías peligrosas.

En el segundo capítulo los autores nos muestran los cambios que han sucedido en el ámbito económico estatal. Chiapas pasó de una economía preponderantemente agropecuaria a una centrada en el comercio y los servicios, con la paradoja de que en el campo habita el 50% de la población del estado y el 30% de la población ocupada (INEGI, 2019), esto ha provocado presión sobre la tierra como medio de supervivencia. Existen ciudades, pueblos y sectores productivos dirigidos solamente a los servicios, estos se fortalecieron en la última década; se refleja en el abandono del aparato productivo y de transformación.

El Chiapas corrupto, es el estado hundido en el dispendio de gobiernos que dificultan su desarrollo; se ha convertido en un reto para la cuarta transformación, no solo por su atraso económico, sino también político; su situación solo refleja el corpus capitalista que se mueve dentro del mundo actual. El individualismo, el hiperconsumismo que fetichiza a las mercancías, aunados al posicionamiento

del dinero como el medio que *todo lo resuelve*, son los principales causantes de la obnubilización de la conciencia humana; se trata de una cultura donde la desigualdad pareciera algo natural, donde la miseria y la opulencia conviven bajo una lógica construida desde la historia de la formación de las élites, la ambición desmedida pareciera una impronta de este siglo. Los diez municipios más pobres de Chiapas están en la región indígena y sobrepoblada de los altos, son los mismos lugares donde la delincuencia y los movimientos sociales se presentan con más fuerza, donde los índices alimenticios son los más bajos y se dejan ver grupos armados y paramilitares atemorizando a la población. Parafraseando a Gunderfrank, los autores recuerdan que no es el pasado económico y la historia social lo que resulta en subdesarrollo, sino que el subdesarrollo es generado por el mismo proceso de desarrollo económico.

El capítulo tres nos muestra al mundo rural como un campo de batalla, en él convergen diversas organizaciones e instituciones que han hecho de la ruralidad y la etnicidad su estandarte. De ahí surgió, en 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mostrando las contradicciones profundas y los agravios históricos del mundo rural chiapaneco que el embate neoliberal estaba agravando.

En Chiapas predominó el latifundio como modelo de desarrollo acompañado de una clase terrateniente cuyo poder estuvo ligado a lo político. Durante el siglo XX, la ínfima reforma agraria no estuvo acompañada de proyectos productivos que permitieran al campo hacer frente a la caída de los precios de los productos que trajo la inserción del neoliberalismo, a estos se sumó la desarticulación de las instituciones que poyaban la agricultura, que se tradujo en la caída de la producción y la pérdida de soberanía alimentaria.

La nueva realidad del campo chiapaneco, se fue dibujando de las adecuaciones del campesino para insertarse a la lógica que desarticulaba su mundo; los hijos, que antes se criaban como agricultores, ahora es necesario que asistan a la escuela; se convirtieron en taxistas, en maestros rurales, comerciantes, migrantes, obreros con patrón y un largo etcétera que ha hecho surgir a una rururbanidad que solo muestra el fracaso de las políticas neoliberales. La nueva ruralidad que hoy se vive, dista mucho de ser una mejor ruralidad, pues los problemas de pobreza, violencia, desigualdad, injusticia, exclusión social y otros, persisten como síntomas de una enfermedad que instaló el germen del individualismo en el campesinado.

En el cuarto capítulo, los autores abordan lo referente a los desafíos de la cuarta transformación y los actores de la política local; nos recuerdan que las élites en México tienen la capacidad de dirigir los rumbos de la nación; las hay de dos tipos: los que conjuntan poder político y dinero, y los que conjuntan cultura y liderazgo, ambos confluyen en un pensamiento estatista-societal que

pugna por fundar el estado desde distintos matices; Los agentes del proyecto de nación desde el pueblo y para el pueblo pugnan por la reconstrucción de la democracia liberal, tratando de buscar un equilibrio con los conservadores. En la historia del país han surgido intelectuales que han pugnado por fortalecer la cultura para develar las capacidades, aspiraciones, vida y problemas propios del pueblo, aludiendo como necesaria la promoción de la cultura de élite, para evitar que el pueblo adquiere un carácter de masas. El segundo tipo ya se ha mencionado antes; en Chiapas, la masificación del pueblo ha creado un lenguaje que legitima subjetivamente el tránsito de la relación patronal entre el ladino que se siente diferente del indito/indio/campesino/huarachudo, tornando en relaciones paternalistas de los primeros hacia los segundos. En la historia de la tierra y el poder se imbrican haciendas religiosas, mestizas de impronta colonial, finqueros extranjeros, porfiristas y nacionalistas, que han dominado en distintos espacios del estado.

El pueblo es la masa a la que se le desprecia y se le teme, las distintas fuerzas políticas están conscientes del poder que estas tienen para cambiar el orden social, desde su capacidad de cohesión y articulación a partir de un mismo discurso; en la clase política existe una fobia oculta en las acciones que los llevan a buscar el voto de las masas, como un mal con el que se tiene que compartir parte las decisiones, para guiar una finca privada.

Los retos de la cuarta transformación en Chiapas son peculiares, se enfrenta a una crisis de la política, de la democracia representativa, de las élites y de las masas ciudadanizadas y decantadas en el sistema de partidos. La crisis de la democracia deviene de la contradicción entre lo que privilegia el bien común, como sustento de obediencia a la autoridad, y lo que potencia la vida privada y social.

En el capítulo cinco, los autores nos dicen que las comunidades no son entidades armónicas, ajenas, indiferentes o del todo resilientes a los embates del neoliberalismo. Socavadas las instituciones que procuraban los acuerdos internos; sumidos en la pobreza, la exclusión y conflictividad, los desencuentros con otras comunidades empobrecidas se hacen presente; al interior mismo suceden desacuerdos que han derivado en violencia, desplazamiento y conflictos por el territorio.

La tierra es ese elemento que apasiona, que alimenta, que sirve para palear las necesidades de las familias, la posesión de esta siempre ha sido motivo de conflicto, el reparto agrario detenido por la contrarrevolución, encontró un nuevo aliento en la invasión de ranchos después del 94, los autores comentan que se llegaron a invadir hasta 200 mil hectáreas costando vidas y décadas de lucha, mermado recursos y cansando a las generaciones campesinas, y sin embargo, el desplazamiento de indígenas no se ha detenido; otros conflictos motivados por la tierra se han hecho sentir en los últimos años, se acusa al Estado de promover la

propiedad privada en detrimento de los ejidos, y el Estado aduce la existencia de fundos legales desde tiempos de Lázaro Cárdenas.

La pobreza en los municipios de Chiapas ha sido factor del aumento paulatino de los presupuestos para su desarrollo, esto ha venido acompañado de luchas por el poder municipal que se ha reflejado en violencia, que ha costado el puesto y la vida a presidentes municipales y la paz para la población en general. Ante la tónica del abandono de seguridad que sufre el estado y por la violencia intensificada por el crimen organizado, muchos pueblos han optado por hacer justicia por propia mano linchando a delincuentes y, en muchas ocasiones, a policías que ligan con prácticas criminales, las formas van desde los golpes hasta prenderles fuego en las plazas públicas.

Pareciera que los municipios más pobres se encuentran sumidos en un espiral de violencia: la pobreza produce el aumento del presupuesto público, esto lleva tensiones políticas aunadas a tensiones territoriales ya existentes, que derivan en desplazamientos producidos por grupos armados. En el mapa del estado y sus regiones de conflicto (P. 249), vemos que coinciden con lugares donde el EZLN mantiene presencia.

Pareciera que la mercantilización de la vida, la pobreza del campo y el oportunismo político han fomentado las diferencias sociales y económicas, que han derivado en el manejo caciquil del poder, que culminan en conflictos y violencia, y en una tensión constante. El Estado, por su parte, ha carecido de programas que atiendan los conflictos, su función ha sido la de administrar la pobreza.

Finalmente, la lectura de este libro es necesaria para entender los tiempos políticos que se comienzan a dibujar en México y Chiapas, los espacios que ocupan las élites y los grupos sociales subordinados, así como los problemas sociales que son parte de la agenda de los discursos sobre la gobernanza futura del estado.

Año 10, vol 10, Núm. 20 julio - diciembre 2024 | ISSN: 2448-5241

Antrópica

Revista de Ciencias Sociales y Humanidades



EDITORIAL

Gabriel Angelotti Pasteur

Antrópica: 10 años de compromiso con la divulgación y difusión de la ciencia

ARTÍCULOS ACADÉMICOS

Alejandra Contreras Calcáneo

Historia transnacional e historia transimperial: dos enfoques para contribuir a la historia global

Carlos de Jesús Gómez-Abarca

Radiografía de la juventud en Chiapas. Problemáticas, transformaciones y desafíos trazados desde las ciencias sociales

Francisco Javier Beltrán Cabrera

“Yo soy el niño Guy”: un sor juanista en la Facultad de Humanidades

Antonio de Jesús Nájera Castellanos

Tojolabales, fauna y confesionarios del siglo XVIII: una mirada sociohistórica

Jorge Alejandro Laris Pardo

La divulgación histórica en YouTube y su papel en la formación de identidades colectivas en un México pluricultural

Marianela Gamboa

La(s) experiencia(s): cuerpo y política en la investigación feminista antiextractivista

LEGADO ANTROPOLÓGICO

Andrea Cristina Moctezuma Balderas

El legado etnológico de Heidi Chemin Bassler sobre el pueblo xi'úi (Pame) septentrional

DOSSIER

Héctor Ignacio Martínez Álvarez

Presentación dossier:

La noción de crisis: teoría y política

Gastón Ángel Varesi

Crisis, hegemonía y relaciones de fuerzas. Del contexto latinoamericano al caso de Argentina en el siglo XXI

Esteban Torres

La sociedad mundial poscolonial: una aproximación

Gabriel Pérez Pérez y Manuel J. Rocha Pino

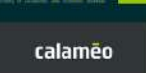
La centralidad del conflicto en el Estrecho de Taiwán en la relación Estados Unidos-China durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021): hacia la Cuarta crisis del Estrecho

Irlanda Libertad Mendoza Pineda

La doble emergencia en la Ciudad de México durante el COVID-19: la alimentario-nutricional y la sanitaria

Héctor Ignacio Martínez Álvarez

La crisis en el sistema de dominación en América Latina: el agotamiento del vigente patrón de reproducción del capital y la derrota del régimen de la transición a la democracia



Contacto: revista.antropica@gmail.com
Disponible en: www.antropica.com.mx